



UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA



EMPRESAS, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y POSCONFLICTO EN COLOMBIA

CARLOS ARTURO TÉLLEZ BEDOYA
COMPILADOR



**UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA**



EMPRESAS, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y POSCONFLICTO EN COLOMBIA

CARLOS ARTURO TÉLLEZ BEDOYA
COMPILADOR

**UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, BOGOTÁ Y
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN**



**EMPRESAS, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
POSCONFLICTO EN COLOMBIA**

© Carlos Arturo Téllez Bedoya (COMPILADOR)

© Editorial Bonaventuriana, 2018

Universidad de San Buenaventura

Coordinación Editorial, Bogotá

Carrera 8 H n.º 172-20

Apartado aéreo 75010

PBX: 667 1090 - Fax: 677 3003

editorial.bonaventuriana@usb.edu.co

www.usbbog.edu.co • www.editorialbonaventuriana.edu.co

Rector: Fray José Wilson Téllez Casas, O.F.M.

Coordinador editorial: Pablo Enrique Sánchez Ramírez

Jefe Unidad de Publicaciones: Luis Alfredo Téllez Casas

Diseño y diagramación: Alejandra Moreno Fuya

Los autores son responsables del contenido de la presente obra.

Prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio, sin permiso escrito de la Editorial Bonaventuriana.

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tiraje: xxx ejemplares

Cumplido el depósito legal (Ley 44 de 1993, Decreto 460 de 1995 y Decreto 358 de 2000).

Impreso en Colombia - *Printed in Colombia.*
octubre de 2018

Contenido

PRÓLOGO	7
INTRODUCCIÓN	
<i>Carlos Arturo Téllez Bedoya</i>	9
EL CARÁCTER POLÍTICO DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL Y POPULAR EN COLOMBIA: APROXIMACIÓN A PARTIR DEL CONFLICTO ARMADO Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ	
<i>Ángela Tuta Aponte</i>	17
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL POSCONFLICTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ DE COLOMBIA: INTERPRETACIONES DEL SECTOR TURÍSTICO	
<i>Carlos Arturo Téllez Bedoya y Carolina Téllez Bedoya</i>	45
RESPONSABILIDAD DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: INCLUSIÓN SOCIAL Y DESARROLLO EN EL POSCONFLICTO COLOMBIANO	
<i>Andrea Carolina Redondo Méndez, Oswaldo Ospina Martínez y Jhon Eddison Pulido</i>	75
LA INNOVACIÓN SOCIAL Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL SECTOR ARTESANAL DEL EJE CAFETERO: IMPLICACIONES PARA EL POSCONFLICTO	
<i>Juan Carlos Montalvo Rodríguez, Víctor Manuel Portugal Ortiz, Carlos Arturo Téllez Bedoya y Jorge Hernán Cifuentes Valenzuela</i>	93

**DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A GENERACIÓN DE VALOR
COMPARTIDO. CASO SECTOR COOPERATIVO**

*Gustavo Adolfo Rubio Rodríguez y Mario Samuel Rodríguez Barrero,
Raúl Vargas y Carlos Arturo Téllez Bedoya.....* | 27

PRÓLOGO

Alba Centeno

Magíster en estudios internacionales de paz, conflictos y desarrollo,

UniversitatJaume I, España

Oficial de Programa para América Latina de la ONG International Alert

Acenteno@international-alert.org

La responsabilidad social de las empresas en el posconflicto es un reto en un país como Colombia, el cual atraviesa un momento en el que trata de despojarse de un conflicto armado que ha perdurado por más de 50 años, de la idea de seguir contando millones de víctimas, y con un genuino anhelo de verdad, justicia y reparación y en el cual, sin duda, el sector empresarial tiene un gran protagonismo. Dicho protagonismo se debe a que el sector ha sido víctima, ha sido testigo e incluso en algunos casos ha sido victimario.

La construcción de paz por parte del sector empresarial es una materia en constante evolución, pero sin duda dicha evolución ha ido dejando claras ciertas premisas que son las que de una u otra manera guían el debate sobre RSE y construcción de paz en el país.

La primera de ellas es que la contribución en aspectos sociales al entorno operacional no es un asunto de filantropía, ni de acciones voluntarias y bien-intencionadas por parte de las Compañías sino un deber de inversión en

los contextos en el cual desarrolla su actividad económica, en la medida en la cual se entiende como un actor más del entorno que influye en aspectos no solo relacionados con lo económico, sino también en aspectos sociales, políticos y culturales.

Adicional a lo anterior se puede considerar una premisa el hecho que la gestión de las operaciones respetuosas a los derechos humanos cada vez más ha ido avanzando como estrategia de competitividad, viabilidad operacional y condición para algunos mercados. En esa medida actuar no solo bajo los límites de la ley sino de estándares en la materia empieza a ser percibido como un valor agregado que las empresas pueden poner a disposición de sus entornos.

Por último, vale la pena anotar como premisa que acciones puntuales de iniciativas empresariales encaminadas a ayudar ha determinado entorno a superar una situación de conflicto armado, tal como la participación en procesos de paz, la adhesión a estrategias estatales asociadas con la mejora de la infraestructura de servicios básicos o acciones asociadas a la reintegración de excombatientes es cada vez más común. Dichas acciones son valoradas como motor de desarrollo, empuje económico, contribución a la mejora de tejidos sociales deteriorados o incidencia en políticas públicas que propenden valores supremos como la paz, y se constituyen como las actuaciones normales de un actor más del entorno que tiene especial impacto en lo económico en lo social y en lo político.

A estas tres premisas o a algunas de ellas responden cada uno de los artículos que componen este texto y que fueron presentados en el I Seminario Bonaventuriano de Responsabilidad Social Empresarial, los cuales les invitamos a leer y analizar para que sean testigos de los ejemplos y las implicaciones de diversas acciones en nuestro contexto y que demuestran que en Colombia es todo un reto que el sector empresarial sea responsable socialmente en un sentido integral, contribuyendo así a la construcción de paz, muchas veces aplazada en nuestro país.

INTRODUCCIÓN

Carlos Arturo Téllez Bedoya

Maestría en Administración, Universidad Nacional de Colombia

Docente Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá

Carlosarturo156@hotmail.com

«No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella
y trabajar para conseguirla»

Eleanor Roosevelt

Este libro surge como propuesta de la Universidad de San Buenaventura –U.S.B.–, sede Bogotá y la Asociación Colombiana de Facultades de Administración –Ascolfa–, a partir de las inquietudes que se han venido generando acerca del proceso de participación de las organizaciones en acciones de Responsabilidad Social Empresarial –RSE–. Este último concepto tiene antecedentes importantes en el país y en la última década ha venido ganando mayor posicionamiento y aceptación por parte de diversos actores sociales, como el empresariado, los gremios, el Gobierno, las organizaciones no gubernamentales –ONG–, la academia y la comunidad. Lo anterior, ya que es innegable el papel que las organizaciones tienen hoy por hoy en el ámbito del desarrollo económico, social y ambiental de la sociedad y el mundo entero.

El contexto del libro es el proceso de construcción de paz que actualmente lleva a cabo Colombia y sin lugar a duda se ve impactado por la aprobación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, resultado del proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-Ep. La esperanza de la comunidad nacional e internacional en que se finalice el conflicto armado de más larga duración en el continente americano y que ha generado numerosas víctimas trasciende, y al interior de las regiones se espera que exista una transformación importante, produciendo no solamente la desmovilización de los excombatientes, sino también la configuración de nuevos escenarios de desarrollo y crecimiento económico, dando respuesta a las necesidades de los más vulnerables.

El análisis del Acuerdo de Paz deja entrever que los empresarios se verán beneficiados de diversas formas en este nuevo escenario en el país. Puntos como la reforma al campo facilitarán que las organizaciones amplíen sus operaciones y que puedan producir en compañía de las comunidades productos que por la situación de inseguridad no era posible explotar adecuadamente, adicionalmente, esto conllevará un mejoramiento en las condiciones de la población y creación de empleos, que impacten el mejoramiento de la calidad de vida. Por otro lado, la ampliación en la participación política y democrática generará posibilidades para que el empresariado, incluso el mipyme, pueda dialogar activamente con los entes públicos y participar en la promoción de los planes de desarrollo territoriales, coincidiendo con la necesidad que al interior de las organizaciones se creen nuevas propuestas de convivencia y que propendan por el establecimiento del diálogo, antes que la violencia física o simbólica, en la solución de conflictos.

Otro elemento del Acuerdo de Paz que impactará positivamente en las organizaciones y la sociedad es la transformación de las zonas rurales que conllevará la erradicación de cultivos ilícitos, esto significa oportunidades de producción y empleo de recursos en zonas alejadas, así como, la prestación de otro tipo de servicios que previamente las regiones no habían desarrollado como el turismo. La dejación de armas y reincorporación de los excombatientes también genera oportunidades importantes para el empresario, a la vez, que

tratándose de un ejercicio de reincorporación colectivo significan inmensas posibilidades de apoyo con capacitación, acompañamiento y financiación de proyectos productivos, al igual que, empleabilidad para quienes deseen incorporarse a la vida civil de manera individual. Aunado a lo anterior, las víctimas también podrán ser objeto de apoyo por parte de las organizaciones en este contexto, igualmente, en el marco del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición se conocerá de manera «voluntaria» el rol que tuvieron algunas empresas en la financiación y mantenimiento del conflicto armado.

Teniendo en cuenta las situaciones enunciadas en las cuales las empresas son un actor fundamental para la construcción de paz en el país, a continuación se desarrollará de forma lógica y ordenada en cinco capítulos las reflexiones, resultado de diversos procesos investigativos en este campo de estudio. Como se enunció previamente, estos capítulos se desarrollaron en el marco del I Seminario Bonaventuriano de Responsabilidad Social Empresarial, a través de un proceso doble de evaluación de pares ciegos a las ponencias presentadas en las mesas de trabajo y a su vez él se circunscribe en una heterogeneidad metodológica propia de cada investigación, de tal manera que el empresariado, las organizaciones y la comunidad, fueron abordados mediante diversos métodos, técnicas e instrumentos¹.

Inicialmente, el capítulo 1 expone a manera introductoria una propuesta analítica acerca del rol de los movimientos sociales y populares en la construcción de paz en el país, dando cuenta de la relevancia que ha significado su participación en la edificación histórica del país y el rol que como víctimas poseen en la actualidad; posteriormente el capítulo 2 aborda de forma innovadora la RSE en el contexto del posconflicto y construcción de paz en el turismo, a través de las interpretaciones que emanan de la literatura y el empresariado

1 Así pues, se precisa que mientras los capítulos 1 y 3 presentan una metodología de tipo cualitativo, que concluye con la presentación de los principales retos que tienen los movimientos sociales en el proceso de construcción de paz, al igual que el escenario actual que posee en este sentido la industria cultural y creativa; los capítulos 2, 4 y 5 se enmarcan en un enfoque investigativo mixto que corresponde con la interpretación de la RSE en el sector turístico, artesanal y cooperativo, a partir de visiones teóricas heterogéneas, como son la óptica de valor compartido, el radical humanismo y la innovación social, en aras de producir reflexiones importantes acerca de rol de estos sectores en la actualidad.

del sector, poniendo de manifiesto la necesidad que los diversos actores inmersos en el tejido social se movilicen positivamente apoyando estos procesos y particularmente los empresarios deben realizar trabajo articulado, socializando con apoyo del Gobierno y los organismos gremiales su accionar socialmente responsable en este contexto; seguido de ello el Capítulo 3 presenta los resultados iniciales de una investigación exploratoria que busca identificar el rol de las industrias culturales y creativas como garantes de inclusión social en el escenario político actual, de tal forma que se presenta a este sector como impulsador del desarrollo económico particularmente en cuanto a la generación del empleo y las posibles estrategias de responsabilidad social que puede aportar; luego, el capítulo 4 expone la identificación y propuestas que se efectuaron en relación con las políticas públicas del sector artesanal del Eje Cafetero, presentando la necesidad de avanzar en la proposición de políticas por parte del Gobierno Nacional en las cuales incorpore la responsabilidad social de la mano con la innovación y que responda a las necesidades actuales del fin del conflicto armado con las Farc-Ep; y finalmente, el capítulo 5 aborda el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, de la mano con la noción de valor compartido, en aras de generar lineamientos para una implementación estratégica de este en el sector cooperativo, no obstante, se evidencia que en el sector las estrategias de RSE se encuentran en una fase en la cual aún distan de interiorizar los principios propios de la gobernanza empresarial, así como, urge que interioricen iniciativas enfocadas en la construcción de paz.

Cabe mencionar, con la finalidad de ilustrar los pasos que ha seguido el proceso de paz en el país y su contexto actual, al final del documento se presentan en el anexo I una serie de imágenes que el caricaturista Argón autorizó emplear para esta publicación. De igual manera, en aras de contextualizar la lectura del texto a continuación se presentan algunos fragmentos de los discursos del papa Francisco en su visita a Colombia:

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Una de las cosas que más me ha impresionado en todas las ciudades, entre la gente, los papás y las mamás con los niños, que levantaban a los niños para que el Papa los bendijera, pero también con orgullo hacían ver a sus

niños como diciendo: «Esto es nuestro orgullo, esta es nuestra esperanza». Yo he pensado: un pueblo capaz de hacer niños y capaz de hacerlos ver con orgullo, con esperanza: este pueblo tiene futuro. Y me ha gustado mucho.

El lema del viaje era «Demos el primer paso», es decir, «realicemos el primer paso», referido al proceso de reconciliación que Colombia está viviendo para salir de medio siglo—de medio siglo— de conflictos internos, que ha sembrado sufrimiento y enemistad, causando tantas heridas, difíciles de cicatrizar. Pero con la ayuda de Dios el camino está ya iniciado.

Con mi visita he querido bendecir el esfuerzo de este pueblo, confirmarlo en la fe y en la esperanza, y recibir su testimonio, que es una riqueza para mi ministerio y para toda la Iglesia. El testimonio de este pueblo es una riqueza para toda la Iglesia, ¡eh!

Colombia —como la mayor parte de los países latinoamericanos— es un país en el cual son fuertes las raíces cristianas. Y si este hecho hace todavía más agudo el dolor por la tragedia de la guerra que lo ha desgarrado, al mismo tiempo constituye la garantía de la paz, el sólido fundamento de su reconstrucción, la linfa de su invencible esperanza. Es evidente que el maligno ha querido dividir al pueblo para destruir la obra de Dios, pero es también evidente que el amor de Cristo, su infinita Misericordia es más fuerte que el pecado y que la muerte.

Este viaje ha sido para llevar la bendición de Cristo, la bendición de la Iglesia sobre el deseo de vida y de paz que rebosa del corazón de esta Nación: lo he podido ver en los ojos de los miles y miles de niños, jóvenes y muchachos que han llenado la plaza de Bolívar y que he encontrado por todas partes; esa fuerza de vida que también la naturaleza misma proclama con su exuberancia y su biodiversidad.

En este sentido, «dar el primer paso» —el lema del viaje— significa acercarse, inclinarse, tocar la carne del hermano herido y abandonado. Y hacerlo con Cristo, el Señor hecho esclavo por nosotros. Gracias a Él hay esperanza, porque Él es la misericordia y la paz.

Encomiendo nuevamente a Colombia y a su amado pueblo a la Madre, Nuestra Señora de Chiquinquirá, que he podido venerar en la catedral de Bogotá. Con la ayuda de María, todo colombiano pueda dar cada día el primer paso hacia el hermano y la hermana, y así construir juntos, día a día, la paz en el amor, en la justicia y en la verdad. Gracias.



**EL CARÁCTER POLÍTICO DE
LA MOVILIZACIÓN SOCIAL
Y POPULAR EN COLOMBIA:
APROXIMACIÓN A PARTIR DEL
CONFLICTO ARMADO Y LA
CONSTRUCCIÓN DE PAZ**

Ángela Tuta Aponte
Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos,
Universidad Nacional de Colombia
Directora de la Escuela de Formación Popular Pedro Nel Jiménez (EPNJ)
angelatuta@gmail.com

Resumen

En Colombia las organizaciones de carácter social y popular han mantenido una característica identitaria: dentro de sus demandas siempre han incluido reivindicaciones de carácter político, realizando aportes fundamentales para temas relevantes como el conflicto y la paz. Sin embargo, estas organizaciones han sido excluidas de la participación política oficial y por sus análisis y propuestas de cambio la violencia política ha sido usada en su contra, hasta el punto de llegar a ser prácticamente exterminadas. Este movimiento popular y social se reactivó y en el marco de su proceso de fortalecimiento, efectuó nuevamente exigencias políticas principalmente relacionadas con el proceso de paz, señalando la importancia que tiene el dar la palabra al pueblo organizado, construir y decidir con él el rumbo que se debe tomar para eliminar las causas del conflicto y alcanzar una paz estable y duradera; en la actualidad, aterriza sus exigencias hacia la necesaria implementación de lo acordado entre gobierno y Farc-Ep en la ciudad de La Habana.

Palabras clave

Conflicto, paz, proceso de paz, movimiento social y popular, implementación.

Introducción

Históricamente las organizaciones sociales y populares en Colombia se han caracterizado por incluir entre sus análisis, demandas y plataformas de lucha, aspectos que superan las reivindicaciones meramente materiales, para adentrarse en otras de carácter político. Así, en un país con un conflicto económico, social, político, cultural, ambiental y armado tan prolongado en el tiempo, estas organizaciones y los movimientos sociales que ellas conforman, han efectuado valiosos aportes, que desde cada una de sus respectivas perspectivas, son fundamentales para llenar de contenido el significado de la Paz.

A pesar de ello, las mencionadas organizaciones, a través del tiempo, han sido excluidas de la posibilidad real de ejercer su derecho a la participación política, –lo cual muestra la característica esencial del Régimen Político Bipartidista: su sectarismo– (Medina, 1986), al punto de que se convirtieron en el principal blanco de la estigmatización y por tanto, en receptoras del uso de la violencia en su contra, lo cual las llevó a prácticamente su exterminio.

Paralelamente a este panorama, se fueron desarrollando distintos procesos de paz que resultaron en los acuerdos firmados en los años 1984 (La Uribe y Corinto); 1990 (Santo Domingo); 1991 y 1993, entre el Gobierno Nacional y diferentes insurgencias armadas; así como, los acercamientos infructuosos entre estos actores en procesos como los de Caracas (1991) y Tlaxcala (1992) y el del Caguán (1998-2002); dentro de los cuales, a excepción del último nombrado que desarrolló las denominadas audiencias públicas, la participación en ellos por parte de los movimientos y de las organizaciones sociales y populares estuvo prácticamente ausente.

No obstante, es precisamente en el periodo de recrudescimiento de la guerra (1993-1999) y por ende, de inexistentes acercamientos políticos entre los actores armados, –que fuesen dirigidos hacia la paz–, en el que, según el

sacerdote Mauricio García (2006), se presentaron las mayores movilizaciones exigiendo la paz, dentro de lo cual destaca una característica: las regiones que más se movilizaron fueron precisamente aquellas que estaban siendo más golpeadas por la violencia política.

A pesar del exterminio del cual fueron víctimas los movimientos sociales y populares durante las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado y, con ocasión de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia en pleno despunte de un nuevo siglo, el proceso de reconstrucción de estas organizaciones se hizo presente, ya no como meros grupos poblacionales separados entre sí, sino como movimientos sociales aglutinadores y con lecturas comunes sobre la sociedad y sus problemas, dando como resultado propuestas unitarias para la construcción de paz. Después de firmado el Acuerdo de Paz de La Habana entre el Gobierno nacional y la insurgencia armada de las Farc-Ep, han sido estos movimientos sociales aglutinadores, los que se han echado al hombro las exigencias de implementación de lo pactado.

En este sentido, la presente ponencia busca comprender si los movimientos sociales y las organizaciones sociales y populares, han influido en los procesos de paz que en Colombia se han desarrollado entre Gobierno Nacional e insurgencias armadas. Para, de esta manera, determinar la importancia que adquiere el hecho de quea estos movimientos sociales, se les brinde la posibilidad real de participar en los procesos que se adelanten en la búsqueda de la paz para Colombia, tanto en las negociaciones como en la implementación de lo acordado, en el entendido de que si esto no se hace posible, será mucho más difícil lograr la paz.

Para desarrollar este propósito el texto se divide en siete partes: la primera demuestra el carácter político de las reivindicaciones de las organizaciones y movimientos sociales a través de la historia de Colombia, esto acompañado de un acercamiento a la caracterización del régimen político colombiano como sectario y excluyente, razón por la cual la violencia política se ha agudizado y ha cobrado como principales víctimas a esos movimientos y organizaciones sociales y populares.

El texto pasa entonces a una segunda parte en la que hace referencia a la crisis y debilitamiento del cual fueron víctimas las organizaciones y los movimientos sociales en el marco del desarrollo de la violencia estatal y paraestatal y de la implementación de las medidas económicas que trajo consigo la denominada apertura económica.

Posteriormente efectúa un análisis sobre la participación social y popular en los procesos de paz ocurridos en Colombia a través de la historia hasta llegar al de La Habana.

En cuarto lugar, continúa con un acercamiento breve a las diferentes conceptualizaciones que existen alrededor del tema del conflicto, para destacar aquella con la cual se identifican los movimientos sociales más importantes en la actualidad en Colombia.

Sigue con la presentación de algunas condiciones que deben considerarse para que exista una verdadera y decisoria participación social y popular en los procesos de paz y en la construcción de país, lo cual está atravesado por la necesaria implementación de lo pactado entre Gobierno Nacional e insurgencias armadas.

Como sexto apartado hace un breve acercamiento al estado del proceso de implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, destacando los peligros que se corren de no ser este un proceso exitoso.

Finaliza exponiendo las principales conclusiones emanadas por la investigación.

Metodología

La presente investigación se elaboró a partir del análisis cualitativo. Estudia a los movimientos sociales y a las organizaciones sociales y populares más relevantes en la historia de Colombia, que han efectuado reivindicaciones de carácter político. El mencionado estudio se realizó a través de revisión bibliográfica histórica, así como de barrido de prensa y análisis del discurso de los movimientos sociales, presente en entrevistas, artículos y comunicados.

La metodología empleada consistió en cruzar los hechos políticos más destacados en la historia del país, con los repertorios de acción que los movimientos sociales colombianos desarrollaron en ese mismo momento histórico, para analizar la relevancia de esos repertorios en la aparición del hecho político o en su desenvolvimiento, priorizando aquellos relacionados con el conflicto colombiano y los diferentes procesos de paz.

El análisis de los resultados se llevó a cabo teniendo en cuenta la pregunta de investigación planteada, a saber: ¿Los movimientos sociales y las organizaciones sociales y populares, han influido en los procesos de paz que en Colombia se han desarrollado entre Gobierno Nacional e insurgencias armadas?

La respuesta a la pregunta de investigación finalmente comprobó la hipótesis de trabajo: los movimientos sociales y populares en Colombia, a pesar de no haber sido incluidos como parte negociadora en los procesos de paz que se han llevado a cabo entre gobiernos e insurgencias armadas, a través de la movilización social si han cumplido un papel relevante en la política nacional y por ende, en el impulso de diferentes intentos de paz negociada en la historia del país.

Resultados

La metodología empleada permitió descubrir que una marcada característica de los movimientos sociales colombianos ha sido su profundo compromiso con las transformaciones no solo económicas o sociales del país, sino que sus acciones han incidido en decisiones políticas tan importantes como el iniciar o no procesos de paz entre insurgencias armadas y Gobierno Nacional.

Además, logró un acercamiento a los discursos que existen alrededor de las posibles causas del conflicto colombiano, diferenciarlos, determinar sus principales expositores y las consecuentes propuestas o acciones, que según cada actor del mapa político del país, se deberían ejecutar para alcanzar la paz.

Por último, la conclusión general arrojada por la investigación responde positivamente la pregunta de investigación planteada y confirma la hipótesis de

trabajo, pues las organizaciones sociales y populares han tenido una presencia destacada en la política colombiana y han generado movimientos importantes en la misma, es decir, han sido actores fundamentales sin los cuales no se puede construir un país en paz.

Movimientos sociales en Colombia: carácter político de sus reivindicaciones

Partimos por entender que el carácter político de los movimientos sociales y populares, está determinado según el contenido de reivindicaciones de tipo estructural (Barnes, s. f) que se encuentra en sus agendas o plataformas de lucha, dentro del cual sobresalen temas como la democracia, la justicia o la política económica, por nombrar algunos.

Ahora bien, desde mediados del siglo XIX con el movimiento plebeyo, pasando por los inicios del movimiento obrero en la década de 1920, hasta llegar a los grandes movimientos sociales de la actualidad, la característica transversal de todos ellos ha sido que sus reivindicaciones y objetivos superan lo estrictamente material o económico, adentrándose en el terreno político.

Así, encontramos al movimiento plebeyo que muy bien estudia Gutiérrez Sanín (1995), del cual relata cómo en los años 50 del siglo XIX, agrupaba a todos los sectores subalternos de la sociedad (antiguos esclavos negros, indígenas, campesinos y artesanos) y, que en un principio fue impulsado por las élites para lograr los objetivos propios a ellas, pero que poco a poco se fue desligando de estas al punto de llegar a efectuar reivindicaciones propias como el autorreconocimiento, expresado en la creación de, por ejemplo, sociedades de artesanos.

Más adelante, precisamente con el desarrollo de las grandes ciudades y la aparición

de industrias y fábricas en las principales capitales del país, al mismo tiempo que con la existencia y fortalecimiento de los enclaves (petróleo, banano, caucho), aparece el movimiento obrero en Colombia, caracterizado, incluso

a nivel mundial, por su reivindicación única de los tres ochos: ocho (8) horas de trabajo, ocho (8) horas de descanso y ocho (8) horas de estudio, constituyéndose en algo realmente novedoso para la época, pues el nuestro, el movimiento obrero colombiano, fue el primero en el mundo en hacer referencia a la necesidad del estudio para los trabajadores, exigiéndolo dentro de la jornada laboral.

Luego, los estudiantes organizados desde los albores del siglo XX, se manifestaron en torno a consignas dirigidas hacia la caracterización de la educación que exigían, las cuales se recogían en el «Manifiesto Liminar» (1918), redactado en Córdoba, Argentina, que entre otras cosas, proponía la democratización de la Universidad, una necesaria educación secular y el rompimiento con la herencia colonial. Más adelante, condenaron decididamente sucesos como la masacre de las bananeras ocurrida en diciembre de 1928 e incluso, cuando en 1936 conformaron la Federación de Estudiantes Colombianos, llegaron a hacer parte del Frente Popular Antifascista, conjuntamente con el movimiento obrero, representado en la naciente Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), que había sido promovida desde el año 1935.

Entre tanto, los campesinos, afrodescendientes e indígenas, además de su exigencia histórica por tierra para poder trabajarla, también efectuaron acciones contra la represión estatal de la cual eran víctimas, pues, tal y como lo señala el profesor Pierre Gilhodes (1983), el Estado en Colombia se estructuró traumáticamente: llegó a las regiones más apartadas (de frontera agrícola y de población antigua pero totalmente abandonadas) en forma de represión por intermedio de la Fuerza Pública y, en otras regiones apareció como un cobrador de impuestos sin ofrecer nada en contraprestación, situaciones que provocaron el rechazo inmediato por parte de las poblaciones de las regiones en cuestión. Generando y reproduciendo el conflicto armado interno.

Los anteriores son ejemplos que permiten observar cómo a través de la historia las organizaciones sociales y populares y los movimientos sociales que ellas conforman, han tenido como característica esencial el hecho de traspasar el terreno de la lucha meramente reivindicativa, para insertarse en la arena de lo político.

Ahora bien, la caída de la Dictadura de Rojas Pinilla, se produjo mediante un importante paro cívico nacional y un paro cívico en la ciudad de Cali contra las autoridades arbitrarias (Medina, 1984).

Una vez constituido el Frente Nacional, que se había presentado a sí mismo como el mecanismo para acabar con la violencia sectaria y desarrollar el país, estallaron los movimientos cívicos originados por la presencia traumática del Estado en las regiones, ya que nunca este apareció como prestador de servicios públicos a la comunidad, tales como redes de agua, de energía, de teléfonos, alcantarillado, puestos de salud, escuelas, etc.

Sin embargo, el hecho político más sobresaliente lo ocupa el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977, que fue encabezado por las cuatro (4) centrales obreras de la época, los trabajadores del Estado, los campesinos e indígenas, las juntas comunales, los jóvenes de los barrios, con participación de la mayoría de la población, quienes prepararon y desarrollaron la más grande movilización de toda la historia de nuestro país.

El carácter político de este histórico proceso se presenta cuando se observa cómo se convirtió en el más claro enfrentamiento de clases de todo el siglo XX: En Colombia había bonanza cafetera pero el jefe de Estado (Alfonso López Michelsen), manifestó que las ganancias de la bonanza les pertenecían a los cafeteros y no se redistribuyeron en la población. Sin embargo, sus efectos en la economía, tales como la inflación, sí debieron ser asumidos por todo el conjunto, el pueblo colombiano, por eso la consigna que unificó fue la exigencia de un alza de salarios del 50 %, consigna que hoy podría parecer exagerada, pero que para ese momento fue entendida por todos.

Este paro produjo dos efectos en la cumbre del Estado y del Sistema Político: por un lado se revivió la vieja idea represiva y durante el siguiente gobierno de Turbay, se proclamó el Estatuto de Seguridad (1979) en la idea de evitar el desarrollo de futuros paros cívicos; el otro efecto vino por parte de un sector minoritario del Partido Conservador, encabezado por el presidente Belisario Betancur, que preocupado por la deslegitimación en la cual se encontraba el régimen político producto del clientelismo generado durante el Frente Nacio-

nal y, por la represión ejercida por parte de la Fuerza Pública bajo el paraguas del Estatuto de Seguridad, decidió iniciar el primer proceso de diálogo con las diferentes organizaciones insurgentes en armas, de hecho, hizo pública su opinión acerca de la finalización de la guerra si se atacaban las condiciones objetivas y subjetivas que la generaron. Él mismo presentó la idea de efectuar negociaciones con la insurgencia como una necesaria apertura democrática.

Estas dos respuestas —el Estatuto de Seguridad y su alternativa, la solución política negociada— provenientes de quienes ostentaban el poder, demuestran la influencia política que puede llegar a tener un movimiento social unificado. La prueba factual de lo anterior, aparece con el hecho que entre los convocantes al importantísimo primer Foro por los Derechos Humanos en Colombia, realizado entre abril y marzo de 1979, aparecen organizaciones sociales como la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), y otras campesinas, indígenas y estudiantiles, cuyo objetivo primordial era combatir el mencionado Estatuto de Seguridad, la tortura y los asesinatos de campesinos.

Precisamente, esta situación de carácter político de las luchas de los movimientos sociales en Colombia, se fortalece a partir de estos hechos, presentándose aún en la actualidad. Por ejemplo, el profesor Mauricio Archila (2002), demuestra que todas las protestas realizadas entre el año 1975 y el 2000:

... guardan una lógica de lo material a lo político y simbólico (Archila, 2002, p: 78) y que... Colombia sigue siendo un país donde la gente resiente las carencias materiales y sobre todo la pésima distribución del ingreso, pero incorpora en la agenda creciente de sus luchas demandas políticas o claramente culturales (*Ibíd.*, p. 83).

Un aspecto interesante que ha sido poco señalado, tiene que ver con que los movimientos sociales rápidamente descubrieron que hacía falta un instrumento político para la lucha por la paz, por eso aceptaron la propuesta surgida a propósito de los procesos de diálogo, de conformar movimientos políticos que cumplieran este objetivo. Así aparecen en el panorama nacional la Unión Patriótica (UP), A Luchar y el Frente Popular (FP).

La debilidad del instrumento político para el posacuerdo fue la falta de unidad, esto facilitó la violencia estatal y paraestatal contra los líderes de los movimientos sociales que se integraron a los movimientos políticos y se presentaron como candidatos, así como contra una gran parte de las bases de dichos movimientos políticos; represión que se prolongó en el tiempo de manera sistemática, puesto que todavía en 1994 caía asesinado el senador Manuel Cepeda, habiendo pasado ya por los líderes que firmaron la paz por parte del M-19, lo cual demuestra que se trató de un plan sistemático en el mediano y largo plazo para que no se formara un instrumento político capaz de generar un cambio económico, político y social en Colombia.

Crisis y debilitamiento de los movimientos sociales

Atención especial merece el hecho que el fenómeno de violencia intensificado hacia finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo XX, inició como respuesta de un sector de la sociedad que se manifestaba abiertamente en contravía del proceso de paz iniciado por Betancur y cristalizado hacia el año 1984 (Romero, 2000).

Estos sectores paulatinamente se fueron unificando alrededor de las consignas anti- insurgentes de los paramilitares, con el agravante de que consideraron como objetivo militar a toda aquella persona, comunidad u organización social que se manifestara en favor del proceso de paz o que coincidiera en alguna lectura de la realidad o de la historia con las opiniones de la guerrilla.

Así las cosas, estos grupos reaccionarios introdujeron al conflicto colombiano la variable de la degradación del mismo, llevándola al punto de exterminar a prácticamente todas las organizaciones sociales y populares que se manifestaron en apoyo a la paz y que incluso, hicieron sus lecturas y opiniones respecto de la misma.

Lo anterior, acompañado de las reformas económicas que se empezaron a ejecutar en el país a raíz de la implementación de la apertura económica, tales como la flexibilización y la desregulación laboral; la financiarización de las relaciones sociales y del Estado; el surgimiento y desarrollo de formas

ilegales de acumulación; la generación de una nueva geografía regional de la acumulación; así como la movilización política del capital transnacional y de sus instituciones (Estrada, 2010), expropiaron aún más el ingreso de los trabajadores, despojaron de su tierra a miles de campesinos, afrodescendientes e indígenas y evitaron la recomposición y resurgimiento de los movimientos sociales acabados violentamente por parte de los enemigos de la paz.

Este panorama llevó a que la fragmentación que antes existía entre las organizaciones sociales y su debilidad, se profundizaran. El resultado final fue la práctica desaparición o la reducción enorme de los movimientos sociales de carácter histórico como el obrero, el estudiantil, el cívico comunal o el agrario, para pasar a un periodo en el cual estos no aparecieron más en el mapa político del país y si lo hicieron, no fue precisamente para efectuar reivindicaciones de algún tipo, sino para apoyar políticas gubernamentales con las que otrora época se encontraban en desacuerdo. Esto último, porque al verse diezmados, varios líderes de esos movimientos sociales fueron cooptados a cambio de puestos en la alta burocracia estatal. De esos movimientos sociales históricos, muchos aún no han podido salir del letargo en el cual se vieron inmersos.

A pesar de lo anterior, desde finales de los años de 1990 y en especial durante la primera década del presente siglo, la recomposición de algunos de los mencionados movimientos comenzó a hacerse visible y, en la actualidad, varios de ellos han entrado nuevamente a las páginas de la política nacional. Sin embargo, esta reconstrucción ha sido demasiado lenta y no ha dejado de tener altibajos, pero lo que importa resaltar es que da una suerte de esperanza en la idea de la reactivación de una necesaria y posiblemente fuerte movilización por reivindicaciones económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales necesarias para Colombia.

Vale recordar que la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, —que fue resultado de la exigencia del movimiento social estudiantil universitario—, dio pasos agigantados en cuanto a reformas políticas urgentes que necesitaba el país en ese momento de la historia, pero adoleció (y ese fue uno de sus más sobresalientes desaciertos) de la participación de sectores importantes de la

sociedad colombiana, por ejemplo, el investigador Roberto Romero (2013) hablando de ese proceso en 1990, sostiene al respecto:

... Pero no tardaría en comenzar el proceso de exclusiones. El 2 de agosto, los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, y el M-19, firman un acuerdo donde establecen, sin la participación de la Unión Patriótica y el amplio movimiento social que participó en el Congreso Preconstituyente, que la composición final de la ANC será de 70 miembros con voz y voto. Más tarde fijan cuatro cupos, pero sin voto para los grupos guerrilleros desmovilizados: MaQL: dos curules, Prt, una y Quintín Lame, otra... (pp.26-27).

Lo cual demuestra que aun cuando la ANC de 1991 fue un paso importante para democratizar el país, dejó por fuera a sendos sectores de la sociedad colombiana que incluso habían participado en las movilizaciones a favor del cambio de Constitución. De hecho, habiéndose pensado esta Asamblea como la refundación del país producto de la dejación de armas por parte de las diferentes guerrillas, se entorpeció la participación en ella de las insurgencias armadas más grandes y poderosas desde ese entonces: las Farc-Ep y el Eln, que sumaban por lo menos el 70 % de la fuerza rebelde en armas. Motivos de peso por los cuales el conflicto armado no finalizó y la nueva Constitución Política no logró su cometido.

Los movimientos sociales y el Proceso de paz de La Habana

Ahora bien, con ocasión del bicentenario de nuestra independencia, surgieron movimientos sociales que podemos llamar *aglutinadores*, ya que integran en ellos a diversos sectores sociales que poseen las mismas reivindicaciones generales y comparten una lectura de país, cuya característica es pensar la política colombiana y participar en ella implementando variados repertorios de protesta, superando la participación política estrictamente electoral.

Como casos emblemáticos tenemos a la Marcha Patriótica y al Congreso de los Pueblos, que a partir del año 2010 irrumpieron con fuerza en la política nacional e influyeron directamente en la opinión pública, en especial en lo

relacionado con el tema de la paz, convocando y abanderando las movilizaciones más importantes que se han desarrollado en los últimos años y que han estado relacionadas con este tópico.

También tenemos organizaciones o acciones unitarias gremiales y de carácter nacional, representativas de sectores sociales que habían prácticamente desaparecido del panorama, tales como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), que impulsó la movilización estudiantil universitaria ocurrida en 2012, y que dio al traste con la propuesta presentada por el Gobierno, de reforma a la Ley General de Educación Superior; así como la movilización agraria del año 2013, que redundó en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

Ambos procesos poseen reivindicaciones propias de su sector, pero son coincidentes con incluir en sus discursos y demandas temas que sobrepasan lo material, exigiendo, por ejemplo, el replanteamiento de ciertas políticas públicas al mismo tiempo que la superación necesaria del modelo económico, la democracia y el tema que nos ocupa: la paz.

Lo descrito líneas arriba se convierte en una diferencia sustancial entre los procesos de paz ocurridos años atrás y el de La Habana, pues para este último proceso, la dinámica de la lucha social y popular es claramente distinta a la que existía entonces: para 1984, año de los acuerdos de La Uribe con las Fuerzas Armadas CgSB Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-Ep) y de Corinto con el Movimiento 19 de abril (M-19) – como los dos acuerdos más importantes de la época–, la movilización social y popular no era significativa en lo relacionado con reivindicaciones de carácter político como la paz. Durante esa etapa, la movilización privilegiaba otro tipo de demandas que incluían ese tema dentro de su agenda, pero no como punto central.

Lo mismo sucedió en los años 90: primero durante los procesos de dejación de armas acaecidos con el M-19 en 1990; el Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt), un sector del Ejército Popular de Liberación (Farc), el Movimiento Armado Quintín Lame (MaQL) –estos tres últimos en 1991– y; la Corriente de Renovación Socialista (Crs) en 1993. Al mismo tiempo que durante las conversaciones de Caracas (1990) y Tlaxcala (1991), entre el Gobierno

Nacional en cabeza de César Gaviria Trujillo y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CgSB), que estaba entonces conformada por las Farc-Ep, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Epl. Todos estos fueron procesos desarrollados directamente entre los actores armados, pero no pusieron en práctica unos mecanismos de participación por parte de las organizaciones y movimientos sociales al interior de los mencionados procesos.

En contraste, los diálogos del Caguán (1998-2002), permitieron la participación de todo colombiano o colombiana que deseara intervenir o hacer parte de las audiencias públicas que se efectuaron respecto de cada uno de los temas de la agenda de paz; sin embargo, esos ríos de propuestas que llegaron a la mesa de negociación finalmente no fueron tenidos en cuenta producto del rompimiento del proceso, pero se constituyeron en un acumulado importante para el futuro, pues son la antesala que demuestra la factibilidad que existe de que las organizaciones sociales y populares participen en las negociaciones.

Esa participación social y popular en este proceso de paz fue fundamentalmente impulsada por las grandes movilizaciones por la paz efectuadas entre los años 1993 y 1999, tal y como lo demuestra el sacerdote Mauricio García Durán (2006), en su texto *Movimiento por la paz en Colombia: 1978-2003*:

...este periodo (1993-1999) ha sido el momento más fuerte de movilización por la paz, cuando esta alcanzó su pico. No sólo se movilizaron 30 millones de personas, sino que se hizo de manera sostenida, con un amplio repertorio de acciones, con una cobertura realmente nacional, y con un peso significativo en el nivel local. Además, se puede discernir la creciente formación de una red de organizaciones y esfuerzos alrededor de la paz, articuladas y conectadas de diversas maneras. No sólo se dio un tipo de campaña por la paz claramente definido y consolidado, sino que la movilización se tornó realmente masiva y afincada en una verdadera infraestructura organizativa.

Por su parte, el proceso de paz de La Habana, al igual que el del Caguán, también inició y se desarrolló con un marco de masivas movilizaciones sociales y populares en favor de la paz, pero, con una diferencia fundamental: la paz que exigían —y exigen— los movimientos sociales existentes está llena

de contenido, del cual sobresalen los planteamientos políticos. Ello significa que el concepto de paz ha sido cargado de significado, de manera especial por parte de los mencionados movimientos: Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Cumbre Agraria, Étnica y Popular y en menor medida, pero con planteamientos al respecto, el movimiento estudiantil universitario agrupado en la Mane.

A pesar de que el proceso de Paz de La Habana se desarrolló fuera del país, los negociadores recibieron gran cantidad de propuestas para la paz provenientes de los movimientos sociales y populares. Los mecanismos para ello estuvieron relacionados con los foros temáticos realizados en Colombia y la recepción de visitas en Cuba de un importante número de dirigentes y representantes de los mencionados movimientos. Varias de las propuestas recibidas fueron incluidas en las agendas de discusión de la mesa de negociación.

De los movimientos sociales más importantes que visitaron a los negociadores, resaltan las mujeres y fundamentalmente las víctimas, convirtiendo a este proceso de paz en el primero en el mundo en incluir el enfoque de género y el primero en Colombia en escuchar directamente a estos actores.

Llenar de contenido el significado de la paz

Se debe iniciar por aclarar que no existe una sola posición respecto de las causas del conflicto colombiano y, que cada una de las que existen representa una manera de entender la violencia política en el país, lo cual demuestra que el significado de la paz está en disputa.

Comprender los significados sobre la paz en Colombia pasa por conocer la caracterización del conflicto, los elementos que le dieron origen y las alternativas para su solución que de ello se derivan. De conformidad con cada una de las diferentes interpretaciones que existen, resaltan fundamentalmente tres: negación, fallos del mercado y causas estructurales.

En la primera se niega que exista un conflicto en el país. En lugar de ello se le cataloga como una amenaza terrorista que debe ser eliminada, por tanto,

la propuesta de paz por parte de quienes manejan este punto de vista es inexistente, para ellos la única posibilidad es enfrentar el problema con la guerra misma.

Dentro de los teóricos más destacados al respecto tenemos a Paul Collier (2001), quien desde el punto de vista brindado por el individualismo metodológico, sostiene que los conflictos armados internos, —que él denomina guerras civiles—, son provocados por intereses económicos individuales que se sacian por medio de la existencia de organizaciones rebeldes financieramente viables; su viabilidad financiera es producto de los ingresos que reciben por la explotación y exportación de recursos naturales y mantienen los gastos de la guerra mediante la depredación. Bajo esta óptica, no existen organizaciones rebeldes sino simple delincuencia común, que debe ser atacada mediante el uso de la fuerza y la represión.

Al respecto es interesante notar cómo Paul Collier se basa en el análisis de las guerras civiles o conflictos armados africanos, especialmente los acaecidos después de la caída del muro de Berlín, que surgen bajo contextos y en condiciones muy diferentes a las colombianas y, en Colombia, las conclusiones de su investigación se han querido asumir como válidas —por parte de algunos sectores políticos y económicos— a la hora de hablar de las causas del conflicto, pretendiendo deslegitimar o invisibilizar las razones históricas y las características del conflicto colombiano.

La segunda, relacionada con la idea de que existen fallos del mercado que producen ciertas inequidades y exclusiones, lo cual genera descontento en los ciudadanos y producto de ello, algunos de los afectados deciden unirse a los ejércitos irregulares en contienda. Para los promotores de esta lectura del conflicto, la salida al mismo es la reinserción y la resocialización individual de los combatientes, puesto que los fallos del mercado solo afectan a pocos sectores de la sociedad, por lo cual no son un fenómeno generalizado y se pueden atacar de manera particular.

Bajo esta perspectiva han sido basadas las determinaciones y actuaciones de los gobiernos que se han adentrado en procesos de paz con organizaciones

alzadas en armas en Colombia, suponiendo que el conflicto en el país dejará de existir con la desmovilización de esos grupos, haciendo ver ante la opinión pública que los procesos de paz no llegan a feliz término por la simple falta de voluntad política para la dejación de armas por parte de las insurgencias.

La última interpretación de las causas del conflicto es la que considera que factores estructurales como lo económico, lo social, lo político, lo ambiental, lo cultural y lo armado, se conjugan para generar una situación en la cual lo militar es solo una expresión de los otros nodales aspectos que deben ser transformados, para eliminar así las causas de la guerra y de esta manera, alcanzar la paz.

Esta concepción entiende que el conflicto armado interno en Colombia obedece a dos causas fundamentalmente, la primera: el carácter sectario y excluyente del régimen político, que no deja posibilidad de participación política a terceras fuerzas. La segunda: las profundas desigualdades económicas y sociales, lo cual impulsa la generación del conflicto armado. Esto último se puede explicar, según el profesor Francisco Gutiérrez (2001), de la siguiente manera: en un país donde los niveles de inequidad aumentan, la pérdida de lealtad de su población para con el régimen político no se hace esperar, lo cual desestabiliza el régimen y es el detonante que genera la violencia política.

Ahora bien, hablando de los movimientos sociales y su relación con las diferentes concepciones del conflicto, los más visibles en la actualidad, tales como el estudiantil universitario, el agrario, la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, cada uno con sus respectivas diferencias y acentos, concuerdan en que para superar la guerra es necesario reconocer las causas que la generaron: económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales; es decir, estos movimientos sociales coinciden con la tercera lectura del conflicto que se analizó previamente.

Lo anterior se demuestra, por ejemplo, en el comunicado emitido por la Comisión Nacional de Vocerías de la Mane, a propósito del proceso electoral llevado a cabo en 2014, que en su tercer punto sostiene:

...la prioridad del movimiento estudiantil es trabajar con el pueblo colombiano y todos aquellos que sin importar su ideología o filiación partidaria defienden los derechos de la protesta y la propuesta en miras a una educación con soberanía, democracia y Paz. (Mane, 2013, n. d.)

En el mismo sentido se expresan en la definición que realizan de la educación superior, a propósito de su documento *Bases fundamentales para una propuesta de educación superior*, en el cual la caracterizan como

... portadora de un proyecto académico, político, social y cultural de país, orientado a la construcción de soberanía, democracia y paz en beneficio de la sociedad colombiana. (Mane, 2013, n. d.)

Por su parte, el movimiento agrario, agrupado en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; ha sostenido:

...el pliego unitario representa las exigencias políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales y territoriales de comunidades históricamente marginadas y excluidas, es un llamado de atención al gobierno nacional sobre la urgencia de atender estructuralmente a un mundo rural que reclama ser sujeto de derechos. (2014, p.3)

Y más adelante continúa:

...la Cumbre y sus propuestas son una apuesta definitiva por el logro de la paz. Una paz, que para ser estable y duradera requiere de ser construida desde abajo, con nosotros y nosotras, una paz socialmente incluyente, basada en la verdad, la justicia, la efectiva participación política y la vigencia plena de los derechos humanos en los campos de Colombia. (Cumbre agraria, étnica y popular, 2014, p.3).

En el mismo sentido se han manifestado tanto el Congreso de los Pueblos, como la Marcha Patriótica, y lo han hecho aportando al debate de la misma democracia. Por ejemplo, el Congreso de los Pueblos desde su conformación, expuso lo siguiente:

...este Congreso fue convocado con un propósito fundamental: que el país de abajo legisle, que los pueblos manden, que la gente ordene el territorio, la economía y la forma de gobernarse. Así de sencillo. Estamos recuperando para el pueblo y los pueblos de Colombia nuestro carácter soberano, o como dicen, de constituyentes primarios (Congreso de los Pueblos, 2010, n. d.).

Igualmente, la Marcha Patriótica, propone: «...contribuir a producir el cambio político que requiere nuestro país, superando la hegemonía impuesta por las clases dominantes, avanzar en la construcción de un proyecto alternativo de sociedad» y caracteriza su accionar de la siguiente manera:

...Marcha es el lugar de encuentro de múltiples procesos de organización, resistencia y lucha que han decidido hacer suyo el ejercicio de la política y aspira a ser una expresión organizada del movimiento real de las resistencias y de las gentes del común. (Marcha Patriótica, 2010).

Quizá el momento cúlmine que demuestra el carácter político de los movimientos sociales y su acento en el tema de la paz, tiene que ver con la gigantesca movilización social y popular impulsada por la población joven, que se desarrolló en las principales ciudades del país inmediatamente después que el «Sí» perdiera en las urnas en el famoso plebiscito del 2 de octubre de 2016. Los marchantes, preocupados por regresar a los horrores de la guerra, exigieron:

...las víctimas deben ser el centro de los acuerdos; el cese del fuego se debe mantener; acabar con la polarización, las mentiras y la manipulación que entorpece el proceso; bienvenidas la movilización deliberativa, las ideas y las propuestas; la ONU se queda y se cuida; la mesa de negociación sigue y escuchamos su voz, y que las propuestas sean un avance y no un retroceso de lo ya acordado (Malaver, 2016, p. n. d.).

Después de renegociado el Acuerdo y de ser firmado por las partes el 24 de noviembre del 2016, las reivindicaciones políticas del movimiento social y popular colombiano se trasladaron al campo de la exigencia por la implementación de lo pactado. Los medios de comunicación empezaron a registrar

repertorios de lucha sectorizados y regionales, que exigen la puesta en práctica de lo contenido en el texto del Acuerdo de Paz.

Es de resaltar que el sector social que se ha hecho más visible respecto de la movilización que exige la implementación de lo pactado en La Habana, es el campesino productor de los denominados cultivos de uso ilícito, que en el mes de enero del año 2016, se organizó en la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam), con el objetivo de:

...promover la implementación del punto 4 de La Habana (Solución al problema de las drogas ilícitas) y aportar a la construcción de paz con justicia social en todo el territorio nacional, situación que beneficiará a miles de familias que obtienen sustento de los cultivos y que como resultado de la transformación estructural del territorio se conquistará la sustitución voluntaria, integral y concertada de los cultivos tal como quedó acordado en La Habana. (Coccam, 2017, n. d.)

La Coccam desarrolló durante el mes de octubre del año 2017, una importante movilización de campesinos productores de cultivos de uso ilícito en departamentos del sur y sur occidente del país, tales como Putumayo, Cauca y Nariño –como los más sobresalientes–, por medio de la cual denunciaron los reiterados incumplimientos del Gobierno Nacional a lo que se comprometió cuando firmó el Acuerdo de Paz con las FARC, al mismo tiempo que exigieron su implementación total y definitiva. Con ello mostraron en la protesta social, su apoyo a lo acordado en La Habana.

Al respecto, Diego Rodríguez, uno de los dirigentes del Paro en el departamento del Cauca, (como se citó en Colprensa, 2017) expresó:

...Si estamos en las vías es porque estamos velando que se cumpla lo pactado en el acuerdo de paz, en el caso de los cultivadores coca, luchamos para que se materialice lo pactado sobre la sustitución de cultivos mal tildados ilícitos y no la erradicación, la cual está generando muertos entre nuestras poblaciones.

Participación en la construcción real de paz

Sí en Colombia existe una verdadera intención por eliminar el conflicto armado, se hace sumamente necesario que se le dé cabida no solo en los procesos de paz y en la refrendación de los acuerdos, sino también en la puesta en marcha de los mismos (implementación), a todos los sectores, especialmente organizados, que tengan opiniones y aportes al respecto.

Ello implica hacer de la participación un ejercicio realmente democrático, donde se le permita a la población no solo opinar sino también la posibilidad real de debatir, pero, especialmente, de decidir y de convertirse en actor fundamental de la materialización de lo acordado. De lo contrario, se estará repitiendo la histórica exclusión a las propuestas diferentes y por tanto, la paz será nuevamente ajena al futuro inmediato. Esa es una situación que se debe evitar.

A propósito del paro agrario desarrollado durante el mes de octubre del año 2016 por la Cumbre Agraria, la revista *Semana* en un artículo que tituló: «De paros, protestas y bloqueos», y que publicó el 6 de noviembre del mismo año, sobre las lecciones del paro, entre otras cosas, concluyó:

...los mecanismos de participación deben ser más efectivos e incluyentes. En un país donde los partidos están en crisis, es normal que el movimiento social busque otros canales para manifestarse. Por eso la apertura democrática, el pluralismo y la mayor participación social son los grandes desafíos de la implementación de los acuerdos de paz y del posconflicto. (*Semana*, 2016).

Ahora bien, una real apertura democrática está atravesada por la necesaria participación de todas las fuerzas políticas del país en el debate público y en la toma de decisiones relacionada con el mismo, pero esto debe hacerse en igualdad de condiciones: se deben trazar metas de crecimiento de los movimientos sociales e impulsar estrategias para cumplirlas, no es un buen indicador decir que en la actualidad la tasa de sindicalización en Colombia sea de apenas el 3 %, por poner un ejemplo. La fuerza de la democracia se representa también en los niveles (cuantitativos y cualitativos) de organización que poseen los diferentes sectores sociales.

Los movimientos sociales en Colombia a través de la historia han realizado valiosos aportes y han atravesado la realidad política con sus demandas, actividades y propuestas, por ello mismo se convirtieron en parte del conflicto armado como una de sus principales víctimas. No en vano, ahora se debe exigir para ellos el reconocimiento que, –también históricamente– se les ha negado y su necesaria inclusión en las discusiones en torno a la paz y a la construcción de un país más democrático. Ello está atravesado por compromisos dirigidos hacia garantizar su reconstrucción y fortalecimiento, elementos indispensables para la disminución de la intensidad del conflicto y para la implementación de una necesaria y real apertura democrática.

En qué va la paz

Es importante tener en cuenta que un proceso de paz no termina con la firma del Acuerdo, aunque esto es una parte importante del mismo. Un proceso de paz será realmente exitoso cuando se haya llevado a la práctica lo acordado o mostrará su fracaso cuando no se haya podido hacer realidad. Si esto último sucediera, se daría al traste con las propias negociaciones de paz y el proceso fracasaría, es decir, el conflicto armado continuaría.

Teniendo en cuenta lo anterior, es muy preocupante que a enero del 2018, la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, ha alcanzado apenas el 18,3 % de lo pactado: los avances principales (33 %) están relacionados con el punto del fin del conflicto, que tiene que ver con la dejación de armas por parte de la guerrilla y la reincorporación de los excombatientes; pero puntos como la Reforma Rural Integral (RRI), la Participación Política, la Solución al problema de las drogas ilícitas o el de Víctimas, solo registran un cumplimiento de su implementación del 5 %, 19 %, 6 % y 9,3 %, respectivamente (OIAP, 2018).

El panorama se agrava cuando se tiene en cuenta la escandalosa cifra de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que han sido asesinados entre los años 2016 y 2017, que según la Defensoría del Pueblo, alcanzó la suma de 282 en total (*Semana*, 2018).

En este punto se debe tener en cuenta que generalmente los procesos de paz que se rompen o no logran plasmarse en la práctica, redundan en situaciones de intensidad de la violencia política mucho más altas que las existentes antes de iniciar las negociaciones (Fisas, 2010).

Esta es otra de las situaciones que como sociedad debemos impedir, especialmente teniendo en cuenta que una parte muy importante de las víctimas la ha puesto el movimiento social y popular. Pero, precisamente solo el respaldo popular y social a lo acordado en La Habana y la presión a través de la movilización para que se haga efectiva su implementación, podrá ser garantía de una paz estable y duradera.

Conclusiones

En los esfuerzos colectivos para la paz, la participación de las organizaciones sociales y populares y de los movimientos que ellas conforman, es fundamental para alcanzarla y consolidarla.

Teniendo en cuenta el breve análisis histórico que se ha hecho sobre los movimientos sociales y populares en Colombia y de su relación con los procesos de paz que se han llevado a cabo en el país entre el Gobierno Nacional y las insurgencias armadas, se puede concluir que a pesar de que a estos movimientos no se les ha permitido participar de manera directa en el curso de las negociaciones con ocasión de los mencionados procesos, estos sí han estado presentes en la arena política colombiana y han influido en ella a través de propuestas juiciosas y movilizaciones cada vez más importantes, lo cual contribuye a la presión necesaria y activa participación que ellos deben tener en la puesta en práctica de lo acordado para alcanzar la eliminación del conflicto en el país.

Lo anterior no solo demuestra el carácter político de la lucha social y popular en Colombia, que conlleva con ella la exigencia de la paz para el país, sino que, al mismo tiempo, manifiesta que la mencionada lucha no se acaba con los acuerdos pactados entre insurgencias armadas y Gobierno Nacional, al contrario, se potencia al exigir que lo plasmado en los textos acordados y firmados,

se materialice, es decir, se lleve a la práctica, se haga realidad, en palabras de la política actual: se implemente. Pues, para el caso del Acuerdo de Paz de La Habana, de los seis puntos pactados, cinco van dirigidos directamente a solucionar las causas que generaron el conflicto armado en Colombia.

Los movimientos sociales y populares colombianos, no solo han participado e influido en la política del país a partir de sus repertorios de acción, sino que en su trasegar y desarrollo a través de la historia, han ido cualificando su discurso y propuestas. Es así como de ellos se desprende una clara interpretación sobre las causas del conflicto y han elaborado una robusta explicación lógica del mismo, conjuntamente con un vasto contenido de propuestas para solucionarlo.

De la misma manera, estos movimientos sociales han incidido fuertemente en el impulso a los procesos de paz más importantes que se han llevado a cabo en Colombia, especialmente los desarrollados después de la segunda mitad de la década de los años 90 del siglo pasado, como el del Caguán y el de La Habana, a través de la masiva movilización social que los exigía.

Pero, los movimientos sociales que nos ocupan, no solo han influido en política y presionado la instauración de mesas de conversación entre insurgencias y Gobierno Nacional, sino que también se convirtieron prácticamente en las principales víctimas del conflicto, pues precisamente por su compromiso decidido con las transformaciones estructurales, fueron declarados blanco de las acciones paramilitares, situación que los llevó a casi su total exterminio.

Sin embargo, ya para el año 2010, su reactivación y reconstrucción se evidenció con las movilizaciones más importantes de lo que va corrido del siglo XXI en Colombia. Proceso que han desarrollado con altibajos y disimilitudes entre unos movimientos y otros, pero siempre conservando el carácter político de sus reivindicaciones.

Para el futuro, en un mediano plazo, se espera que sus banderas de lucha se ubiquen en, –además de las reivindicaciones económicas o materiales–, exigir y apoyar la implementación de lo que se pactó entre Gobierno Nacional y

las Farc y lo que se pudiera llegar a acordar entre el primero y la insurgencia armada del Eln.

Si Colombia desea caminar por las sendas de una política sin violencia, es menester reconocer el fundamental aporte de los movimientos sociales en ese proceso y de su destacado e histórico papel para llegar a él. La manera de reconocerlo pasa por respetar la vida de sus dirigentes y activistas, promover su crecimiento, facilitarles los recursos para que lo hagan, permitir que actúen, conversar con ellos, escucharlos e incluso, —y muy importante—, darles espacio para que participen en la toma de decisiones fundamentales para el país.

Referencias

Archila, M. (2002). *Colombia en el cambio de siglo: actores sociales, guerra y política* (Vol. 182). Bogotá: Nueva Sociedad.

Barnes, C. (s. f.). *Democratizing Peacemaking Processes: Strategies and Dilemmas for Public Participation*. Recuperado de www.c-r.org/downloads/Accord%2013_2Democratizing%20peacemaking%20processes_2002_ENG.pdf.

Coccam (2017). *Lanzamiento de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola Coccam*. Recuperado de <http://prensarural.org/spip/spip.php?article20905>.

Colprensa (23 de octubre de 2017). *Campesinos se concentran sobre vía panamericana, durante paro indefinido*. Recuperado de www.elpais.com.co/colombia/campesinos-se-concentran-sobre-via-panamericana-durante-paro-indefinido.html.

Collier, P. (2001). *Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas*. Recuperado de www.porticoluna.org/static/archivado6aad.html?archivo=collier4001.htm&autor=Paul+Collier&titulo=Causas+econ%F3micas+de+las+guerras+civiles+y+sus+implicaciones+para+el+dise%F1o+de+pol%EDticas&categoriaf=Informe&categoriaf=Sociedad&apartado=Reportajes&traductor=Carlos+Jos%E9+Restrepo&temcar=reportajes/

- Congreso de los Pueblos. (Octubre de 2010). *Proclama*. Recuperado de <http://congresodelospueblos.org/index.php/congresos-tematicos/instalacion-2010/102-proclama>.
- Cumbre agraria, campesina, étnica y popular (16 de marzo de 2014). *Cumbre nacional agraria: campesina, étnica y popular*. Prensa rural.org. Recuperado de www.prensarural.org/spip/spip.php?article13260.
- Estrada, J. (2010). *Derechos del capital. Dispositivos de protección e incentivos a la acumulación en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Fisas, V. (2010). *Introducción a los procesos de paz*. Recuperado de http://escolapau.uab.cat/img/qcp/introduccion_procesos_paz.pdf.
- García, M. (2006). *Movimiento por la paz en Colombia 1978-2003*. Bogotá: UNDP, Cinep, Colciencias.
- Gilhodes, P. (1983). *La estructuración traumatizante del Estado colombiano*. Bogotá: Ensayos Económicos.
- Gutiérrez, F. (1995). *Curso y discurso del movimiento plebeyo (1849-1854)*. Bogotá. El Áncora Editores.
- Gutiérrez, F. (2001). *Inequidad y violencia política: una precisión sobre las cuentas y los cuentos*. *Análisis Político*. Bogotá: 43, 55-75.
- Malaver, Carol (2016). *Los estudiantes tras las marchas por la paz que movieron al país*. Recuperado de www.eltiempo.com/bogota/estudiantes-tras-las-marchas-por-la-paz-49570.
- Mane. (2013). *Bases fundamentales para una propuesta de educación superior*. Recuperado de <http://manecolombia.blogspot.com/2013/10/bases-fundamentales-para-una-propuesta.html>.
- Mane. (2013). *Comunicado al pueblo colombiano y la opinión pública: sobre la participación electoral y la Mane*. Recuperado de <http://manecolombia.blogspot.com/2013/12/comunicado-al-pueblo-colombiano-y-la.html>.
- Marcha Patriótica (2010). *Declaración política Movimiento Político y Social Marcha Patriótica*. Recuperado de www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=112:declaracion-politica-movimiento-politico-y-social-marcha-patriotica&catid=97&Itemid=472.

- Medina, M. (1984). *La protesta urbana en Colombia en el siglo xx*. Bogotá: Ediciones Aurora.
- Medina, M. (1986). *Algunos factores de violencia en el sistema político colombiano: 1930-1986*. Anuario Colombiano de Historia Social y de La Cultura. 13-14, 281-297.
- Observatorio de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz –OIAP– (2018). *La Paz en Deuda*. Informe N.º 5. Recuperado de <https://oiapblog.files.wordpress.com/2018/01/la-paz-en-deuda.pdf>
- Romero, M. (2000). *Democratización política y contrarreforma paramilitar en Colombia*. Bulletin de l'Institut français d'études andines. 29 (3), 331-357.
- Romero, R. (2013). *Un conveniente repaso a la historia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y la insurgencia*. Revista Taller. 32, 25-37.
- Semana* (6 de noviembre de 2016). *De paros protestas y bloqueos*. Recuperado de [/www.semana.com/nacion/articulo/paro-agrario-y-su-relacion-con-proceso-de-paz/477245](http://www.semana.com/nacion/articulo/paro-agrario-y-su-relacion-con-proceso-de-paz/477245).
- Semana* (3 de enero de 2018). *282 líderes sociales fueron asesinados en Colombia desde 2016*. Recuperado de www.semana.com/nacion/articulo/defensoria-del-pueblo-282-lideres-sociales-asesinados-en-colombia/558634.



**RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
EN EL POSCONFLICTO
Y CONSTRUCCIÓN
DE PAZ DE COLOMBIA:
INTERPRETACIONES DEL
SECTOR TURÍSTICO**

Carlos Arturo Téllez Bedoya

Maestría en Administración, Universidad Nacional de Colombia

Docente Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá

Carlosarturo156@hotmail.com

Carolina Téllez Bedoya

Maestría en Habilidades Directivas, Negociación y Comunicación, Instituto Euro-

technology Empresas – Eurouniversity Group

Docente Corporación Universitaria Iberoamericana

Carolinatellezbedoya@gmail.com

Resumen

La Responsabilidad Social Empresarial –RSE– se presenta mediante diversas perspectivas teóricas. No obstante, hoy en día está lejos de existir un acuerdo en su definición, tornándose ambiguo el concepto y dando lugar a prácticas heterogéneas en el interior de las organizaciones. Teniendo en cuenta esta situación, en Colombia existen diversas iniciativas empresariales que han impactado positiva y/o negativamente el tejido social en medio de la situación de conflicto armado que se vivió en el país y el proceso actual de posconflicto, luego de la firma de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las Farc-Ep y el Gobierno Nacional. Por ende, esta investigación buscó conocer las interpretaciones del empresariado del sector turístico en relación con la RSE en el contexto del posconflicto y construcción de paz, para lo cual se analizaron inicialmente los

artículos académicos de los últimos diez años (2007-2017) relacionados con el tema y posteriormente, a partir de la aplicación de encuestas en el sector se profundizó con claridad dichas interpretaciones. Es de resaltar, la metodología empleada es mixta, utilizando como métodos la revisión documental y el estudio de caso, así como, instrumentos de investigación, las fichas técnicas y las encuestas.

Finalmente, se concluyó que la RSE tiene amplias posibilidades de aportar a la construcción de paz en el país, identificando la existencia de numerosas experiencias de empresas que han aportado en este sentido, aunque hoy por hoy en el turismo ello no ha sido muy documentado y se requiere de un esfuerzo decisivo de estas organizaciones en aras de construir paz de manera auténtica y duradera en diversos escenarios.

Palabras clave

Responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, paz, conflicto armado, pos-conflicto, turismo, guerrilla, Colombia.

Introducción

Colombia ha vivido en diversos procesos de violencia a través del desarrollo de su historia. En los últimos 60 años, las decisiones más importantes de los gobernantes han estado mediadas por esta situación. Lo anterior, ya que han existido momentos históricos donde las escaladas de terror han conllevado un aumento en la percepción de inseguridad por parte de la sociedad e impactado la inversión internacional, al igual que, desplazamientos forzosos, secuestros, deterioros de diversas zonas e incremento de actividades ilícitas como el narcotráfico. Estas situaciones se han basado en ciertas tensiones inmersas en el conflicto, las cuales infortunadamente nunca se han solucionado, como: el problema agrario en las regiones; contrastes y divisiones en la integración territorial y política, así como, con sus pobladores, mediante el sistema político bipartidista; y contradicciones sociales enmarcadas en la incapacidad del estado para solucionar estos problemas de manera efectiva y pacífica (González, 2014).

En medio de la violencia las organizaciones recientemente han comenzado a influir en los procesos de solución del conflicto armado y aportado a la construcción de paz. Derivado de esto, en algunos sectores económicos se ha presentado mayor incidencia de la guerra, por impactos como secuestros a los propietarios, pago de impuestos a grupos armados ilegales, daños a la infraestructura y pérdida de posibilidades de crecimiento e inversión, con lo cual se ha venido instaurando cierta proactividad empresarial. Ello, a través de estrategias como: la vinculación de la alta dirección de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia –Andi– en el rol de Alto Comisionado para la Paz; aproximación entre las partes enfrentadas para que desarrollen conversaciones, como en el caso del Eln; y más recientemente integrando prácticas de RSE, al generar empleo, capacitación, apoyo económico y acompañamiento a los diversos actores sociales inmersos en el conflicto (Guaqueta, 2006; Rettberg, 2003).

De acuerdo a la literatura académica los principales argumentos por los cuales las empresas han decidido vincularse a este tipo de iniciativas es como parte de la estrategia de marketing, mejorar su ventaja competitiva, acceder a personal con costos más bajos, mejorar el relacionamiento con ciertos actores como ONG y la comunidad, reducir los costos de seguridad, incrementar la inversión extranjera y en general razones vinculadas a aumentar la productividad o en su defecto cumplir con cierta actitud ética de los propietarios. No obstante, este tipo de comportamientos no han sido estudiados de forma concienzuda en los diferentes sectores económicos del país, con lo cual se restringe el tipo de acciones que se pueden llevar a cabo.

Por otro lado, el sector turístico representa hoy en día en el país uno de los más relevantes para el crecimiento y desarrollo. Ello se evidencia en la contribución con el 5,8 % del total del PIB y la generación de 6,1 % de empleos durante el año 2016 (WTTC, 2017). Sin embargo, esto no ha estado acompañado del desarrollo de prácticas de RSE en el sector y mucho menos en un avance de estas prácticas, enmarcadas en el proceso de posconflicto. Lo anterior, ha obviado las posibilidades que el empresariado del sector posee en términos de expandir sus negocios si se consolida una paz estable y duradera, así como, el rol de integración y convivencia que se podría desarrollar a partir de estas

prácticas. Por ejemplo, la región de Virunga Bwindi, ubicada en el suroccidente de Uganda, luego de experimentar altos niveles de violencia, ha conseguido que se desarrollen procesos de reconciliación entre hutus y tutsis a través del turismo, trabajando en conjunto bajo las mismas normas y contribuyendo a la supervivencia de los gorilas de la zona en paz (Strong y Scorce, 2007).

Es de resaltar, infortunadamente en este campo del conocimiento existe un escaso nivel de investigaciones académicas. Solo un pequeño porcentaje de estudios han abordado el potencial del turismo de paz, en gran medida porque estas investigaciones solo han examinado el intercambio entre el huésped y el visitante (Strong y Scorce, 2007). De igual forma, existe una necesidad creciente de abordar este tema teniendo en cuenta la Estrategia de Turismo y Paz que ha propiciado el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo y que pretende emplear los beneficios del turismo para el crecimiento y desarrollo de zonas que previamente por la situación de violencia no podían ser abordadas por los turistas. A partir de lo anterior y teniendo en cuenta el momento histórico por el cual se encuentra transitando el país, así como, el rol determinante del rol empresarial en el sector turístico, surge el siguiente cuestionamiento:

¿Qué interpretaciones posee el empresariado del sector turístico acerca de la Responsabilidad Social Empresarial en el escenario de posconflicto y construcción de paz en Colombia?

Conocer las interpretaciones que posee el empresariado del sector turístico acerca de la Responsabilidad Social Empresarial en este escenario es relevante teniendo en cuenta el impacto que tiene el apoyo del sector privado en el mantenimiento y construcción de la paz. Ello, ya que infortunadamente hoy por hoy subsiste un ambiente de polarización política en el cual se presentan actores quienes se encuentran en contravía de implementar los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, así como, infortunadamente tampoco se presenta una estrategia de comunicación clara en cuanto a la información inmersa en estos. Adicionalmente, la participación empresarial en la elaboración de los marcos políticos en los cuales se desarrollarán los planes de reconstrucción del país se considera un aspecto central en la transición de la guerra, teniendo en cuenta la capacidad de dicho sector para suplir los

vacíos técnicos y financieros de un Estado en recuperación y los impactos económicos que trae consigo (Niño y Devia, 2015). Esto, cobra mayor relevancia en el turismo teniendo en cuenta su creciente importancia en la economía nacional y los grandes impactos que tiene en el entorno.

Por último, esta investigación se considera pionera en el país al abordar directamente esta problemática en el contexto del turismo y aporta al campo de estudio de la RSE, facilitando el desarrollo de investigaciones posteriores que empleen instrumentos metodológicos similares y que se aproximen a escenarios complejos. Igualmente, se debe enunciar que la metodología propuesta es de carácter mixta, y se convierte en un aspecto esencial al abordar directamente las interpretaciones de los empresarios en el contexto del posconflicto, correspondiendo a propuestas similares planteadas por Angélica Rettberg, en anteriores investigaciones.

Metodología

La investigación realizada es mixta, contemplando elementos de la metodología cualitativa y cuantitativa, en aras de comprender con profundidad los resultados obtenidos en el estudio. De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 456) «los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada, logrando un mayor entendimiento del objeto de estudio» (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Por otro lado, el diseño de la investigación es transformativo secuencial, comprendiendo en un primer momento los datos cuantitativos para luego abordar la información cualitativa y, finalmente, concluir con el análisis de datos empleando ambas perspectivas.

En un primer momento la investigación tomó como referentes los artículos en revistas académicas que tratan el tema de Responsabilidad Social Empresarial–RSE– en el conflicto armado y posconflicto entre 2007 y 2017, para ello se utilizaron fichas técnicas y posteriormente se empleó la técnica de análisis del discurso, buscando comprender la información inmersa en esta documen-

tación. Luego, para los datos cuantitativos se desarrolló como instrumento una encuesta, la cual se basó en la propuesta de Rettberg (ver *Explorando el Dividendo de la paz: percepción de los impactos del conflicto armado en el sector privado colombiano*), posteriormente se validó con profesores expertos en la temática y finalmente se aplicó a una muestra no probabilística orientada a los gerentes de organizaciones en el sector turístico del país entre julio y agosto del año 2017.

Con la finalidad de aproximarse a estas organizaciones se solicitó el listado oficial de empresas del sector constituidas legalmente a nivel departamental, a través de los entes gubernamentales respectivos que gestionan este tipo de información, luego, con la información recogida se remitió la encuesta a cada organización, obteniendo un total de treinta respuestas en este periodo. Infortunadamente a nivel gubernamental no se obtuvo respuesta del listado oficial de empresas en cada departamento, por ende, ello representa una limitación de la investigación y una oportunidad para futuros trabajos, los cuales pueden indagar comparativamente en las regiones estos tópicos, empleando el mismo instrumento.

Discusión y resultados

En el siguiente apartado se describe en primer lugar el análisis cualitativo, el cual tiene como objetivo analizar a partir de los artículos académicos de los últimos diez años (2007-2017) los principales aportes y limitaciones de las organizaciones colombianas en la solución del conflicto armado y el avance del posconflicto. Esta información fue resultado de un rastreo bibliográfico en las publicaciones efectuadas en revistas indexadas y mediante el análisis de contenido se exponen las principales conclusiones teniendo en cuenta los aportes del sector privado en este contexto, igualmente, se tomó como referencia todo el sector privado, ya que infortunadamente es limitada la información correspondiente al rol del turismo en este contexto. Posterior a este análisis se da lugar a la exposición de los principales resultados obtenidos en las encuestas, evidenciando las interpretaciones de los empresarios en el sector turístico acerca de la RSE en el posconflicto y actual proceso de construcción de paz.

Análisis de la literatura académica correspondiente a la RSE en el posconflicto y construcción de paz:

De acuerdo a los artículos revisados se observa que existe literatura académica creciente en el campo de la RSE enmarcada en el posconflicto y construcción de paz. Además, se identificó que los artículos generalmente hacen referencia a estudios de algunos de los actores inmersos en el conflicto e infortunadamente no abordan de forma integral todas las interpretaciones del tejido social. Por otro lado, en las publicaciones académicas sobresalen como subtemas: reflexiones acerca del rol de las empresas como constructoras de paz, la competencia de estas organizaciones en aras de promover alianzas estratégicas que impacten la finalización del conflicto y las labores de coordinación para abordar diversos actores en medio del proceso de paz (Kolk y Lenfant, 2013, citado por Jiménez, 2014).

Es de resaltar; este tipo de estudios viene aumentando recientemente, teniendo en cuenta que, tras la conclusión de la Guerra Fría, los conflictos entre Estados se han hecho menos frecuentes, a la vez que han empezado a emerger diversas guerras civiles al interior de los mismos (Infodev, The World Bank, 2013, citado por Niño & Devia, 2015). Lo anterior, ha evidenciado el rol significativo que pueden jugar las organizaciones, no solo en el posconflicto sino incluso en el conflicto mismo. Las investigaciones académicas han aceptado esta premisa y, por ende, se ha venido transformando el énfasis de estos estudios, teniendo en cuenta,

...los primeros estudios tendieron a centrarse en las empresas como un defensor del status quo y un factor primordial para explicar los conflictos internos. Esto fue ilustrado, por ejemplo, en estudios de las oligarquías latinoamericanas, africanas y asiáticas que hicieron un uso sistemático de la coacción para reprimir la protesta popular y proteger sus privilegios (Gómez, 2002; Marais, 2001; Paige, 1998), o en estudios de economías coloniales y el papel de empresas específicas en la explotación de riquezas naturales (Bucheli, 2005). Más recientemente, los estudios documentaron la participación del sector privado en el saqueo de recursos naturales y la perpetuación de la corrupción y la inestabilidad (ver Taylor, 2003; Global

Witness y Oxfam, 2007) (...) Las empresas también contribuyen al conflicto a través de sobornos para obtener contratos lucrativos y lavado de dinero, que desvía fondos dirigidos al desarrollo o propósitos pacíficos (Le Billon, 2003; Schwartz y Gibb, 1999; Shankleman, 2007). (Rettberg, 2016, p.4-5).

Estos elementos contribuyen para que el rol de las organizaciones hoy por hoy sea bastante amplio y de mayor dinámica en relación con los aportes en la construcción de paz, posibilitando la integración de la RSE en este contexto. Teniendo en cuenta lo anterior, infortunadamente las empresas no solo han asumido un rol positivo, sino también han actuado como víctimas del conflicto armado, agentes pasivos o generadores de violencia (Velasco, 2014). De acuerdo a esto, históricamente en los conflictos armados han existido casos que atestiguan el rol negativo de ellas, por ejemplo, se ha criticado el rol que poseen las empresas bananeras como Chiquita Brans en la financiación de grupos paramilitares colombianos, los asesinatos y otro tipo de violaciones a los derechos humanos que generó Endiama –Empresa Nacional de Diamantes de Angola– (Télez, 2014). También son conocidas las denuncias contra Coca Cola FEMSA por financiar grupos paramilitares colombianos y el grave escándalo de OXI en el año 2000, en el cual luego de la manifestación de los indígenas U'wa por el respeto a su territorio aparecieron muertos tres niños de la comunidad (Jiménez, 2014), aspecto que desencadenó una amenaza masiva de desaparición por parte de esta etnia si la empresa no se retiraba de la región.

En contraposición a lo expuesto, algunas empresas han asumido roles positivos en la finalización de los conflictos armados y han empezado a realizar aportes en los procesos de construcción de paz. En el ámbito internacional esta situación se evidenció en la creación del sistema de certificación del proceso de Kimberley en la industria del diamante, el cual se constituyó como una iniciativa que tuvo como objetivo detener el flujo de diamantes en medio de la guerra. Así mismo, es reconocida a nivel internacional la decisión del industrial alemán Oskar Schindler, quien protegió a los judíos en medio del régimen nazi al interior de su fábrica (Jones, 1998, citado por Rettberg, 2016).

Paralelamente, a nivel nacional se ha evidenciado que dicha participación aumentó en la medida en que se recrudeció el conflicto armado, al mismo tiempo,

se ha divulgado a partir de la normatividad iniciativas las cuales facilitan esta vinculación. Por ende, a partir de 1982 ha sido exponencial el crecimiento de las acciones emprendidas por parte de las empresas (ver tabla 1), por ejemplo, entre 2003 y 2012 existían 115 empresas comprometidas con el proceso de paz, entre 2013 y 2014 la cifra ascendió a 530 y finalmente hacia finales de 2014 se consolidaron 1183 empresas que, de acuerdo a Ochoa, Vanegas y Arizabaleta (2017) aportaron en este sentido.

Tabla 1: Participación de las empresas en el proceso de construcción de paz en el país (1982-2006)

ACTIVISMO EMPRESARIAL	PERÍODO PRESIDENCIAL					
	82-86 Betancur	86-90 Barco	90-94 Gaviria	94-98 Samper	98-02 Pastrana	02-06 Uribe
Declaraciones públicas	x	x	x	x	x	x
Reuniones con negociadores oficiales o presidente	x		x	x	x	
Creación y participación en foros y mesas de trabajo	x			x	x	x
Contactos con actores armados		x		x	x	
Participación activa en mesas oficiales de negociación		x		x	x	
Participación como veedores de acuerdos de Paz	x					
Creación de iniciativas de paz en el país					x	
Pago de cargas fiscales	x		x		x	x
Participación activa en políticas de reintegración de desmovilizados		x	x			x

Fuente: Ochoa, Vanegas, y Arizabaleta (2017).

Por otro lado, la literatura científica manifiesta que el rol de las organizaciones en el país viene enriqueciendo los procesos de reconciliación a nivel regional, al igual que, la reintegración de los excombatientes y el apoyo a las víctimas del conflicto. Así mismo, la disposición a participar de los empresarios también

ha aumentado, de acuerdo al estudio llevado a cabo por Sepúlveda, Moreno, Tovar, Franco & Villarraga (2015) el 90 % de los empresarios encuestados contratarían excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-Ep, lo anterior es importante teniendo en cuenta que solo se requiere de una masa crítica del sector privado para apoyar los esfuerzos de consolidación de la paz (Rettberg, 2016). Ahora pues, entre las iniciativas empresariales documentadas más sobresalientes de RSE con participación del sector privado en el país se encuentran:

Tabla 2: Aportes de las empresas al posconflicto

ORGANIZACIÓN	APORTES	ACTORES VINCULADOS
Grupo Éxito	Inclusión en la cadena de proveedores de campesinos en situación vulnerable.	Víctimas, excombatientes y población.
Ecopetrol	Apoyo a 24 iniciativas de construcción de paz, como: la Red Prodepaz, el Programa de desarrollo y paz del Tolima Tolipaz, la Corporación desarrollo y paz del bajo Magdalena, la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y zona costera.	Víctimas, excombatientes y población.
ISA	Creación del programa Prodepaz, beneficiando a más de 3.000 familias desde 1999. Prodepaz está a cargo del mantenimiento de la base de datos del Sistema de Información Regional para la paz, que contiene los datos demográficos y económicos básicos que ayudan a identificar proyectos, beneficiarios, así como, otras organizaciones potenciales socias.	Víctimas, excombatientes y población.
Anglo sudafricana SA- BMiller y Jumbo	Participación en el Programa de reincorporación a la vida civil generando empleo a excombatientes, adquiriendo productos desarrollados por ellos y/o donando tiempo para contribuir a mejorar los proyectos productivos ligados a quienes están en dichos procesos.	Excombatientes.
Grupo Mundial y Alkosto	Generación de empleo para excombatientes y víctimas del conflicto.	Excombatientes y víctimas.

ORGANIZACIÓN	APORTES	ACTORES VINCULADOS
Argos, Nutresa, Isagen, Terpel, Carvajal y Olímpica	Financiación de comunidades de paz y de estudios acerca del tema.	Víctimas.
Nestlé	Generación de espacios de perdón, reconciliación y paz en zonas donde opera la empresa, en articulación con Fundación para la Reconciliación, especialmente en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Bugalagrande.	Víctimas, excombatientes y población.
Coca Cola-FEMSA	Reintegración de excombatientes a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) con el Programa de Paz y Reconciliación, a partir de: contribución con tiempo, apoyo a proyectos productivos, financiación a centros de aprendizaje comunitario y construcción de espacios de paz y reconciliación.	Excombatientes.
Aviatur	Vinculación laboral de excombatientes en el Tayrona.	Excombatientes.
Caracol Televisión y El Espectador	Establecimiento de una alianza estratégica mediante la cual viene desarrollándose un programa que busca reconstruir la memoria histórica y aportar a la construcción de paz.	Víctimas y excombatientes.
RCN radio y RCN Televisión	Realizaron crónicas que permitieron visibilizar la situación de las víctimas en su proceso de reparación.	Víctimas.

Fuente: Elaboración propia basado en Mariño y Valencia, 2015; Jiménez, 2014.

De acuerdo a la tabla 2, se evidencia cómo las experiencias empresariales más divulgadas son aquellas que efectúan las grandes empresas y particularmente las que tienen relación con la financiación de proyectos de paz, empleabilidad de excombatientes y construcción de espacios de reconciliación con la comunidad. No obstante, son diversos los roles a desempeñar por las empresas en este proceso a través de la RSE y que sin duda alguna podrían llevar a impactar positivamente el involucramiento de las regiones, la participación activa

de las comunidades y la sociedad civil, eliminando expresiones de violencia, afianzando dinámicas de resolución de conflictos y divulgando prácticas de inclusión política, social y económica de las comunidades o ciertos actores inmersos en ellas (Barreto, 2014).

Igualmente, subsisten algunas problemáticas en las cuales se ven inmersas las organizaciones en el país al buscar realizar acciones de RSE en este contexto. Entre otras dificultades se ha presentado: la inexistencia de mecanismos unificados para reportar eventos relacionados con el posconflicto, la voluntariedad del tipo de acciones efectuadas por la empresa y, por ende, inexistencia de sanciones si ella no cumple con lo previsto y, finalmente, insuficientes mecanismos de monitoreo del Gobierno acerca de las acciones de RSE (Alfonso, 2013). Además, los empresarios desconocen en detalle los componentes de la ley de víctimas, así como, incentivos tributarios a los cuales pueden acceder en el momento de contratar excombatientes (Mariño y Valencia, 2015). Así mismo, se ha identificado una importante limitación a la contratación de estos actores teniendo en cuenta que poseen bajos niveles de escolaridad, altos niveles de presión por parte de grupos al margen de la ley para rearmarse, poco conocimiento de los mecanismos del mercado y la vida empresarial y baja tolerancia a la frustración (Martínez y Duarte, 2016).

Estos aspectos evidencian la relevancia de concientizar a los empresarios y diversos actores presentes en el conflicto armado, los cuales a partir de la integración entre Gobierno, organizaciones y comunidad lleven a cabo iniciativas de construcción de paz que confluyan, generando mayor impacto y trascendiendo a través del tiempo en el tejido social. Por otro lado, el sector turístico no es ajeno a este tipo de articulación y teniendo en cuenta la relevancia que posee en la actualidad se recomienda generar mayor apertura a esta clase de acciones, ya que la paz es un aspecto necesario para el turismo,

...pero, además, y tal como lo reflejan los diferentes programas de turismo en el país, este se está planteando como un elemento de desarrollo social, cultural y ambiental, que más allá de lo económico, se encamine hacia la reducción de las desigualdades y diferencias que tanto el propio conflicto,

como otros contextos, han podido dejar al país. (Roza y Garavito, 2014: 60, citado por Menchero, 2018, p. 434).

En este sentido, urge un relacionamiento concreto donde el rol del Gobierno a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al igual que, los órganos gremiales como la Asociación Hotelera y Turística de Colombia –Cotelco– y la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo –Anato–, brinden espacios de sensibilización al empresariado y socialicen las mejores prácticas de RSE que hoy por hoy se están ejecutando en las zonas más impactadas por el conflicto. A su vez, el sector turístico puede llegar a tener impactos de mayor envergadura en el entorno en la medida en que se ejecuten proyectos a través de cooperativas, los cuales tengan participación de la comunidad y sin lugar a duda faciliten la inclusión social y laboral de las comunidades en las zonas rurales, así como, generen mayor desarrollo económico (Serna y Rodríguez, 2016).

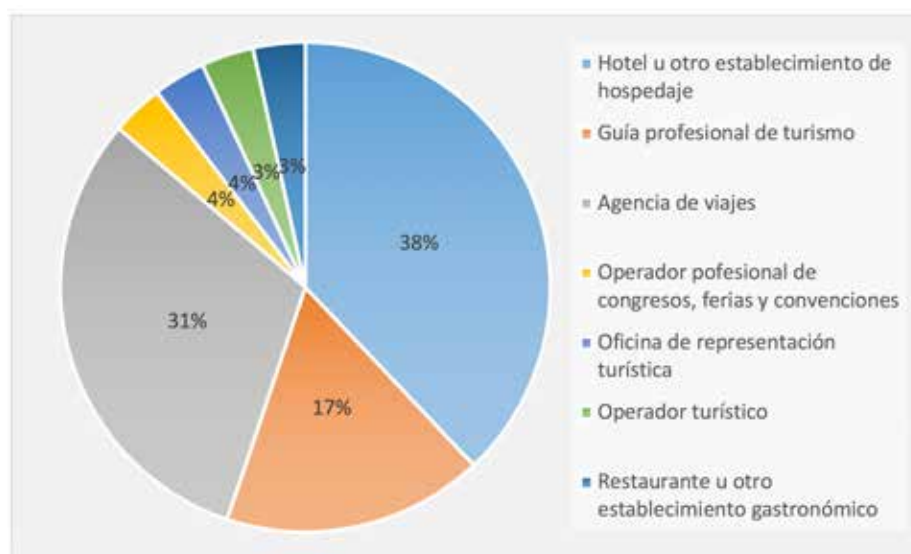
Es de resaltar, hoy por hoy existen trabajos empíricos que documentan información acerca de los beneficios concretos que las organizaciones del sector turístico pueden otorgar a la paz en el país. De tal forma que en regiones como las de Urabá, donde tuvieron presencia diversos actores armados, hoy por hoy están experimentando crecimiento económico a través del turismo y en especial se ven beneficiadas de un modelo comunitario y de economía solidaria, donde confluyen excombatientes y víctimas aportando a la reconstrucción del tejido social en la región (Villamizar, 2017). También, en la Sierra Nevada de Santa Marta se viene llevando a cabo una experiencia con alto valor que integra a excombatientes como guías turísticos de Ciudad Perdida (Vega, 2017).

Análisis de resultados en las encuestas aplicadas al empresariado del sector turístico colombiano:

Las encuestas efectuadas fueron respondidas en 80 % por micro y pequeñas empresas, coincidiendo con la mayor proporción de este tipo de organizaciones a nivel nacional. Por otro lado, el departamento o ciudad donde se ubican las organizaciones que componen la muestra está distribuido así: Bogotá 53,3 %, Cundinamarca 23,3 %, Guaviare 6,7 %, Atlántico 6,7 %, Antioquía 3,3 %, Caldas

3,3 % y Chocó 3,3 %. Igualmente, el subsector en el cual se encuentran estas organizaciones está conformado mayoritariamente por establecimientos de alojamiento (36,7 %), agencias de viaje (30 %) y guianza turística (16,7 %) –ver figura 1–. Así mismo, existió participación de operadores profesionales de congresos y ferias, oficinas de representación turística, operadores turísticos y establecimientos gastronómicos en una baja proporción (cada uno con un 3,3 %). Finalmente, en cuanto al tiempo de creación de las empresas pertenecientes a la muestra, se identifica que: han sido creadas hace más de 16 años el 40 % de organizaciones; entre 12 y 15 años el 3,3 %; entre 9 y 12 años el 6,7 %; entre 5 y 8 años el 30 %; y entre 1 y 4 años el 20 %. Estas cifras denotan una experiencia importante en el mercado, que, sin duda alguna, agregan valor a los datos recogidos.

Figura 1: Subsector al que pertenecen las empresas de la muestra



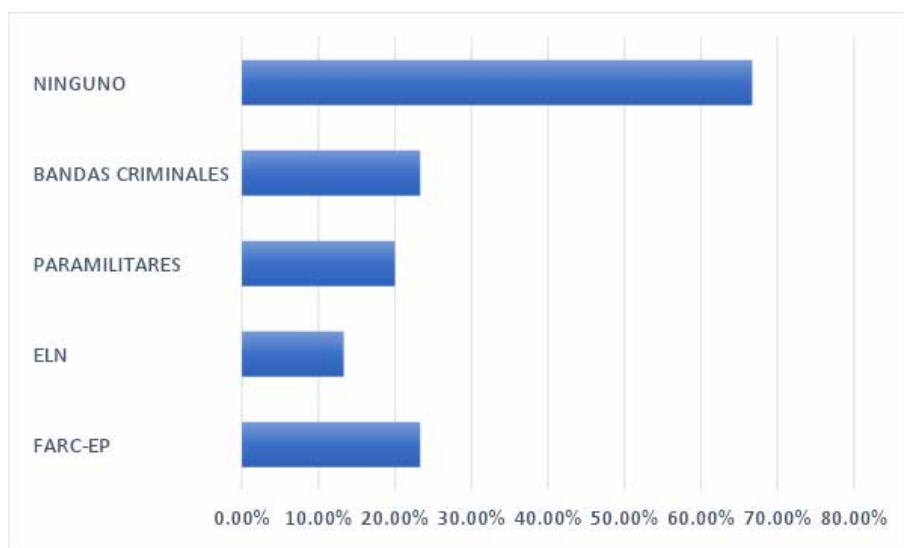
Fuente: Elaboración propia

En segundo lugar, los resultados evidencian que la conceptualización de la RSE que los empresarios del sector turístico afirman tener se circunscribe en mayor medida en las teorías de carácter político y de ética y moral en los negocios. Ello significa que se argumenta el desarrollo de este tipo de acciones teniendo en cuenta el rol social adquirido por las empresas, al igual que el respeto por dere-

chos universales. Lo anterior, coincide con estudios previos los cuales demuestran cómo la óptica teórica de RSE que las organizaciones asumen depende en gran medida de las actitudes de sus propietarios, el tamaño y el contexto regulatorio, de tal manera, que gran parte de las empresas del sector turístico justifican su accionar en la óptica teórica ética y moral (Télez, 2015, 2016 y 2017).

Aunado a lo mencionado previamente, el 80 % de las empresas afirman que se consideran socialmente responsables y al profundizar en el tipo de acciones desarrolladas en gran proporción llevan a cabo actividades que aportan al cumplimiento de la ley. Igualmente, del total de la muestra muy pocas empresas afirmaron realizar acciones orientadas a algún actor inmerso en el proceso de posconflicto, aspecto que llama la atención e ilustra la necesidad de desarrollar acciones positivas enfocadas a estos actores.

Figura 2: Interpretación de las empresas del sector turístico acerca de los actores de influencia en su área de operaciones



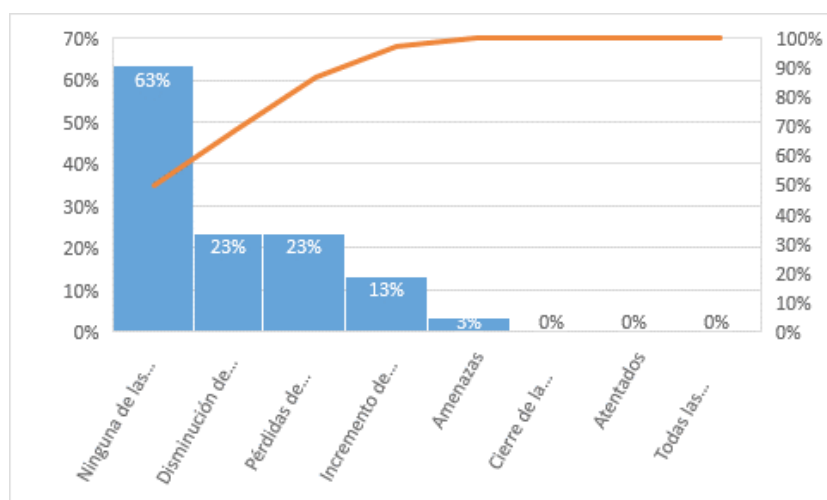
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los actores armados al margen de la ley que tienen influencia en el área de operaciones de la empresa, en mayor medida (66,7 %) no existe la

presencia de estos grupos (ver figura 2). No obstante, se evidencia en bajos porcentajes la percepción afirmativa respecto a la concurrencia de ellos en los lugares de operación del negocio, así: bandas criminales (23,3 %), FARC (23,3 %), grupos paramilitares (20 %) y Eln (13,3 %). Sin embargo, estos datos no coinciden con la información que emana del cuestionamiento acerca del relacionamiento entre estos grupos y la empresa, donde el 93,3 % menciona que no tiene ningún tipo de interacción. Ello indica que, en bajos porcentajes ha existido alguna relación en el marco del conflicto armado con la guerrilla del Eln, las Farc, grupos paramilitares y Bandas Criminales. Además, se identifica que el grupo de empresarios más afectado por el conflicto fueron los guías turísticos, al igual que, se evidencia a partir de los datos obtenidos cierta confusión entre lo que significan las bandas criminales, los grupos delincuenciales y las pandillas.

Adicionalmente, se encontró información cualitativa del tipo de relación con estos grupos, acotada particularmente a hechos de retención en el desarrollo de la actividad de guianza turística y charlas informales, a partir de los recorridos desarrollados.

Figura 3: Interpretación de las empresas del sector turístico acerca de los problemas generados por la presencia de grupos al margen de la ley en la zona de operación

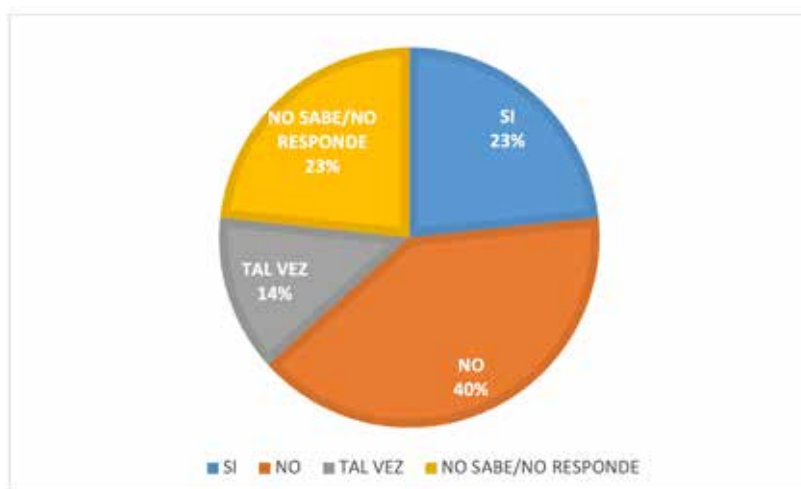


Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los problemas generados a raíz de la presencia de estos grupos armados en las zonas de operación de la empresa se evidencia que el 66,3 % menciona no haber tenido ningún efecto directo, mientras un bajo porcentaje afirma pérdidas de oportunidades de negocio, disminución de ventas como resultados en redes de distribución y transporte e incremento de gastos (ver figura 3). Aunado a ello, se ilustra que los encuestados que poseen una mayor percepción negativa en relación con la presencia de actores armados en la zona de conflicto, son quienes enuncian algunos problemas derivados de este.

En relación con el porcentaje de gastos que cada organización invierte en términos de seguridad, en gran proporción (67 %) ellas afirman incurrir en porcentajes mayores al 3 % del total de gastos de la empresa. Sin embargo, en un país en paz la mayoría de los encuestados enuncian que disminuirían el porcentaje de gastos de seguridad reduciendo en 20 % esta cifra, es decir, el 47 % de encuestados plantean invertir una cifra superior al 3 % de su presupuesto en gastos asociados a seguridad teniendo en cuenta los cambios en el panorama actual.

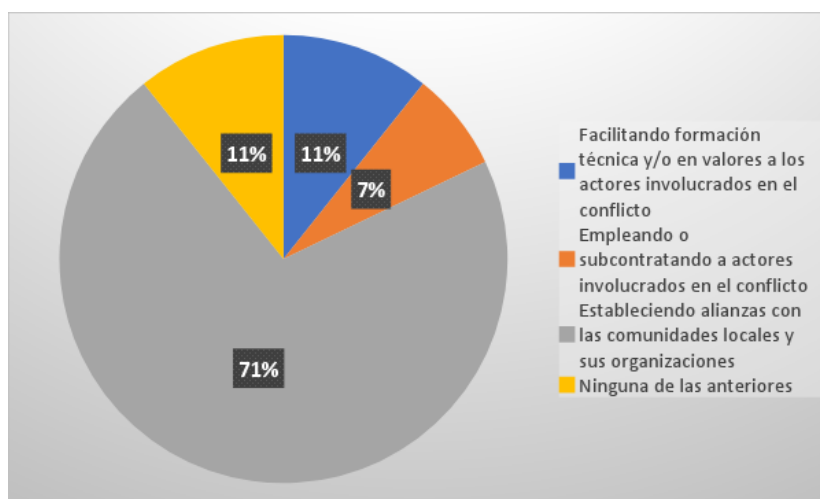
Figura 4: Realización de acciones de RSE que impactan el posconflicto de Colombia por parte de empresas turísticas



Fuente: Elaboración propia

En cuanto a acciones que desarrollan hoy en día las empresas enmarcadas en el proceso de posconflicto, solo el 23,3 % menciona la realización de ellas. En gran medida, estas se orientan a la promoción de destinos turísticos que previamente por la situación del conflicto armado eran imposibles de llegar. Igualmente, se evidencia que el proceso de construcción de paz se entiende por parte de algunas de estas organizaciones como aporte a la empleabilidad y el buen clima laboral del país, además, solo una empresa enuncia una actividad específica refiriéndose a la asistencia a jornadas convocadas por el Gobierno. Por otro lado, en cuanto a actores a los cuales orientan estas acciones básicamente ellas están enfocadas en capacitación y contratación con la comunidad local para complementar los servicios de la organización. Además, solo una empresa posee una iniciativa caracterizada adecuadamente como de RSE enmarcada en este contexto y la sintetiza en la promoción de programas de memoria histórica de los sitios turísticos.

Figura 5: Acciones de RSE que las empresas del sector turístico desarrollarían de forma sostenida con la finalidad de aportar a la construcción de paz en el país

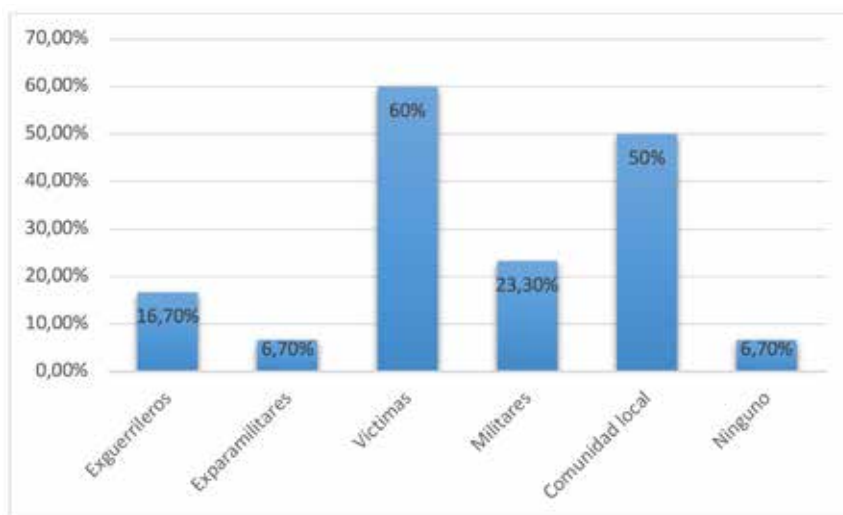


Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta el bajo porcentaje de acciones de RSE orientadas a la construcción de paz, se preguntó acerca de las iniciativas que el empresariado

estaría dispuesto a emplear con este fin. Ello denotó que es más relevante el trabajo en alianza con las comunidades locales, mientras se registra un bajo porcentaje de empresas que desarrollarían acciones como: facilitar formación técnica y/o en valores a los actores inmersos en el conflicto; además de generar empleo y subcontratación para estos colectivos. Estos datos dejan de lado que en medio del proceso de construcción de paz que actualmente está teniendo el país, es importante brindar alternativas de desarrollo para los actores inmersos en el conflicto armado, en aras de no desencadenar nuevas eras de violencia. Tal como enuncia García (2015), existen aspectos de reincidencia en el conflicto armado como la ausencia de empleo, que impulsa la adhesión a grupos ilegales.

Figura 6: Actores a los cuales las empresas del sector turístico preferirían aportar a través de acciones de RSE para la construcción de paz



Fuente: Elaboración propia

Igualmente, en cuanto a actores específicos a los cuales se podrían orientar acciones de RSE, existe una mayor percepción positiva de vincular a víctimas del conflicto (60 %), comunidad local (50 %) y en menor grado a: militares (23,3 %), excombatientes de la guerrilla (16,7 %) y exparamilitares (6,7 %) –ver figura 6–. Estos datos respaldan creencias individuales del empresariado

del sector, quien teme ser juzgado críticamente por los clientes y la sociedad, al emplear a ciertos actores sociales o en su defecto deseo de no generar conflictos internos causados por ello.

Finalmente, los resultados de la encuesta indican que el 77 % de las empresas afirman invertir menos del 1 % de sus gastos en la construcción de paz, con lo cual se deja en evidencia la relevancia de concienciar a este colectivo. En el momento de indicar el tipo de actividades llevadas a cabo por parte de las empresas para la construcción de paz, se concluye que, la mayoría comprende este proceso de forma simultánea al de generar empleabilidad y solo una empresa enuncia acciones específicas en el sentido que recoge la literatura como construcción de paz, al realizar acciones de formación y preparación para la comunidad chocona en los diferentes municipios que cuentan con vocación turística. Estos datos llaman la atención porque precisamente esta organización describió un impacto más alto en su zona de operación por parte de los grupos armados ilegales.

Conclusiones

El objetivo del documento fue conocer las interpretaciones del empresariado del sector turístico en relación con la RSE en el contexto del posconflicto y construcción de paz, lo cual se logró evidenciar en el ejercicio práctico de la investigación, teniendo en cuenta el enfoque metodológico de tipo mixto de la misma y los instrumentos empleados, aspectos que se convirtieron en una fortaleza práctica y que permitirán en el futuro el desarrollo de trabajos similares en diversas regiones del país o entre países en situación de conflicto, en aras de llevar a cabo estudios comparativos. Este resultado de investigación se considera pionero en cuanto al abordaje de la problemática propuesta en el contexto del turismo y representa un aspecto fundamental para la construcción de paz en el país, contribuyendo a la identificación del rol que deben asumir las empresas en un sector clave de la economía colombiana. Más aún, ya que ellas se verán beneficiadas del dividendo de paz tras la aprobación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, refrendado en el Congreso de la República de Colombia durante el año 2016.

El análisis de la literatura académica en el tema, denota numerosos los aportes que las organizaciones del sector pueden realizar positiva o negativamente en aras de perpetuar los conflictos armados, apoyar el posconflicto y en general apropiarse de los espacios instituidos para la construcción de paz. No obstante, ello debe originarse en un proceso de sensibilización del empresariado, al igual que, en la articulación entre el Gobierno, la comunidad y las agremiaciones, creando distintos beneficios que permitan propiciar la vinculación de manera activa a este tipo de iniciativas. En la actualidad también se han generado ejercicios donde se vinculan a varias organizaciones del país apoyando la construcción de paz, estos sin lugar a duda pueden generar mayores impactos en la comunidad que si actuaran de forma aislada, por lo tanto, a través de la divulgación se puede lograr la vinculación de más empresarios del sector turístico, particularmente de las mipymes, a este tipo de actividades.

De otro lado, las actitudes del empresario colombiano en relación con el apoyo del posconflicto y el proceso de construcción de paz han venido ajustándose a las coyunturas políticas. A pesar de que desde 1982 ha existido algún tipo de iniciativas en el tema es hasta los últimos tres años cuando se ha manifestado un reto constante en el cual organizaciones de diversas actividades económicas vienen actuando, aunque en el caso del sector turístico se encuentra muy poco documentada dicha participación. Particularmente, las empresas colombianas que han decidido participar activamente en el posconflicto presentan cierta voluntad para involucrarse en estas iniciativas, a la vez que, las demás organizaciones tienen en gran medida un desconocimiento de la ley de víctimas y los mecanismos gubernamentales establecidos para vincularse a estos programas. Igualmente, la labor de cooperar para el posconflicto también es una tarea conocida en mayor medida por la gran empresa, dejando de lado la importancia que tienen las mipymes y los aportes que pueden desarrollar en este sentido.

En este contexto, hoy en día se debe premiar la labor de concientización del empresariado en el sector turístico acerca de rol determinante que posee en la fase actual del proceso de implementación del Acuerdo. Para ello sería útil ubicar referentes exitosos a nivel nacional e internacional, facilitando el agendamiento de buenas prácticas que en este sentido faciliten la comprensión de estrategias que

las organizaciones puedan asumir y que sin lugar a duda serán beneficiosas no solamente como instrumento ético sino también para el marketing y la rentabilidad de la empresa. Lo anterior, se evidenció en los resultados de la encuesta efectuada, donde diversas organizaciones del sector turístico, como establecimientos de alojamiento, agencias de viaje y guías turísticos, expusieron que invertirían menor presupuesto en seguridad si existiera paz en las zonas donde operan.

Por otro lado, los resultados de la encuesta ilustran cómo la muestra se convierte en un elemento importante teniendo en cuenta la heterogeneidad del tipo de organizaciones seleccionadas y representando más del 80 % de ellas una antigüedad superior a cinco años. Así mismo, se concluye que las nociones de RSE visibilizadas en mayor medida son las que corresponden con las teorías integradoras, especialmente en aras de cumplir con la normatividad pública, lo cual contradice a lo afirmado por los encuestados quienes identifican el concepto orientándolo a las teorías de carácter político y la ética y moral.

Adicionalmente, a través de estos resultados se identifica que de las empresas encuestadas no existe un porcentaje relevante de ellas que hubiera recibido un impacto directo del conflicto armado y derivado de esto no se visibiliza mayor proactividad a la hora de actuar en el marco del posconflicto. A su vez, los empresarios del sector turístico no tienen claridad en cuanto a la conceptualización y acciones correspondientes derivadas del posconflicto y su diferenciación con la construcción de paz, ya que esta última se evalúa como la labor de generación de empleo y buen ambiente laboral al interior de la organización.

En cuanto a las acciones de RSE a desarrollar por parte de las empresas del sector turístico en este nuevo escenario, existe una mayor tendencia a respaldar iniciativas de aproximación que ejerzan alianzas con las comunidades de las zonas afectadas. En este sentido, es importante concientizar profundizando las posibilidades de contratación de los actores sociales que previamente participaron en el conflicto armado, o en su defecto a través de prácticas de acompañamiento en el proceso formativo y/o emprendimiento de ellos.

Así mismo, los resultados de la investigación evidencian, tal como representa la experiencia empírica con el plebiscito del año 2016, que los lugares donde

existieron mayores impactos del conflicto armado son los que hoy por hoy poseen mayores iniciativas empresariales en el sector turístico, aportando al mantenimiento y construcción de paz en el país. Finalmente, en relación con estudios previos las organizaciones que decidan implementar acciones de RSE en este contexto, deben tener en cuenta cómo algunas empresas u otro tipo de actores actúan como saboteadores debido a los beneficios que representaba el conflicto armado para ellos. Lo anterior, significa un reto fundamental no solo para los empresarios, sino para movilizar a todo el tejido social, exigiendo la asunción de un comportamiento activo por parte de las organizaciones y, por ende, requiriendo que la academia fortalezca sus posicionamientos en el tema, al generar mayor debate y proactividad en él.

Por último, en futuros ejercicios investigativos orientados a conocer la RSE de otros sectores económicos en este tipo de contextos, se recomienda generar una aplicación similar a la propuesta realizada en este documento, adecuando los instrumentos a los conceptos sectoriales e involucrando en mayor medida a las agremiaciones respectivas, esto podría facilitar el trabajo de campo y, por lo tanto, la consecución de los resultados propuestos. Además, se sugiere acompañar el desarrollo de futuros estudios con la realización de fases posteriores de sensibilización y formación del empresariado, donde se logren mayores resultados e impactos en la comunidad, y en general en el país. Por último, hoy por hoy la paz de Colombia y cualquier país en conflicto es una construcción colectiva y no solo del Gobierno o una organización, por lo tanto, de la unidad y el trabajo sistemático y colaborativo dependerá el mantenimiento y sostenibilidad de la misma.

Referencias

Acevedo, R., Márquez, L., y Rivera, A. (s. f.). *La empresa en el posconflicto: una visión desde la teoría de la gobernanza y la responsabilidad social empresarial*. Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de http://investigacion.bogota.unal.edu.co/fileadmin/recursos/direcciones/investigacion_bogota/documentos/enid/2015/memorias2015/ciencias_sociales/la_empresa_en_el_posconflicto_una_vision_.pdf

- Alfonso, M. (2013). Empresas y derechos humanos: una responsabilidad en construcción. *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 43(118), 349-385. Recuperado de www.scielo.org.co/pdf/rfdcp/v43n118/v43n118a11.pdf
- Barreto, M. (2014). Preparar el post-conflicto en Colombia desde los programas de desarrollo y paz: retos y lecciones aprendidas para la cooperación internacional y las empresas. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 9(1), 179-197. Recuperado de www.redalyc.org/articulo.oa?id=92731211008
- Congreso de la República de Colombia (2016). *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*. Bogotá, Colombia. Recuperado de www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Texto-completo-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx
- García, A. (2015). *El acceso al empleo para población en proceso de reintegración, ex AUC: Una estrategia para la eliminación de obstáculos para la paz* (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Recuperado de www.bdigital.unal.edu.co/498131/andreamilenagarciahernandez.2015.pdf
- Gómez, A. (2007). Mercado de trabajo y paz en Colombia; una lectura sobre el proceso de desmovilización de actores armados ilegales. *Revista de la Facultad de Trabajo Social*, 23(23), 88-99. Recuperado de <https://revistas.upb.edu.co/index.php/trabajosocial/article/view/318>
- González, F. (2014). *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá, Colombia: Odecofi-Cinep.
- Guaqueta, A. (2006). *Operando en medio del conflicto: construcción de paz y algunas mejores prácticas de empresas colombianas*. Bogotá: International Alert – Fundación Ideas para la Paz. Recuperado de <https://business-humanrights.org/es/art%C3%ADculo-sobre-mejores-pr%C3%A1cticas-de-empresas-colombianas-operando-en-medio-del-conflicto-armado-fundaci%C3%B3n-ideas-para-la-paz#c41013>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). *Metodología de investigación*. México: Mc Graw-Hill.

- Jiménez, G. (2014). Multinacionales y responsabilidad social empresarial en la construcción de paz en Colombia. *Cuadernos de Administración*, 27(48), 67-96. Recuperado de www.scielo.org.co/pdf/cadm/v27n48/v27n48a04.pdf
- Mariño, A. y Valencia, M. (2015). Participación de la gran empresa en la política pública de atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia. *Cuadernos de Administración*, 28(50), 159-185. Recuperado de www.scielo.org.co/pdf/cadm/v28n50/v28n50a08.pdf
- Martínez, B. (s. f.). Acompañamiento empresarial integral a personas en proceso de reintegración. *ESUMER*. Recuperado de www.esumer.edu.co/investigaciones/images/CIP/articulos/ArticuloAcompa%C3%BlamientoEmpresarial.pdf
- Martínez, B. y Duarte, L. (2016). Experiencia de cooperación en el acompañamiento empresarial integral en el territorio como aporte al proceso de reintegración. *Panorama*, 10(18), 67-82. Recuperado de <http://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/824/631>
- Menchero, M. (2018). Colombia en posconflicto: ¿turismo para la paz o paz para el turismo? *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, 20(39), 415-438. Recuperado de <https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/viewFile/4914/4305>
- Niño, J. y Devia, C. (2015). Inversión en el posconflicto: fortalecimiento institucional y reconstrucción del capital social. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 10(1), 203-224. Recuperado de <https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/article/view/369/226>
- Ochoa, A., Vanegas, E. y Arizabaleta, S. (2017). Derechos humanos y estándares laborales en las organizaciones, de cara al posconflicto en Colombia. *Jangwa Pana: Revista de Ciencias Humanas y Humanidades*, 16(1). Recuperado de <http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/article/view/1955>
- Rettberg, A. (2003). Administrando la adversidad: Respuestas empresariales al conflicto colombiano. *Colombia Internacional*, (35), 37-54. Recuperado de <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint55.2002.02>

- Rettberg, A. (2008). *Explorando el dividendo de la paz: percepción de los impactos del conflicto armado en el sector privado colombiano*. Universidad de los Andes. Recuperado de <https://business-humanrights.org/en/node/42700>
- Rettberg, A. (2016). Need, Creed, and Greed: Understanding How and Why Business Leaders Focus on Issues of Peace. *Business Horizons*, 59(5), 481-492. Recuperado de www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681316300131
- Sepúlveda, M., Moreno, E., Tovar, J., Franco, J. y Villarraga, C. (2015). Responsabilidad social de las PyMEs en el marco del posconflicto, como soporte para la inclusión laboral de la población reinsertada. *Revista de Ciencias Sociales Comunicación, Cultura y Política*, 6(1), 45-61. Recuperado de <http://journal.ean.edu.co/index.php/revistai/article/download/1335/1296>
- Serna, H. y Rodríguez, S. (2016). El sector solidario como alternativa para el desarrollo social e inclusivo en el postconflicto colombiano. *Cooperativismo y desarrollo*, 23(107), 37-48. Recuperado de: <https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/article/view/1250/1436>
- Strong, N. y Scorse, J. (2007). Ecotourism in Post-Conflict: A New Tool for Reconciliation? MPA. En: I. Kelly (ed.) *Proceedings of the Educators Fórum*, 4 ed. IIPT conferencia Africana, Kampala, Uganda. Recuperado de www.iipt.org/africa2007/PDFs/Strong-CvetichandScorse.pdf
- Téllez, C. (2014). Reflexiones de la responsabilidad social: una aproximación desde los derechos humanos. *Econógrafos Escuela de Economía*, (59), 1-38. Recuperado de [/www.fcenew.unal.edu.co/publicaciones/imagenes/Descargue-documentos-econografos-economia-59.pdf](http://www.fcenew.unal.edu.co/publicaciones/imagenes/Descargue-documentos-econografos-economia-59.pdf)
- Téllez, C. (2015). *Aproximación a la responsabilidad social empresarial hotelera en Colombia: reflexiones a partir de la perspectiva cualitativa* (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Recuperado de www.bdigital.unal.edu.co/50805/
- Téllez, C. (2016). Responsabilidad social empresarial turística en Colombia: Regulación en el sector hotelero. *Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas*, (14), 83-100. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5814079>

- Téllez, C. (2017). Regulación en responsabilidad social empresarial en la hotelería de Colombia. *Revista Turismo y Sociedad*, 21, 217-229. Recuperado de <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/5180>
- Téllez, C. (2017). Responsabilidad social empresarial turística en la micro, pequeña y mediana empresa de Colombia. El caso del Hotel La Mansión. *Revista Interamericana de Ambiente y Turismo*, 13(1), 117-128. Recuperado de <http://riat.utralca.cl/index.php/test/article/view/366/pdf>
- Vega, F. (2017). Turismo y posconflicto. Una reflexión a partir del escenario del Camino a Teyuna (Ciudad perdida). *Turismo y Sociedad*, 21, 165-192. Recuperado de <https://doi.org/10.18601/01207555.n21.08>
- Velasco, C. (2014). El papel del sector empresarial en la construcción de paz. *Revista Colombiana de Bioética*, 9(2), 125-126. Recuperado de www.bioeticaunbosque.edu.co/publicaciones/Revista/rev92/ponencia_Carlos-velasco.pdf
- Villamizar, P. (2017). Turismo y paz: una apuesta para el desarrollo en la región de Urabá-Darién. *Revista Opera*, 20, 107-127. Recuperado de <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/4909/5878>
- World Travel and Tourism Council –WTTTC–. (2017). *Travel & Tourism Economic Impact 2017 Colombia*. Recuperado de www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/colombia2017.pdf



**RESPONSABILIDAD DE LAS
INDUSTRIAS CULTURALES
Y CREATIVAS: INCLUSIÓN
SOCIAL Y DESARROLLO
EN EL POSCONFLICTO
COLOMBIANO**

Andrea Carolina Redondo Méndez

Maestría en Investigación Social Interdisciplinar
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Docente Universidad Agustiniana
andrea.redondo@uniagustiniana.edu.co

Oswaldo Ospina Martínez

Maestría en Psicología del Consumo
Fundación Universitaria Konrad Lorenz
Docente Universidad Agustiniana
oswaldo.ospinam@uniagustiniana.edu.co

Jhon Eddison Pulido

Estudiante de Negocios Internacionales
Universidad Agustiniana
Miembro del Semillero de Investigación en
Industrias Culturales y Economía Creativa
jhon.pulidos@uniagustiniana.edu.co

Resumen

El presente documento tuvo como objetivo la identificación de las industrias culturales y creativas como garantes de inclusión social y de desarrollo eco-

nómico dentro del contexto colombiano actual del posconflicto, al establecer la responsabilidad de las empresas del sector cultural en el desarrollo e innovación en la economía creativa, que ha logrado consolidarse como una nueva forma de emprendimiento y como posible motor de desarrollo económico, puesto que es una industria intensiva en talento humano, que genera una cantidad importante de encadenamientos sociales, económicos y culturales, convirtiéndose en los escenarios apropiados que brindan propuestas a la finalización del conflicto armado colombiano.

Para su desarrollo, se utilizó una metodología cualitativa con proceso inductivo, analizando dichas oportunidades y propuestas, desde lo particular hacia la generalidad de las industrias culturales en Colombia, llegando a ser de tipo exploratorio por cuanto se incursiona en un campo poco investigado. Con lo anterior, se ha logrado evidenciar un crecimiento notable del sector cultural en Colombia, frente a su aporte al PIB, de un 3,21 %, y frente a la generación de empleo, ya que, al ser un sector innovador, ofrece oportunidades de transformación productiva, desde el establecimiento y consecución de espacios poco elaborados para el ambiente laboral en donde no es necesaria una especialización exhaustiva y prolongada.

Palabras clave

Industrias culturales, inclusión, responsabilidad social, posconflicto

Introducción

Desde los supuestos básicos de la globalización, las industrias culturales han empezado a reconocerse como protagonistas del desarrollo, la productividad y la competitividad, al utilizar materia prima inagotable, y al basarse en principios de creatividad, talento, innovación y exaltación de la identidad de los llamados emprendedores culturales., o representantes del sector que son directos protagonistas de generación de oportunidades y espacios de creación.

Según Theodor Adorno, el primer referente al concepto, las industrias culturales se conciben como parte de una sociedad consumista, que minimiza

la intención per se de la producción cultural, al representar una masificación comercial y alejarse del sentido particular de las mimas. Esto es, hace una clara diferenciación frente a lo que se debe entender por arte o producción cultural y utilización de la creatividad en términos del talento o capacidad individual, «en tanto que ocupación del tiempo libre, el arte tiene que ser cómodo y no vinculante» (2004, 311).

Sin embargo, en desarrollos posteriores, el tema se ha empezado a abordar a partir de instituciones y organismos supranacionales que ofrecen definiciones menos cargadas de contexto, y más enfocadas a la identificación de sus propias fortalezas, así, la Unesco, las define como aquellas que «combinan la creación, producción y comercialización de contenidos que son abstractos y de índole cultural» y que además «están centradas en promover y mantener la diversidad cultural y asegurar el acceso democrático» (Unesco, 2010).

Así, si bien existen múltiples referencias a la temática, todas coinciden en brindarle una caracterización como garantes de espacios vinculantes llenos de creatividad y oportunidad, que manifiestan su notabilidad desde el talento y accionar del individuo.

Igualmente, se reconocen como generadoras de crecimiento económico, dentro de escenarios globalizados que integran múltiples actividades estructuradas dentro del sector cultural, así

...today, cultural and creative industries are driving factors for economic growth and according to global demand, also stimulated by the new economy. As it is known, the concept refers not only to the domain of culture in the strict sense but refers also to cultural goods and services as the core of a new, powerful and vast sector that can be broadly referred to cultural áreas. (Bocella, Salerno, 2016, p. 291)

En Colombia, el sector cultural, aporta cerca del 4 % del total del PIB, generando un creciente avance en su participación dentro del mercado y demostrando la relevancia de su conocimiento y desarrollo para el crecimiento de la Nación. Pero entendiendo esta participación, es necesario entender la

multiplicidad de oportunidades que desde las empresas y emprendimientos creativos se generan con el fin de identificar la responsabilidad del sector; en general, sobre la inclusión y participación de los protagonistas del posconflicto colombiano.

Sin embargo, se debe reconocer que la responsabilidad del sector, está relacionada con los lineamientos que se establecen dentro de una sociedad con el fin de mejorar los procesos tanto internos como externos a través del tejido social que existe en cada institución. Hace falta un desarrollo ligado a la inclusión social, más cuando, según el Dane, el 28 % de la población colombiana vive en la pobreza y la tasa de desempleo es de 9.4 %, cifras que demuestran la necesidad de buscar escenarios alternos de ocupación y de inclusión.

Y aun cuando el posicionamiento de las industrias culturales en Colombia sigue siendo un desafío político y hasta económico, no se debe dejar de lado su contribución como garantes de participación en nuevos mercados económicos y en escenarios sociales que garantizan la participación de todos los individuos, sin importar su nivel social o educativo.

Las industrias culturales manifiestan la necesaria apertura de oportunidades a sociedades carentes de espacios de integración y de socialización paciente de experiencias y vivencias que genere un acompañamiento y un entendimiento que lleve a la optimización de sus situaciones pasadas y una sustentabilidad creciente.

Es por esto que, en los países de Latinoamérica se están presentando una serie de iniciativas que vinculan el accionar de las industrias culturales y creativas al mejoramiento de situaciones socialmente problemáticas, ya que su multiplicidad permite que puedan incursionar de manera efectiva en escenarios desvinculantes. Así, en Colombia, se han establecido como garantes de espacios de empoderamiento para los protagonistas del posconflicto, mediante iniciativas que integran sus potencialidades y sus oportunidades dentro de la sociedad civil, siendo estas las responsables de brindar un mejoramiento en las condiciones socioeconómicas de la población involucrada.

La responsabilidad de las industrias culturales y creativas en Colombia, se identifica como relevante para la sociedad actual colombiana, ya que se encuentra en una posición vulnerable frente al posicionamiento de los protagonistas del posconflicto y en donde necesita nuevos espacios que garanticen la participación y el desarrollo de cada ciudadano dentro del sector cultural.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar uno de los resultados de la investigación de Téllez, en donde se plantea que

...en cuanto a las acciones de RSE a desarrollar por parte de las empresas del sector turístico en este nuevo escenario, existe una mayor tendencia a respaldar iniciativas de aproximación que ejerzan alianzas con las comunidades de las zonas afectadas. (Téllez, 2017).

En tanto se despliegan nuevos espacios de accionar poblacional que lograrían el apoyo del sector empresarial para el mejoramiento de las condiciones de las comunidades víctimas y protagonistas en el posconflicto.

De esta manera, se presenta un escenario de participación de la población colombiana, dentro de las industrias culturales y creativas mediante iniciativas que les permiten reparar situaciones pasadas y posicionarse en un escenario de posconflicto plausible, desde la responsabilidad de quienes tienen la génesis de los mismos.

Metodología

Se realizó una investigación de tipo exploratorio con un diseño no experimental con metodología cualitativa, puesto que se fundamenta en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos, se trata entonces del estudio del contexto colombiano frente a la coyuntura del posconflicto.

Se tomaron como esenciales las variables macroeconómicas desempleo y pobreza, debido a la relevancia y pertinencia respecto a la actuación de las industrias culturales. Igualmente, se tomó como referencia el Acuerdo de paz

firmado con las Farc, en la búsqueda de la reintegración de los excombatientes, debido a que es este punto en donde interviene el sector cultural como solución y espacio de garantía. También, se utilizó un método inductivo, debido a que se tomaron como referencia casos particulares de análisis con el fin de llegar a conclusiones generales, las cuales pueden ser consideradas como el mayor aporte a la literatura respecto al tema de industrias culturales.

De la misma manera, se enfocó el análisis en los procesos que vive en la actualidad Colombia, a saber, desigualdad, minas, despojo de tierras y violación de derechos humanos (atentados terroristas). Así como el Plan de Desarrollo (paz, equidad y educación) del actual presidente Juan Manuel Santos, en donde la variable analizada fue tomada de los principios que se establecen en el mismo:

Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de brechas poblacionales y sociales, potenciando la conectividad para la inclusión productiva y el acceso a bienes públicos, servicios sociales e información.

Todo lo anterior permitió evidenciar la importancia del tratamiento de la información brindada por el sector cultural colombiano, respecto a las oportunidades de accionar inclusivo. Ya que, se convirtió en el escenario adecuado para el cumplimiento de las metas de plan de desarrollo y para superar o mejorar, si se quiere, las principales variables de desarrollo social y económico.

Al tratarse de un estudio exploratorio, se recurrió a la información secundaria sobre los métodos y la aplicación que se ha realizado desde el sector cultural en Colombia, es decir, se realizó con el fin de lograr un acercamiento a un tema poco desarrollado y del cual no existen el suficiente desarrollo, pero que aun así brinda las oportunidades de solución al posconflicto colombiano.

Estado del Arte

La economía creativa y su desarrollo a partir de las industrias culturales han despertado el interés de académicos, gobiernos y empresarios frente a su conocimiento y caracterización, pero sobre todo frente a su efectividad en términos de desarrollo económico, por lo que se han generado estudios que

demuestran su eficacia y su necesario conocimiento. Y aunque los resultados siempre van en la misma dirección de viabilidad, aún es muy poco lo que se le reconoce formalmente a la economía creativa en países como Colombia, ya que la informalidad del sector y la inexistencia de cifras reales dificultan su posicionamiento y reconocimiento como catalizadora e oportunidades de desarrollo socioeconómico.

Un primer estudio realizado por la Unesco se titula «Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas» el cual está enfocado en los representantes culturales y sus necesidades al momento de transformar las maneras y los mecanismos para crear, distribuir, consumir y disfrutar de los bienes y servicios culturales. De esta manera, la guía pretende definir los escenarios propios de acción de las industrias culturales y el adecuado aprovechamiento de las oportunidades que el actual contexto globalizado ofrece, evitando los errores comunes por desconocimiento o desinterés y así generar un mayor desarrollo de la capacidad creativa del sector y de su crecimiento económico.

De igual forma, el estudio de Gonzalo Pizarro Rodríguez, titulado «La economía creativa, para la construcción de la nueva cultura», da los primeros lineamientos para la comprensión del sector cultural como garante de identidad y de reconocimiento social, mediante el establecimiento de categorías explicativas del propio concepto de economía creativa; llegando a entenderla como parte del desarrollo económico y social de un territorio, ya que brinda la comprensión de construcciones colectivas desde imaginarios que deben ser plenamente identificados como identitarios pero también como generadores de sostenibilidad económica empresarial.

Por otro lado, uno de los estudios más representativos del tema ha sido el texto de Hasan Bakhshi y George Windsor, titulado «The Creative Economy and the Future of Employment», en donde se resalta la necesidad de una articulación entre el sector gubernamental, el sector empresarial y el sector laboral formal e informal, con el fin de lograr superar problemas de ocupación y formalidad laboral, contando con el apoyo del Gobierno. Esto es, se presentan recomendaciones que van más allá de simples difusiones de espacios genera-

dos por la economía creativa, sino que se pretende que el sector dirigente se comprometa e integre escenarios de innovación, desarrollo y empleo formal. Resaltando que a través del sector cultural se generan oportunidades de desarrollo social y económico que son importantes, teniendo en cuenta las pocas posibilidades actuales de ocupación.

Dentro de las oportunidades mencionadas, cabe resaltar, según la Unesco, la creación de un valor no monetario que genera desarrollos de tipo sostenible que además son inclusivos y tienen como eje central las capacidades y talentos del ser humano, así como el establecimiento de la cultura como facilitador de procesos de crecimiento económico y social, a través de inversiones dentro de las etapas de la cadena de valor y el establecimiento y aplicación del networking cultural.

Y con el fin de llegar a su consecución, se presentan diversos factores de éxito que contribuyen a su reconocimiento; según el Informe sobre la economía creativa de las Naciones Unidas (2013), existen cuatro factores determinantes para el mejoramiento del sector cultural, a saber, la inversión en las capacidades creativas de las personas, como una alternativa de capacitación y de educación para la población más joven; el fortalecimiento de las infraestructuras de producción y distribución, a través de la creación de redes locales y clústeres con el fin de ampliar y mejorar su distribución; unas estructuras de gobernanza y entorno normativo propicio en tanto se logra la descentralización de las iniciativas culturales con el fin de vincular a todos los sectores de cada Estado y construir redes de apoyo para cada región; y, modelos de mercado y participación, en donde, debido a las particularidades de los subsectores culturales, se brindan los espacios adecuados para su comercialización, sin poner en riesgo la propiedad intelectual y los canales de reconocimiento en nuevos mercados.

Lo anterior, lleva a determinar y reconocer el escenario actual referente a las industrias culturales dentro de la economía creativa y su multidimensionalidad respecto a los espacios que logra brindar desde la perspectiva de empresa; estableciendo los ámbitos en los cuales es posible un accionar en pro del

bienestar de la sociedad y el crecimiento económico de los agentes que intervienen en el sistema económico mundial.

Discusión y resultados

El uso del contenido inmaterial, a través del uso de tradiciones y costumbres características, por parte de las industrias culturales, como punto de partida para la creación de valor y de reconocimiento, permite la apropiación de características innatas de su identidad que se muestran en un mercado internacional carente de la multiplicidad real de las identidades de cada territorio; generando, en la sociedad, la identificación, como garantes del patrimonio cultural de la Nación y como facilitadoras de espacios de convergencia ciudadana.

En palabras de Antonio Cándido, «en el plano cultural, la tercera década del siglo XX fue un eje catalizador: un eje en torno del cual se fueron catalizando elementos dispersos para ordenarlos en una nueva configuración. En gran medida, porque generó un movimiento de unificación cultural al proyectar a escala nacional hechos que antes solo ocurrían a escala regional, contribuyendo así al ámbito socioeconómico de las sociedades». (Nascimento, 2014).

Según el Ministerio de Cultura Colombiano (2009) las creaciones de la mente son un activo que hace parte del patrimonio de la empresa y como tal, valen y pueden protegerse y, lo más importante, usarse para sacar provecho. En tanto, no solo se trata del valor monetario que se pueda extraer, sino que a través del uso de la amplitud perceptual se logra observar la realidad desde diversos puntos de vista que permiten el posicionamiento del bien o del servicio cultural como garante de identidad social y lo sitúa como parte de la especificidad de la coyuntura social.

Así mismo, por medio de la creatividad, el sector cultural, logra responder a situaciones en donde no se trata de novedad sino de conexión de ideas alejadas con el fin de dar respuestas prácticas en ocasiones frente a situaciones que presentan escasez de algún tipo de recurso. Posicionando al sector, o la empresa como ente reconocido socialmente de preservación y exaltación de la identidad cultural.

Así, «las industrias creativas y culturales presentan un creciente segmento de la economía que abarca una amplia gama de actividades, como la arquitectura, medios electrónicos, el cine, la edición, la música, el arte, la fotografía, el patrimonio, la publicidad, el diseño y los juegos de ordenador. Muchos países utilizan las industrias creativas y culturales para estimular el desarrollo económico y fortalecer la competitividad» (Pudic, 2016).

A través del acercamiento a los objetivos que se establecieron para la Nación, mediante el plan de desarrollo, se logró identificar que una de las herramientas para la garantía de sostenibilidad y construcción de paz, tiene que ver con la habilidad y creatividad de la sociedad, representadas en las industrias culturales; debido a la multiplicidad de espacios que otorga para el desarrollo de sus destrezas y para la integración a una vida civil productiva.

Si se tienen en cuenta las cifras sobre el conflicto armado en Colombia, se debe reconocer que, y según el Centro de Memoria Histórica, hasta el 2012, los escenarios de acción que han permitido la ubicación y el acceso a espacios alternos de participación y ocupación están relacionados con el sector cultural.

Tabla 3: Centro de Memoria Histórica. Violencia en Colombia

Desapariciones forzadas	Desplazamiento forzado	Minas	Secuestros	Masacres	Atentados terroristas
25 007	4 744 046	2 119 muertos	27 023	11 751	1556 víctimas
		8070 lesionados			95 casos

Fuente: Elaboración propia con información del Centro de Memoria Histórica, 2012.

Por otra parte, teniendo en cuenta el reporte actual de desempleo en Colombia del Dane, la tasa de desempleo para el primer mes de 2018 asciende a un 11,76 %, superando el 8,63 % del mes anterior; poniendo de manifiesto la necesidad de integrar a la población desocupada al sector cultural, y más aún a la población desmovilizada de grupos al margen de la ley. Debido a que, para 2014 el sector cultural aportó ganancias por 6,5 billones de pesos

y generó 199 698 empleos, demostrando la versatilidad e importancia del sector en términos de fortalecimiento de la variable de integración del Plan de Desarrollo actual.

Y, según la Encuesta de Consumo Cultural de 2016, perteneciente a la cuenta satélite de cultura del Dane la «presentación o espectáculo a la que más asistieron las personas de 12 años y más fueron los conciertos, recitales, presentaciones de música en espacios abiertos o cerrados en vivo (30,0 %), manteniéndose igual con respecto a 2014, seguida por la asistencia a ferias o exposiciones artesanales (25,7 %), teatro, ópera o danza (17,6 %) y exposiciones, ferias o muestras de fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura o artes gráficas (12,1 %)». (Dane, 2016) Comprobando el espacio potencial de inclusión y el desarrollo de las metas del Plan de desarrollo «paz, equidad y educación» del actual gobierno, teniendo como referente la variable de acceso a bienes públicos, servicios sociales e información.

Asimismo, frente a la conectividad para la inclusión productiva de la población, se evidencia que por medio de la economía creativa, se puede realizar procesos de reparación y de integración para quienes no han tenido los métodos y técnicas necesarias para un acercamiento tradicional, esto es, las industrias brindando el acceso a una unificación real en términos económicos valiéndose de sus propios talentos.

Uno de los elementos más representativos que permitieron la identificación de las industrias culturales como garantes de inclusión y de desarrollo en el escenario del posconflicto fue el reconocimiento que desde diferentes subsectores culturales se da a la población más vulnerable y se vincula como catalizador de desarrollo. Así, el primer caso es el uso de la economía naranja para la recuperación del Bronx en Bogotá, debido a que se incluye como una de las bases estructurales del proyecto de renovación urbana con el que la Alcaldía de Bogotá pretende el mejoramiento de la zona; debido a que, la capital cuenta con el 92 % de los servicios creativos del país y desde mediados del 2017 se iniciaron las mesas de trabajo con diferentes universidades, la Cámara de Comercio y el Sena, todo con el propósito de fortalecer las

cadena de valor y comerciales de manera que se incluyan las personas que no han tenido capacitación en ningún área y que se integran a la sociedad civil.

Un segundo hecho fue la Feria por la paz de la localidad de Kennedy, en Bogotá, el pasado mes de septiembre de 2017, en donde excombatientes de grupos al margen de la ley y la comunidad en general lograron enviar el mensaje de reintegración y participación a través de exhibiciones artesanales y deportivas. Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, las actividades del sector cultural permiten eliminar los estigmas generados a partir del conflicto y logran el fortalecimiento de la sociedad.

Por último, se debe resaltar el caso de la producción cinematográfica “Ángeles de la calle” realizada en las calles de Cartagena, únicamente utilizando un celular; demostrando el uso inagotable de la creatividad y vinculando a los personajes comunes de sectores vulnerables de la ciudad, con el fin de demostrar que un desarrollo distinto es posible. Así como, el uso de la imaginación colectiva de personajes ávidos de oportunidades, pero ajenos a las tradicionales oportunidades que suponen requisitos de capacitación y status.

Lo anterior permite la identificación de los protagonistas directos en las dinámicas empresariales del sector cultural, ya que se trata de una diversidad de capacidades y características que se logran mezclar a partir de sus propios saberes y generar un valor agregado, que no solo va a estar dado por su rasgo económico sino por la multiculturalidad presente. Además, se logra su articulación con el Gobierno Nacional y el cumplimiento de sus metas respecto a la variable planteada, «conforme a la importancia que las industrias culturales y creativas están adquiriendo en el país, se crearon en Colombia dos programas cuyo objetivo es la inserción de sectores estratégicos pero poco desarrollados a la dinámica global de comercio mundial, el primero del plan es la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, que incluye estrategias para incentivar las industrias culturales, medios y publicidad; el segundo es el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, donde se resalta la alianza con Colciencias, para financiar los sectores de media creativa y diseño» (Redondo, 2017).

Conclusiones

A través de la identificación de las oportunidades que brindan las industrias culturales y creativas en el contexto del posconflicto colombiano, se logró evidenciar el carácter de las mismas como fuentes inagotables de riqueza, material e inmaterial en tanto usa materia prima intangible, entendida como el talento y la creatividad del ser humano, y en tanto integra a la totalidad de la población si tener en cuenta sus niveles sociales, económicos o académicos.

Las metas del plan de desarrollo frente a la construcción de paz se logran enfocar desde las herramientas y las posibilidades que brindan las industrias culturales para la restitución y participación de quienes son los directos protagonistas, al momento de presentar diversas esferas de acción para una vida productiva.

Esto es, integra a una sociedad que se enfrenta a un nuevo escenario social con implicaciones económicas relevantes frente al aumento de demanda social, por decirlo de alguna manera, y con pocas oportunidades reales en los sectores tradicionales de la economía. Y las presenta como garantes de identidad y de responsabilidad, ya que la creación y formalización de empresas del sector cultural, permite una mayor integración de las personas que fueron protagonistas en el conflicto colombiano.

De la misma manera, se debe decir que el impacto frente a la generación de empleo es evidente, debido a que permite la ocupación de los sectores de la sociedad desempleados, a través del uso de sus propias capacidades, dejando de lado requisitos interminables de aplicación laboral.

Esto, debido al papel de los representantes o de quienes llegan a integrar el sector cultural, ya que poseen habilidades y responsabilidades mayores, al momento de emprender actividades culturales,

...implicit leadership theories influence leader emergence and performance via a legitimation mechanism i.e. they legitimize certain leader behaviors, attributes and motivations in the eyes of followers. They act as implicit

standards that guide what is regarded to be appropriate, desired, and expected of leaders. Consequently, leaders who display attributes that align with followers' implicit leadership theories are more likely to be accepted by followers and to succeed as leaders". (Stephan, Pathak, 2016, p. 3).

Razón por la cual se evidencia la necesidad de integrar el sector cultural mediante líderes de la industria cultural que vinculen esferas creativas y de integración social.

A través del acercamiento exploratorio a la funcionalidad de las industrias culturales y creativas en Colombia, se logró identificar su importancia en la generación de espacios que validan el talento y capacidad del individuo que está presente en el contexto del posconflicto, ya que los escenarios que se evidenciaron, mostraron resultados positivos frente a la vinculación de víctimas y protagonistas directos que se encuentran en el escenario del posconflicto colombiano.

Por último, mediante los casos analizados, se determina la importancia y la responsabilidad del sector cultural en la consecución de orden y progreso en medio del posconflicto colombiano, en la medida en que a través de este sector y de este tipo de industrias se logran solucionar inconvenientes económicos y reconciliar diferencias sociales mediante el uso de la creatividad y el desarrollo de talentos propios.

Referencias

- Adorno Theodor (2004). *Teoría estética*. Madrid: Akal.
- Adorno, Theodor W. (1968). *La industria cultural*. Buenos Aires: Galerna.
- Aguado, Luis Fernando (2015). Factores que limitan la participación cultural. Una mirada desde la economía de la cultura. *Revista de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Zulia*. 21 (1): 61.
- Bakhshi, Hasan. Windsor, George. (2015). *The Creative Economy and the Future of Employment*. Nesta 1, London: Plough Place.

- Bocella, Nicola, Salerno, Irene (2016). Creative Economy, Cultural Industries and Local Development. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Reggio Calabria, Italy, 291-296
- Consejo Nacional de Política Económica y Social [Conpes] (2010). *Política nacional para la promoción de industrias culturales en Colombia y de la política de emprendimiento cultural*. Bogotá, Colombia: Presidencia de la República.
- Dane (2016). Encuesta de Consumo cultural – ECC. Microdatos Dane. Colombia.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación*. México, México: McGraw-Hill.
- Herrera, Ketty (2014). Emprendimiento como iniciativa para la creación de empresa: análisis desde la perspectiva psicológica y conceptual. *Revista de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Zulia*, 20 (2): 289.
- Ministerio de Cultura de Colombia y Convenio Andrés Bello (2003). *Impacto económico de las industrias culturales en Colombia*. Reporte técnico.
- Ministerio de Cultura de Colombia (2016). *Quiénes somos*. Colombia. Disponible en: www.mincultura.gov.co/emprendimiento-cultural/quienes-somos/Paginas/default.aspx
- Ministerio de Cultura (2009). *Política para el emprendimiento y las industrias culturales de Colombia*. Bogotá, Colombia.
- Nascimento Arruda, María (2014). Sociedad y cultura modernas en Brasil. La formación de la sociología en San Pablo. *Revista de Estudios Brasileños* 1(1): 10.
- Pizarro, Gonzalo. (2012). *La economía creativa, para la construcción de la nueva cultura*. VIII Campus Euroamericano de Cooperación Cultural Cuenca, Ecuador: Cooperación Cultural Euroamericana. Madrid, España: Cooperación Cultural.
- Pudic, Dalibor (2016). Applying the Principles of Management of Creative and Cultural Industries in the Energy Sector. Conference: 5th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia. Osijek. *Revista de Ciencias Sociales*. 1 (1):154-169.

- Redondo, Andrea (2017). *Plan estratégico para la competitividad de la cadena productiva en el sector cultural de las artesanías en Bogotá*. Innovación y competitividad gestión interdisciplinar y liderazgo en organizaciones. Corporación Universitaria Americana. Barranquilla, Colombia.
- Sanz Rodero, Estefanía (2013). *Guía práctica de emprendimiento social y cultural*. Gobierno de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Universidad de Salamanca.
- Stephan, Ute. Pathak, Saurav. (2016). Beyond Cultural Values? Cultural Leadership Ideals and Entrepreneurship. *Journal of Business Venturing*(31): 505-523
- Téllez, C. (2017). *Responsabilidad social empresarial en el postconflicto y construcción de paz de Colombia: interpretaciones del sector turístico*. Empresas, responsabilidad social y postconflicto en Colombia. Bogotá, Colombia: Universidad de San Buenaventura.
- Unesco.(2010). *Marco de estadísticas culturales (MEC) de la Unesco 2009*, Sector de la Cultura /Instituto de Estadística
- Unesco. (2010). *Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 7, place de Fontenoy 75732 Paris 07 SP, Francia.
- Zamorano, Raúl (2014). El concepto de cultura en la sociedad moderna: una observación desde la teoría de sistemas sociales. *Revista de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Zulia*. (3): 432.



**LA INNOVACIÓN SOCIAL Y
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN
EL SECTOR ARTESANAL DEL
EJE CAFETERO:**

**IMPLICACIONES PARA EL
POSCONFLICTO**

Juan Carlos Montalvo Rodríguez

Magíster en Administración, Universidad Nacional de Colombia
Docente investigador, Universidad Antonio Nariño
jcmontalvor@gmail.com

Victor Manuel Portugal Ortiz

Maestría en Desarrollo Social y Educativo
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
Director de Programa Facultad de Ciencias Económicas
Universidad El Bosque
vmport567@yahoo.co

Carlos Arturo Téllez Bedoya

Maestría en Administración, Universidad Nacional de Colombia
Docente Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá
Carlosarturo156@hotmail.com

Jorge Hernán Cifuentes Valenzuela

Doctorado en Administración, Instituto Universitario ESEAD
Director del programa de Administración de Empresas.
Universidad Minuto de Dios
jCIFUENTES@UNIMINUTO.EDU.CO

Resumen

Colombia experimenta un cambio notable en su estrategia para consolidar la paz en el posconflicto. El objetivo de este trabajo es analizar los elementos de política pública que han favorecido las innovaciones sociales en el sector artesanal del eje cafetero colombiano, en este contexto. Se aplicó el método de investigación acción, delimitando las categorías de política social, innovación social y competitividad, expresadas en los planes de desarrollo, conformación de redes sociales, cadena de valor, mercadeo y turismo, en las comunidades de artesanos del eje cafetero, que tuvieran alguna conexión con Artesanías de Colombia. Los resultados evidencian la relevancia de la política pública en la innovación social, así como, en la construcción y consolidación de la paz al interior de las regiones. No obstante, se requiere una intervención especializada del gobierno y los organismos gremiales, que fortalezca y profundice las innovaciones sociales, en aspectos como el dominio de origen, el emprendimiento rural, la capacitación en uso de equipos y tecnologías y la articulación del trabajo artesanal con la cadena de valor del turismo en las regiones; al igual que estrategias para motivar y vincular los artesanos no organizados en las redes de cooperación y apoyo del sector.

Palabras clave

Innovación social, política pública, artesanos, eje cafetero, posconflicto

Introducción

Se reconoce que la innovación social favorece la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos, el incremento en sus niveles de participación política y el acceso de grupos vulnerables a la satisfacción de dichas necesidades y al ejercicio de sus derechos (Novy & Leubolt, 2005). Además, para impulsar la innovación social resulta fundamental la articulación entre objetivos económicos, sociales, culturales, ambientales y la conformación de redes de organizaciones sociales (Méndez, 2002). Por otra parte, cualquier tipo de innovación tiene un componente social y ello es lo que permite que todo nuevo desarrollo se inscriba en el mercado en una relación entre diversos actores

(Berra & Gallardo-Velázquez, 1994), es decir, que mediante la innovación social también se busca la generación de diferentes relaciones de cooperación al interior de los tejidos sociales. De acuerdo a lo anterior, el concepto de innovación social se comprende como las nuevas prácticas y formas organizativas cuyo objetivo es resolver un problema social, respondiendo a aspiraciones generales (Cloutier, 2003). Adicionalmente, esta noción se consolida a partir de la interpretación de referentes concretos como la creación de puestos de trabajo, productos nuevos, mejoramiento de condiciones de vida e igualmente aspectos más profundos como la confianza, el fortalecimiento de vínculos entre actores y el desarrollo de capacidades propias (De la Maza, 2004).

En sintonía con lo anterior, se ha encontrado que los líderes políticos juegan un rol importante para la innovación social, al tener la posibilidad de asignación de espacios específicos para fomentar la innovación social y la expansión de sus redes, las cuales, a su vez, tienen una potencial influencia en decisiones políticas (Harrisson, Klein, & Browne, 2010; Lawrence, Dover, & Gallagher, 2014). Además, se reconoce que en el proceso de innovación social resulta fundamental la participación de diferentes instancias de decisión política y la legitimación de determinadas prácticas que se dan en un sistema social (Cajaiba-Santana, 2014). Con base en estos elementos y la actual coyuntura colombiana del posconflicto, surge la necesidad de visibilizar la dimensión política de las innovaciones sociales, con la finalidad de aproximarse a algunos lineamientos que permitan capitalizar estos aprendizajes en dicho contexto.

Para favorecer el desarrollo de la innovación social, en un determinado territorio, se reconoce la importancia de aspectos como el clima de apertura frente a la novedad, las redes locales de cooperación y la actitud de apoyo a la innovación y al desarrollo local, por parte de instituciones públicas (Méndez, 2001). En una línea similar, también se relaciona la innovación social con el conocimiento, el incremento del capital social, la conformación de redes, la mediación del lenguaje y la elaboración de presupuestos participativos (McElroy, Jorna, & Van Engelen, 2006; Novy & Leubolt, 2005). Por otra parte, se pueden destacar algunas experiencias territoriales como la conformación de un banco de experiencias de innovación social en América Latina y el Caribe (Cepal, s. f.) Cabe resaltar, entre estas experiencias de innovación se relaciona la propuesta

desarrollada con problemáticas como la morbilidad materna e infantil, la erradicación del trabajo infantil, la delincuencia juvenil y alternativas productivas, la vivienda social, la farmacodependencia, la erradicación de cultivos ilícitos y las posibilidades productivas del sector artesanal (Cepal, s. f.).

Uno de los primeros referentes de innovación social en Colombia se pueden encontrar en el mencionado banco de experiencias, en el cual se pueden identificar el abordaje de problemáticas como el desplazamiento, la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la medicina tradicional, la reforestación, la prevención del abandono del hogar, el desarrollo de oportunidades de emprendimiento para jóvenes en situación de riesgo, la atención a preescolares conVIH Sida, el emprendimiento para comunidades vulnerables y el fortalecimiento de las cadenas productivas en el sector artesanal (ACJ, 2005; Artesanías de Colombia, 2005; Asocomun, 2005; Cámara de Comercio, 2009; Cepal, s.f.; Comfama, 2005; Crit, 2004; Fundamor, 2007). Adicionalmente, en diferentes universidades colombianas se ha empezado a investigar este tópico, buscando la relación entre la innovación social y la construcción de paz, incluyendo variables como el desarrollo social, la tecnología, la educación, la sostenibilidad y diferentes tipos de problemáticas sociales (Unal, s.f.; Uniminuto, 2017; Universidad del Rosario, 2014; UPB, 2017b). Con base en estos elementos y en aras de abordar las relaciones entre política pública e innovaciones sociales, la investigación se enfocó en el estudio de caso de los artesanos del Eje Cafetero, ya que constituyen uno de los referentes exitosos de la innovación en Colombia (Artesanías de Colombia, 2005; Baracaldo & Giraldo, 2011). Además, estas relaciones favorecen la comprensión de las posibilidades del país en el marco del posconflicto (UPB, 2017a), por ende, a continuación, se hace la precisión sobre los aspectos de la política pública que serán tenidos en cuenta.

La formulación de la política pública se concreta en los planes de desarrollo. Estos tienen su origen en la Ley 152 de 1994, donde se establecen los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan. Un plan de desarrollo constituye un documento de política pública a través del cual se describen los objetivos, las estrategias, los programas, los proyectos y las metas que comprometen al Estado con la ciudadanía. En este sentido, los planes de desarrollo se convierten en la

principal y más formal expresión del ejercicio de la planeación en el sector gubernamental. Por ello, debe entenderse que estos no contienen la totalidad de las acciones del Gobierno, sino la acción estratégica estatal, al alcance de la ciudadanía para su control político y social.

Así mismo, los planes de desarrollo en Colombia han tenido diferentes énfasis dependiendo del gobierno de turno. En los años setenta prevaleció la búsqueda de conciliación entre el bienestar social y el crecimiento económico, buscando cerrar brechas económicas entre las zonas rurales y las ciudades, así como, mejorar las condiciones de empleo de vastas poblaciones. Posteriormente, se habló de crecimiento y equidad en los años ochenta, de la mano con la evolución que ha tenido el tratamiento del concepto de desarrollo y pobreza, donde cada vez jugó un rol más determinante nociones como la igualdad entre las personas. A partir de los años noventa, con el gobierno del presidente de Colombia César Gaviria, se inició la apertura económica, la cual coincidió con el espíritu de apertura democrática, inspirado en la Constitución Política de Colombia de 1991; luego, en el periodopresidencial de Ernesto Samper se generó un modelo alternativo de desarrollo, el cual se enmarcó en el progreso de la sociedad, retomando conceptos como inversión social y que infortunadamente por los escándalos de corrupción de la época no pudo cristalizarse. Posteriormente, en el gobierno de Andrés Pastrana se manifestó la necesidad de dar lugar a un proceso de construcción de paz, en el cual se allegara a partir de la negociación a acuerdos con los grupos armados y que a su vez incluyera en el modelo de desarrollo el concepto de inversión para la paz, constituyendo una serie de programas que se orientarían a este objetivo.

Más tarde, tras el fracaso de negociaciones entre las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-Ép) y el Gobierno Nacional, el presidente Álvaro Uribe Vélez propuso la creación del «Estado comunitario», este se conceptualizaba a través de la eficiencia económica, el desarrollo de una lógica del mercado y el fortalecimiento de las fuerzas armadas, como instrumento para concluir la dinámica del conflicto. En la última década, en el gobierno de Juan Manuel Santos se ha hecho énfasis en su programa de gobierno en la llamada «prosperidad para todos» y se ha

reivindicado la comprensión de la construcción de paz como un hecho que va más allá de la solución del problema de inseguridad, vinculando estrategias como la integración territorial, desarrollo de la infraestructura y el cierre de brechas sociales.

En este contexto, los últimos gobiernos han venido proponiendo políticas públicas orientadas a la solución del conflicto armado, a través de la aprobación de distintas leyes que buscan asegurar una paz duradera en el país. Teniendo en cuenta ello, se ha creado la Ley 975 de 2005, generando las directrices para la reincorporación de antiguos combatientes, en el marco del proceso de desmovilización de grupos paramilitares. Luego, apareció la Resolución 163 del año 2011 determinando un procedimiento claro para la reincorporación de estos actores armados, además de conceptuar acerca de los posibles beneficios y requisitos para continuar en el mismo. Finalmente, la Ley 1424 de 2010 dictó ciertas directrices en búsqueda de garantizar la verdad, justicia y reparación de las víctimas en el conflicto armado.

Por otra parte, la importancia de comprender el fenómeno de la innovación social y sus relaciones con la política pública, radica en la potencial contribución de estos aspectos a la construcción de paz en el ámbito del posconflicto (García, 2018; Unimedios, 2014, 2016; Villota, 2015). Al respecto, se destaca el papel que han jugado diferentes expresiones artísticas como la danza, el teatro y el diseño en periodos subsiguientes a escenarios de guerra (Thompson, citado por Unimedios, 2016); la importancia dada a la creatividad, los recursos y las herramientas tecnológicas para generar oportunidades en escenarios de posconflicto (Hochgerner, citado por Unimedios, 2014) y el concurso de instancias de decisión política para la puesta en marcha de la innovación social, asociada a suplir carencias territoriales (Villota, 2015). La comprensión de la actividad artesanal, como referente de innovación social en relación con una política pública, que haya favorecido su desarrollo, ofrece potenciales luces para aprovechar las lecciones aprendidas en este sector en el ámbito del posconflicto, especialmente si se tiene en cuenta que el Eje Cafetero colombiano no ha sido ajeno a los efectos del conflicto armado que históricamente se ha presentado en este país (Arias, 2017; Castrillón, s. f.; Palacio & Cifuentes, 2005).

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta el rol determinante del empresariado del Eje Cafetero en el actual contexto del país, el cual viene determinado por la necesidad de dar solución a las nuevas dinámicas del conflicto y crimen organizado (Prandi & Lozano, 2010), así como, dar respuesta a las secuelas que dejó décadas de guerra, se llevó a cabo un estudio con el aval de Artesanías de Colombia, en aras de tener acceso a información primaria de un grupo de artesanos ubicados en esta región, que son referentes latinoamericanos de innovación social (Artesanías de Colombia, 2005). Así pues, se decidió profundizar, en un primer momento, en la relación de los mencionados referentes de innovación social con la identificación de aspectos de política pública que hubiesen favorecido dichos desarrollos. De tal forma, se concretó la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué elementos de política pública han favorecido las innovaciones sociales en el sector artesanal del eje cafetero?

Por otro lado, en aras de caracterizar los elementos de política pública que han favorecido el desarrollo de innovaciones sociales en el sector artesanal del eje cafetero, a través del análisis de experiencias sectoriales, a continuación, se trazan las preguntas de apoyo que se tuvieron en cuenta en la realización de este estudio:

- » ¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre las estrategias de la política pública y el crecimiento social y económico en sectores artesanales del eje cafetero?
- » ¿Cuáles son las limitaciones de los planes de desarrollo para remediar las condiciones de vulnerabilidad que se tengan en sectores artesanales del eje cafetero?
- » ¿Qué papel juega la empresa y las instituciones en las oportunidades de progreso social establecido en los planes de desarrollo y las políticas públicas?

Posteriormente, y tras el contexto actual que ha surgido con el inicio de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-Ep (OACP, 2016), surgió la necesidad de darle profundidad a los resultados de este estudio mediante el siguiente interrogante:

¿Qué implicaciones tienen los resultados de esta investigación en el contexto del posconflicto colombiano?

Es de resaltar, este interrogante se trazó después de haber concluido la fase inicial de la investigación y permitió hacer una relectura de los resultados obtenidos, a la luz de las principales problemáticas sociales, económicas y administrativas vigentes en el marco de la suscripción de este Acuerdo.

Metodología

Se tomó el método de la investigación acción como punto de apoyo para la realización de esta investigación. Este método surgió en el contexto de la psicología social para ayudar a resolver problemas de las minorías por parte de Kurt Lewin (1946a). Este autor propuso su metodología mediante una espiral de pasos: 1) examinar la idea cuidadosamente a la luz de los medios disponibles hasta definir un plan general en relación con un objetivo determinado, 2) Ejecución de la primera etapa, 3) Evaluar si lo que se ha logrado está por encima o por debajo de las expectativas, 4) Dar a los planificadores la oportunidad de aprender y modificar el plan general inicialmente trazado (los hechos encontrados deben servir para modificar el plan general inicialmente trazado).

En el contexto organizacional se afirma que la investigación acción es un enfoque investigativo que tiene como propósito el desarrollo de acciones y la generación de conocimiento o teoría acerca de las acciones desarrolladas por las partes interesadas (Coghlan & Brannick, 2005). Estos autores señalan que resulta apropiada cuando el tema de investigación se desarrolla poco a poco en una serie de acciones que ocurren a través del tiempo. Además, coinciden

con Lewin (1946a) en la importancia de dar lugar a unos ciclos que posibilitan la corrección los resultados obtenidos a partir del feedback, compromiso y cooperación de las personas que participan de la investigación, con las cuales siempre queda abierta la posibilidad de llevar a cabo nuevos ciclos del tipo planear-actuar-evaluar.

Para la aplicación de la metodología se integraron las comunidades artesanales de algunos municipios del Eje Cafetero de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, en los cuales hubiese tenido alguna incidencia Artesanías de Colombia como una organización promotora de la innovación social. A partir de lo anterior, se hizo una caracterización y análisis de las diferentes relaciones entre políticas públicas, el sector productivo y otras organizaciones que potenciaron dichas experiencias de innovación social.

Mediante un análisis de prácticas municipales, en los diferentes departamentos, se determinaron casos de las comunidades con la colaboración de Artesanías de Colombia, los cuales dieron cuenta del estado actual del sector artesanal, donde las políticas públicas hubiesen tenido alguna incidencia en la potencialización de este sector productivo. Avanzando en la del método de investigación acción, se retomaron algunos principios fundamentales como la participación de los actores, la construcción colectiva y la búsqueda de soluciones conjuntas (Alberich-Nistal, 2007a, 2007b; Durston & Miranda, 2002; Martí, n. d.). A su vez, el trabajo de campo se desarrolló en los siguientes departamentos con las respectivas ciudades: Risaralda (Pereira y Quinchía), Quindío (Armenia), Caldas (Aranzazu y Aguadas), para dar lugar a ello se escogieron criterios de conveniencia teórica, en coherencia con algunas de las pautas de selección de muestras, propias de la investigación cualitativa (Flick, 2002). Además, con base en Goyette & Lessard (1988), en la fase inicial de la investigación se organizaron un conjunto de etapas, técnicas y procedimientos para el trabajo con las respectivas comunidades de artesanos, no sin antes darles a conocer los objetivos del proyecto y contar con un consentimiento informado para el desarrollo de esta investigación.

Etapas 1. Se realizó un análisis previo de objetivos e impacto del proyecto, delimitando las siguientes categorías: política social, innovación social, compe-

tividad. Como criterios poblacionales e institucionales se tomaron algunas comunidades de artesanos del eje cafetero en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda y que estas, a su vez, tuvieran alguna conexión con Artesanías de Colombia. Los criterios de priorización se definieron conjuntamente con la dirección de esta organización, en los cuales se tuvo en cuenta su cercanía con sus referentes estratégicos y con los del Ministerio de Industria y Turismo, así como su afinidad con las relaciones que en la literatura sugerían una relación entre la innovación social, las políticas públicas y sus planes de desarrollo.

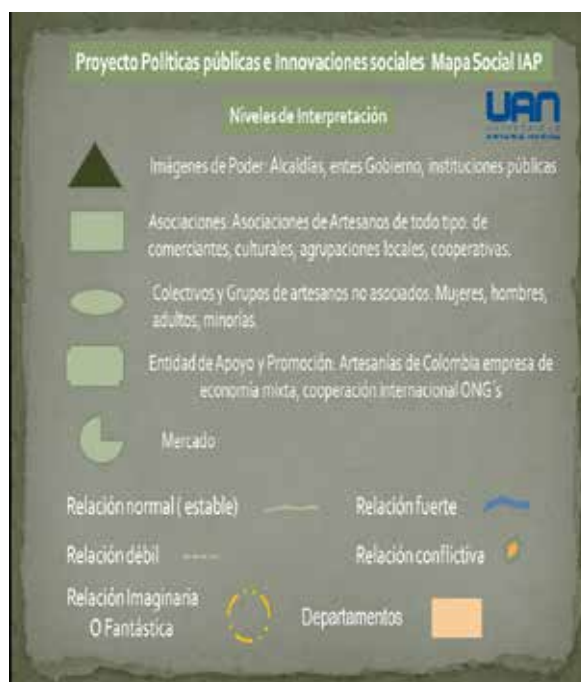
Reunión de actores. Se efectuó un encuentro con la dirección general de Artesanías de Colombia en la ciudad de Bogotá y con sus actores locales para efectos de la presentación del proyecto y una socialización de los resultados de la investigación en los escenarios locales. El proyecto se delimitó en el eje cafetero donde se involucró el apoyo de los Centros de Desarrollo Artesanal por departamento (CDA) y el respectivo involucramiento de los coordinadores respectivos para el acercamiento con las comunidades de artesanos, estableciendo la comisión de apoyo y el respectivo seguimiento a los grupos mediante la investigación acción participativa. Como técnicas de recolección de información primaria se aplicó una encuesta y se realizaron diferentes entrevistas semiestructuradas a líderes artesanos y líderes políticos que hubiesen tenido alguna incidencia en los referentes de innovación social estudiados, según el banco de experiencias de la Cepal (Artesanías de Colombia, 2005). A su vez, se llevó un diario de campo donde se consignaron otras observaciones hechas por los investigadores, incluyendo sus impresiones personales. Con base en lo anterior, se elaboraron los respectivos informes que fueron socializados tanto con la comunidad de artesanos, como con los coordinadores de los CDA de los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas. Con base en estas socializaciones se hicieron los ajustes respectivos al informe final.

Etapa 2. Trabajo de Campo. Se aplicaron las herramientas de indagación diseñadas en los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas en los Centros de desarrollo Artesanal, a coordinadores de los CDA, como también a comunidades de artesanos que pudiesen haberse visto afectados por instancias de decisión política municipal y departamental en el ejercicio de su labor diaria. La sistematización de cada uno de los resultados fue presentada

y enriquecida, de acuerdo a las observaciones de los participantes en diferentes grupos de discusión. Se hizo un total de seis visitas a los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda donde se interactuó con la comunidad de artesanos, coordinadores de los CDA y líderes políticos que tuviesen alguna relación con el sector artesanal. Con base en lo anterior, y los desarrollos de (Alberich-Nistal, 2007a), se terminó por plasmar el ejercicio de investigación acción en diferentes mapas sociales donde se representaron las relaciones e incidencia de los diferentes actores.

En el sentido anterior, el mapa social elaborado en el proyecto permitió evidenciar gráficamente el conjunto de relaciones, redes existentes y la presentación e interpretación de resultados (Gutiérrez, 2001). Con base en ello, en el ámbito regional del eje cafetero se delimitaron los siguientes grupos intervinientes, a partir de lo cual se realizarán las respectivas interpretaciones:

Figura 7: Convenciones empleadas en el mapa social



Fuente: Elaboración propia.

Los mencionados grupos están clasificados en imágenes de poder conformados por alcaldías, gobernaciones y/o entes gubernamentales de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. Por su parte, las asociaciones están estructuradas por organizaciones de diferente índole. Los colectivos y grupos se componen de comunidades de artesanos, que cuentan con distinto género y edad, no asociados. Al igual, las entidades de apoyo y promoción están conformadas por organizaciones públicas, privadas y de economía mixta.

Apoyo interinstitucional. Se tuvo apoyo logístico por parte de las coordinaciones del eje cafetero respectivas. De igual manera se tuvo acceso al Centro de Documentación y Desarrollo Artesanal (Cendar), donde se pudo obtener algún material de apoyo para el trabajo de los artesanos, los cuales fueron entregados en las respectivas visitas.

Etapa 3. Informe final y difusión. Se realizó el diseño y construcción de una presentación donde se daba a conocer el análisis y diagnóstico de las comunidades artesanales abordadas en los departamentos. Adicionalmente, se llevó a cabo una socialización y validación de la información, con base en la presentación de puntos débiles y fuertes, y la retroalimentación realizada por parte de las comunidades. Del mismo modo, se hizo una capacitación donde se dieron a conocer aspectos generales de la innovación y de mercadeo, frente a las expectativas de algún tipo de fortalecimiento del sector artesanal. Al cierre del proceso de validación se efectuaron unos registros fotográficos y participantes al evento final.

En síntesis, la metodología investigación acción permitió hacer una compilación de las diferentes situaciones percibidas en los mencionados departamentos del eje cafetero. Adicionalmente, estas observaciones fueron complementadas con la realización de un análisis matricial (véanse de las tablas 4 a la 7) de diferentes referentes de política pública en el sector artesanal y su relación con la dimensión de la innovación social en estas comunidades de artesanos.

Resultados y discusión

En este apartado se comienza por presentar algunas generalidades de las comunidades de artesanos con las que se desarrolló la investigación, haciendo énfasis en su georreferenciación y los materiales con que trabajan; luego se presenta un análisis de diferentes documentos de política pública, tanto a nivel municipal como departamental que hacen referencia a las comunidades de artesanos; se prosigue con la presentación de las diferentes organizaciones que, según los registros de fuentes primarias, han tenido alguna incidencia en el logro de la respectiva innovación social; y por último, se presenta una sistematización de la experiencia mediante el trazado de un mapa social que refleja los diferentes tipos de relaciones identificadas.

Departamento de Caldas: Municipio de Aranzazu: Asociación Eficar (Empresa Figuera creativa de Aranzazu) factor productivo: artículos de fique y accesorios. Municipio de Aguadas: Cooperativa Artesanal de Aguadas. Factor productivo: artículos de Iraca, sombrero aguadeño y accesorios.

Departamento del Quindío, Armenia: Asociación de Artesanos del Quindío. Factor productivo: productos de guadua, bambú y madera, muebles y accesorios.

Departamento de Risaralda, Pereira: Asociación de Artesanos de Risaralda. Factor productivo: productos de madera municipio de Quinchía: Asociación de Joyeros de Quinchía. Factor Productivo: joyas de plata, oro y filigrana.

Cabe mencionar, que el nivel de las entidades de apoyo y promoción está conformado por el sector público, la empresa privada y la empresa de economía mixta. A continuación, se presentan los diferentes tipos de organizaciones que apoyan el sector artesanal según los municipios caracterizados, su respectivo departamento y la indagación realizada con las fuentes de información primaria.

Tabla 4. Organizaciones que apoyan al sector artesanal del Eje Cafetero

Departamento	Municipio	TIPO DE ORGANIZACIONES QUE APOYAN EL SECTOR ARTESANAL				
		Pública	Economía Mixta	Privada	Educativas	Cooperación internacional
CALDAS	Aguadas	Centro de Acción Social- Beneficencia,	Artesanías de Colombia	Cámara de Comercio, Cooperativa artesanal de Aguadas, Cooperativa de Caficultores, Universidad Autónoma de Manizales	Universidad Autónoma de Manizales.	USAID
	Aranzazu	Universidad de Caldas	Artesanías de Colombia	Asociación Eficar, Cámara de Comercio, Corporación Von Humobolt	Universidad de Caldas	No se identificó
RISARALDA	Pereira	CARDER	Artesanías de Colombia	Cámara de Comercio	Universidad Tecnológica y Pedagógica de Pereira	Gobernanza forestal Colombia Bosques FLEGT
	Quinchía	SENA, CARDER,	Artesanías de Colombia	Cámara de Comercio	No se identificó	No se identificó
QUINDÍO	Armenia	Corporación Regional del Quindío (CRQ). Gobernanza Forestal Colombia Bosques Flegt	Artesanías de Colombia	Cámara de Comercio, Actuar Famiempresas	No se identificó	No se identificó

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias

Por otra parte, se llevó a cabo un reconocimiento de la inclusión de la comunidad de artesanos en diferentes documentos de política pública, haciendo énfasis en aquellos periodos que precedieron su nominación en el banco de experiencias de innovación social de la Cepal (Cepal, s. f.). Se efectuó especial énfasis en algunas experiencias municipales (Pereira, Quinchía, Aguadas, Aranzazu) de los departamentos del Quindío y de Caldas, a partir de fuentes primarias.

Tabla 5. Estamentos de poder y su apoyo al sector artesanal

	SUBCATEGORÍAS	RISARALDA	CALDAS
POLÍTICA PÚBLICA	Gobernación	Obtención de local para la asociación de artesanos. Año 2000	Pago de hospedaje y stands en Expoartesanías.
	Alcaldía	CARDER. Proyecto mercados verdes estímulo conservación del medio ambiente. Gobernación y el Sena. Educación media y básica con énfasis en joyería.	Ar. Apoyo en la consecución de materias primas y suministro de maquinaria y espacios de trabajo a través de proyectos productivos. Pago de servicios públicos y asignación de taller artesanal comunitario. Alianzas con el sector productivo. Ag. Promoción en medios de comunicación, gestión de proyectos de cooperación.
	Mecanismos de protección a los derechos de autor.	No se identificaron.	Ag. creación de marca registrada Ar. desconocimiento de mecanismos de protección de nuevos diseños y baja capacidad de producción. Certificado de origen.

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes primarias

Convenciones de municipios: Ar. (Armenia), Pr. (Pereira), Quinchía (Qch.), Ag. (Aguadas), Ar. (Aranzazu).

En la tabla anterior, se destaca que la innovación social de estas comunidades de artesanos estuvo precedida de acciones en el ámbito de lo productivo

(talleres artesanales-materia prima), del mercadeo (locales comerciales, participación en ferias y actividades de mercadeo) y en el inicio de una actividad de registro de marca para productos como el sombrero aguadeño. Estas acciones han sido reconocidas como factores determinantes en el posicionamiento de las diversas expresiones artesanales de las comunidades respectivas y de las instancias de decisión política que han contribuido a su desarrollo. No obstante, para que se pudieran llevar a cabo estas acciones fue necesario que previamente se diera una incorporación de la comunidad de artesanos, tanto en los planes de desarrollo municipal, como en los planes de desarrollo departamental. Para hacer este reconocimiento se hizo una articulación de este proyecto de investigación con el ejercicio investigativo de dos estudiantes de pregrado (Charry-Castaño, 2011; Nieves-Dussan, 2011), lo cual se evidencia a continuación.

Tabla 6. Inclusión del sector artesanal en los planes de desarrollo

	SUBCATEGORÍAS	QUINDÍO	RISARALDA	CALDAS
PLANES DE DESARROLLO	Planes de desarrollo departamental. 2010-2014	Desarrollo de producto con énfasis en confecciones y el sector artesanal. Consolidación de la cadena de turismo.	Desarrollo empresarial y agropecuario. Protección de la diversidad cultural.	Capacitación en nuevas tecnologías. Diseño e innovación para artesanías hechas con productos y subproductos forestales. Generación de redes de conocimiento.
	Planes de desarrollo municipal 2008-2011	Ar. Programa competitividad y desarrollo económico: se fomenta la empresa local, promoción de ferias locales, capacitaciones y ruedas de negocios.	Qch. Plan de desarrollo 2008-2011, «Todos por Quinchía con acción y decisión». Impulso y fomento al sector minero y artesanal, mejoramiento de la infraestructura vial.	Ag: se incluyen presupuestalmente las dimensiones humanas agropecuarias y culturales que tienen incidencia en el sector artesanal. Ar: se promueve la microempresa, la asociatividad, cadenas productivas y las capacitaciones hacia el sector artesanal. También se incorpora el sector agropecuario del fique que tiene incidencia en el sector artesanal.

Fuente: elaboración propia con base en Charry-Castaño, 2011 y Nieves-Dussan, 2011.

Convenciones de municipios:

Ar. (Armenia), Pr. (Pereira), Quinchía (Qch.), Ag. (Aguadas), Ar. (Aranzazu).

En la tabla 6 se destacan los hallazgos de política pública que precedieron a la escogencia de la experiencia de Artesanías de Colombia, como un referente de innovación social en el contexto latinoamericano (Artesanías de Colombia, 2005). Entre estos hallazgos, se destaca que en los planes de desarrollo de los citados municipios se plasmaron actividades de apoyo a la comunidad de artesanos, tales como la capacitación para la participación en ruedas de negocios, el apoyo para la participación en ferias, la promoción a la microempresa y el respaldo de entidades públicas para la consecución de materia prima. Igualmente, se observa en estas políticas públicas el agendamiento de programas orientados a la construcción de paz, relacionándolos con la participación ciudadana, la generación de una cultura de convivencia y respeto por el otro, así como, el fortalecimiento de la justicia en los territorios.

... Las políticas de paz del Gobierno deben enmarcarse en el enfoque de los derechos humanos, en pro de su materialización y la garantía de condiciones de vida digna. Esto explica su cercanía con los procesos de desarrollo humano y socioeconómico. Las políticas públicas son, por tanto, instrumentos para la concreción de derechos humanos y la realización del derecho útil. Este enfoque permite ir más allá de identificar los derechos humanos con el conflicto armado interno y las violaciones, a una mirada más amplia que los concibe desde la aspiración humana con tener cubiertas sus necesidades básicas en condiciones propias de la dignidad humana. (Cortés, 2016, p. 143).

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que el desarrollo de este tipo de actividades, originadas a partir de la política pública, en caso de ser llevadas a la práctica, constituyen un factor de competitividad para la región y en especial las comunidades de artesanos, aspecto que fue verificado en la investigación mediante su contraste con fuentes primarias.

Por otra parte, la tabla 3 presenta el reconocimiento de algunos elementos de política pública orientada al sector artesanal en el periodo comprendido entre el 2008 y el 2014. Ello, denota la ejecución de diversas actividades en cada uno

de los departamentos y municipios orientadas al desarrollo del producto, el turismo, el desarrollo empresarial y la capacitación en el uso de nuevas tecnologías. Al igual que con las actividades planteadas en los planes de desarrollo gubernamentales en este periodo de tiempo se evidencia la importancia creciente de la ejecución de estas actividades en el país, a partir del potencial ejercido por el sector artesanal en el interior de las regiones objeto de estudio.

En aras de profundizar las diferentes subcategorías de la innovación social que fueron asociadas con algunos de los departamentos del eje cafetero estudiados a continuación se presenta en la tabla 4 los principales hallazgos encontrados. Cabe anotar, el hecho de que no hayan sido identificadas determinadas categorías en los respectivos departamentos, no significa que no puedan jugar algún papel, pues existe la posibilidad que otros referentes de política pública, diferentes a los planes de desarrollo hayan jugado un papel fundamental en este contexto.

Tabla 7. Factores de innovación social del sector artesanales del eje cafetero

	SUBCATEGORÍAS	QUINDÍO	RISARALDA	CALDAS
INNOVACIÓN SOCIAL	Turismo	Reinado del café.	Feria Bioexpo 2010 Neiva apoyo de Carder transporte y estadía.	Ag.: Festival del Pasillo, Festival de la Iraca. (Ar): Reinado de la cabuya.
	Producto	No se identificó	No se identificó	Diversificación de producto, tinturas para teñido, fusión de materiales.
	Redes de apoyo institucional	Artesanías de Colombia. CDA; Alcaldía, Gobernación, Cámara de Comercio, Cooperativas, Entidades educativas, Cooperación internacional, Asociación de Artesanos del Quindío	Artesanías de Colombia. CDA; Alcaldía, Gobernación, Cámara de Comercio, Cooperativas, Entidades educativas,	Artesanías de Colombia. CDA; Alcaldía, Gobernación, Cámara de Comercio, Cooperativas, entidades educativas, Cooperación internacional, Cooperativa de Caficultores, Cooperativa de Artesanos de Aguadas.

Fuente: elaboración propia

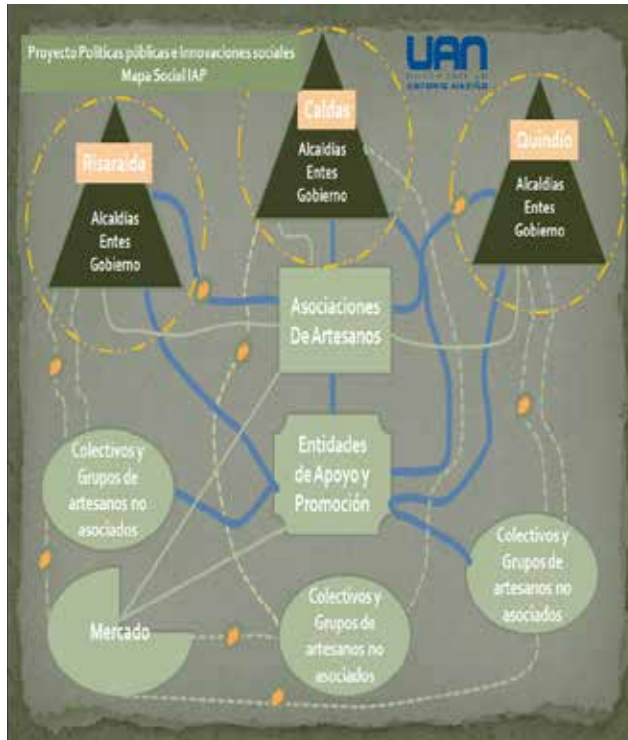
Convenciones de municipios:

Ar. (Armenia), Pr. (Pereira), Quinchía (Qch), Ag (Aguadas), Ar (Aranzazu).

Tomando en cuenta la información anterior, se reconoce el papel determinante que ha jugado el turismo en el fomento de la actividad artesanal, especialmente mediante la posibilidad de participar en ferias, reinados y festivales. Por otra parte, se destacan las actividades de diversificación de producto que se dieron en el departamento de Caldas, como uno de sus distintivos en la región y, por ende, un elemento que debe continuarse a través del tiempo. Finalmente, se identificó la existencia de múltiples redes de cooperación interinstitucional que han favorecido el desarrollo de la actividad artesanal como una innovación social, entre estos resaltan la conformación de cooperativas, las redes de cooperación internacional de Artesanías de Colombia, entidades educativas y las respectivas gobernaciones.

Por otra parte, también es posible dar cuenta de las políticas públicas que han favorecido las innovaciones sociales en el sector artesanal, mediante el trazado de un mapa social basándose en el análisis de las experiencias sectoriales que se obtuvieron mediante la aplicación la acción participativa y los resultados obtenidos en fuentes primarias. La figura 8 muestra la relación entre entidades de apoyo y promoción con las imágenes de poder previamente identificada, así como, con los colectivos de artesanos no organizados, dando cuenta de un puente comunicativo e intersección con la política pública. Es de resaltar, las entidades de apoyo y promoción se encuentran determinadas por regiones, tomándose en consideración la empresa pública, de economía mixta y privada.

Figura 8. Mapa social del sector artesanal eje cafetero



Fuente: elaboración propia

Ahora pues, el mapa social del proyecto muestra en la parte superior unos triángulos, que hacen referencia a las alcaldías, gobernaciones y/o entes gubernamentales, los cuales se constituyen en sujetos de acción y representan la política pública como imágenes de poder. La esfera punteada que rodea las imágenes de poder simboliza el imaginario de las mismas, dando cuenta de la subjetividad percibida en el entorno de las imágenes de poder. En la zona central del mapa se pueden contemplar dos grupos intervinientes como son las asociaciones de artesanos y las entidades de apoyo y promoción. En la parte inferior izquierda se presenta el mercado como un nivel de interpretación, que permite asociar las redes existentes con la comercialización. También, se evidencian algunos grupos intervinientes llamados colectivos o grupos de artesanos que tienen la particularidad de no estar asociados, con los cuales

se tuvo contacto esporádico en ambientes de tipo informal al visitar las diferentes comunidades, interacciones que fueron registradas en los respectivos diarios de campo.

La interpretación de las redes entre los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, concebidos como imágenes de poder (gobernaciones, alcaldías y/o estamentos) por parte del grupo interviniente «colectivos de artesanos no asociados», refleja una conexión débil y conflictiva, enmarcada en mecanismos de comunicación no adecuados a los propósitos del colectivo, aspecto que se relaciona con una menor posibilidad de influir y participar en los planes de desarrollo, ya que su esquema de participación tiende a ser insular. En cuanto a la conexión de los colectivos y grupos de artesanos no asociados con las posibilidades de comercialización de sus productos (innovación social), se evidencia una relación débil-conflictiva con las imágenes de poder; esto debido a la poca o nula participación en eventos, ferias y exposiciones que les permitan una comercialización efectiva de sus productos. Además, a estos actores se les ha dificultado el acceso a la subvención de materias primas, inclusión de nuevas tecnologías y otras potenciales fuentes de innovación.

Igualmente, en la zona centro del mapa se contempla el grupo interviniente de asociaciones de artesanos existentes en los tres departamentos del eje cafetero, en los cuales se percibe una red de relaciones de conexión estable, como también de relación fuerte. Lo anterior, se ilustra en la presencia de asociaciones de artesanos con representación formal, tales como asociaciones y cooperativas, que les han permitido tener opinión y ser tenidos en cuenta ante los estamentos de Gobierno representados en las imágenes de poder.

Finalmente, en la parte inferior izquierda del mapa social (gráfico 2) se visualiza el mercado como un nivel de interpretación, en la red de conexiones entre el colectivo de artesanos no asociados, asociaciones de artesanos, entidades de apoyo y promoción, y las imágenes de poder. En este apartado se identifica que la conexión existente entre las entidades de apoyo y promoción con las imágenes de poder es fuerte, de igual forma, la relación entre entidades de apoyo con los colectivos de artesanos no asociados también es dinámica, cuyo factor de interés está determinado por el establecimiento de vínculos posibles,

lo cual posibilita una mejor comercialización y acceso a nuevos segmentos de mercado.

Por último, la relación mercado –entidades de apoyo y la relación mercado– asociaciones de artesanos, se muestran estables. Estas relaciones convergen, ya que las condiciones de conglomerado de oferentes y demandantes se dan en espacios participativos, que requieren de grupos constituidos y organizados formalmente para facilitar su participación tanto en lo cultural como en lo económico. Por su parte, el grupo interviniente de colectivos o grupos de artesanos no asociados refleja una relación débil conflictiva en la conexión con las imágenes de poder y con el mercado. A partir de estos resultados, se infiere una deficiente comunicación y escasa participación en los planes de desarrollo, consecuencia de una cadena de valor individual, independiente y una comercialización generalizada no diferenciada, que satisfaga las condiciones del actual mercado artesanal. En conclusión, con respecto a la esfera que rodea a las imágenes de poder, esta refleja una relación imaginaria o fantástica, lo cual se infiere de referencias hechas en los discursos de los artesanos a unos resultados «óptimos» de las políticas de estímulos y promoción del sector artesanal, lo cual se contrapone al mismo discurso de artesanos y representantes de estamentos políticos donde se reconoce que quedan muchas necesidades por cubrir en el ejercicio de la actividad artesanal.

Conclusiones y recomendaciones

La política pública ha constituido una condición importante, más no suficiente, para un adecuado posicionamiento del sector artesanal en el eje cafetero. También se ha requerido el compromiso y la participación ciudadana por medio de estamentos formales como cooperativas, universidades, empresas privadas, asociaciones y ONG. Sobre esta base se facilita el respaldo de estamentos del Gobierno como alcaldías, gobernaciones y empresas de economía mixta, mediante proyectos y apoyos relacionados con capacitaciones, maquinaria, transferencia de tecnologías, participación en eventos, cooperación internacional y la generación de economías de escala. Lo anterior, genera la inclusión de comunidades de artesanos organizadas en los estamentos de poder del Estado, no solamente mediante su inserción en los diferentes programas

de Gobierno, sino también en los procesos de rendición de cuentas, donde se debe ser consecuente con la realidad del sector; o en caso contrario la credibilidad y prestigio de quienes detentan el poder ven comprometida su continuidad en el mismo.

Por otro lado, la política pública también se considera relevante para el proceso de construcción de paz al interior de las regiones. Lo anterior, se ha traducido en programas y acciones concretas que impactan positivamente el desarrollo de la sociedad, al reducir los niveles de desigualdad y reconocer en las diferentes culturas un elemento positivo para el progreso. Así mismo, la política pública en el ámbito municipal debe coincidir con las propuestas de construcción de paz, que desde las comunidades y Organizaciones No Gubernamentales –ONG– se están proponiendo, ello de la mano con una labor de concientización que el Gobierno central desarrolle en aras de promover prácticas que se puedan ejecutar en coherencia con las necesidades inmersas en el contexto territorial. Ello, en este momento de posconflicto se visibiliza como fundamental para reconstruir los territorios en las zonas más afectadas por la violencia y posicionar al estado como el actor de mayor poder en el tejido social, en especial en las regiones objeto de estudio. En este sentido, el rol del estado deberá apoyarse en la aplicación de la política pública vigente en el tema, así como, en agilizar y en promocionar los procesos institucionales, de tal forma que se transformen las principales causas del conflicto y de esta manera se dinamice la economía nacional, así como, el sector artesanal.

Por otra parte, hoy en día existen aspectos por mejorar que requieren de una intervención especializada, para dar continuidad a las innovaciones sociales en el sector artesanal. Tal es el caso de la protección de los nuevos diseños mediante aspectos atinentes a la propiedad intelectual, la formación de nuevas generaciones de artesanos, el mantenimiento de maquinaria, la capacitación en el uso de equipos y tecnologías, la fusión de materiales y técnicas, así como la articulación del trabajo artesanal con la cadena turística de la región. Además, se ha de fomentar la sinergia entre células de trabajo artesanal al interior del tejido social, para el fomento del trabajo en equipo en la producción de artesanías, tanto en la cadena de valor como en su comercialización, lo cual sin duda alguna incidirá positivamente en la construcción de paz, al generar

posibilidad de empleo para los excombatientes y propuestas de inclusión empresarial en algunas partes de la cadena productiva.

El trabajo artesanal ha contribuido a mitigar situaciones de vulnerabilidad como el desempleo, la no satisfacción de necesidades básicas y crisis históricas como la del café. Existen oportunidades para contribuir desde estas actividades a la disminución del desempleo, más aún si se tiene en cuenta que es en la ciudad de Pereira y otras circunvecinas, las más afectadas por esta problemática en Colombia. Para tales efectos, se requiere seguir contando con el concurso y articulación del sector público, privado y de organismos de cooperación, para ello es menester tomar en consideración las necesidades planteadas desde la base misma de las comunidades de artesanos y los actores sociales integrados en ellas, tal es así que los artesanos, sus colaboradores, proveedores y familias se vean impactados, por la innovación social que se promueva.

Finalmente, existe un sinnúmero de artesanos no organizados que también tienen el potencial de ser permeados por las entidades de apoyo al sector. No obstante, para ello se necesita de un proceso de sensibilización acerca de las oportunidades que se pierden al no estar organizados, tales como su posibilidad de participar en eventos especializados, poca capacidad de producción, dificultad en el acceso a materias primas, acceso a capacitación y tecnologías, y su poco poder de negociación con los intermediarios. Adicionalmente, este tipo de iniciativas pueden verse lideradas a partir de un trabajo de cooperación en el cual las universidades se sitúen como agentes de acompañamiento y asesoría continua, en aras de fortalecer este tipo de iniciativas, así como, asegurar su continuidad a través del tiempo.

Referencias

- ACJ (2005). Prevención del abandono del hogar: Una experiencia de desarrollo humano y social. Recuperado el 30 de octubre de 2017, de: <http://dds.cepal.org/innovacionsocial/e/proyectos/co/prevabandonol/>
- Alberich-Nistal, T. (2007a). Investigación acción participativa y mapas mentales. In *IV Congreso Internacional sobre Investigación Acción Participativa* (pp. 1-27). Valladolid. Retrieved from <http://comprenderparticipando.com/>

wp-content/uploads/2016/04/Tomas-Alberich-Nistal-Investigacion-accion-participativa.pdf

- Alberich-Nistal, T. (2007b). La investigación-acción participativa, método y práctica. In *IV Congreso Internacional sobre Investigación Acción Participativa* (pp. 1-21). Valladolid. Recuperado de: <https://issuu.com/peu2009/docs/tomasalberich>
- Arias, L. (2017, May 20). Sobrevivientes de la guerra hablan sobre las posibilidades de perdonar. *El Tiempo*, pp. 5-8. Bogotá. Recuperado de: www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/la-hora-del-perdon-en-el-eje-cafetero-89428
- Artesanías de Colombia (2005). Programa nacional de cadenas productivas en el sector artesanal. Retrieved October 31, 2017, recuperado de: <http://dds.cepal.org/innovacionsocial/e/proyectos/co/cadenasproductivas/>
- Asocomun (2005). Tulapa horizonte de esperanza. Recuperado el 30 de octubre de 2017, from <http://dds.cepal.org/innovacionsocial/e/proyectos/co/tulapa/>
- Baracaldo, P., & Giraldo, M. (2011). Comunicación personal. Bogotá: Artesanías de Colombia.
- Cajaiba-Santana, G. (2014). Social Innovation: Moving the Field Forward. A Conceptual Framework. *Technological Forecasting and Social Change*, 82(1), 42-51. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2013.05.008>
- Cámara de Comercio (2009). *Programa para la gestión del conflicto escolar Hermes*. (Cepal, Ed.). Panamá: Unicef. Recuperado de [www.unicef.org/lac/HERMES_ESPANOL_FINAL-1\(2\).pdf](http://www.unicef.org/lac/HERMES_ESPANOL_FINAL-1(2).pdf)
- Castrillon, P. (n. d.). Conflictos y desplazamiento en el gran Caldas. Retrieved March 6, 2018, from www.acnur.org/t3/uploads/media/599.pdf?view=1
- Cepal. (s. f.). Banco de experiencias en América y el Caribe. Recuperado el 30 de octubre de 2017, de: www.cepal.org/es/temas/innovacion-social/bancos-experiencias-america-latina-caribe
- Charry-Castaño, L. D. (2011). *Análisis de la normatividad municipal para el fomento de la actividad artesanal en municipios representativos del eje cafetero*. Universidad Antonio Nariño.

- Cloutier, J. (2003). *Qu' est-ce que l' innovation sociale ?* Québec: CRISES. Retrieved from https://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etudes-theoriques/CRISES_ET0314.pdf
- Coghlan, D., & Brannick, T. (2005). *Doing Action Research in Your Own Organization* (2nd ed.). London: Sage.
- Comfama (2005). Programa Fénix: desarrollo integral y oportunidades para jóvenes en situación de riesgo social y conflicto, Medellín (Colombia). <https://doi.org/10.1002/14356007.o15>
- Constitución Política de Colombia (1991). *Presidencia de la República de Colombia*. Retrieved from <http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf>
- CRIT. (2004). Fortalecimiento y promoción de la medicina alternativa tradicional en los pueblos Pijao y Paéz del Tolima-Colombia. Recuperado el 30 de octubre de 2017 de: www.cepal.org/noticias/paginas/2/24/142/Resumen.ProyectoMedicinaTradicional.Colombia.pdf
- De la Maza, G. (2004). Innovaciones ciudadanas y políticas públicas locales en Chile. *Persona y Sociedad*, XVIII (2), 263-284. Recuperado de: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31070485/18_2_pp263_284.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1509383468&Signature=75krYbboRL5lwGlzrFVE9K4wIbo%3D&response-content-disposition=inline%3B filename%3DInnovaciones_ciudadanas_y_politic
- Durston, J., & Miranda, F. (Eds.). (2002). *Experiencias y metodología de la investigación participativa. Division de Desarrollo Social Cepal* (Vol. 58). Santiago de Chile: Naciones Unidas. Recuperado de: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6023/S023191_es.pdf?se
- Flick, U. (2002). Sampling Strategies. In *An Introduction to Qualitative Research* (2nd ed., pp. 61-72). London: Sage.
- Fundamor (2007). Mejoramiento de la calidad de vida de niños y niñas que conviven con VIH/SIDA, y niños y niñas desprotegidos, a través del acceso a educación preescolar terapéutica.

- García, J. (2018). Procesos de paz e innovación social. Recuperado el 6 de marzo de 2018, de www.uniminuto.edu/web/pcis/-/procesos-de-paz-e-innovacion-social
- Goyette, G., & Lessard, H. (1988). *La investigación-acción. Funciones, fundamentos e instrumentación* (1st ed.). Barcelona: Leates.
- Gutiérrez, P. (2001). Mapas sociales: método y ejemplos prácticos. In T. Rodríguez, M. Montañés, & P. Martín (Eds.), *Prácticas Locales de Creatividad Social* (pp. 65-82). El Viejo Topo.
- Harrison, D., Klein, J.-L., & Browne, P. L. (2010). Social Innovation, Social Enterprise and Services. In F. Gallouj & F. Djellal (Eds.), *The Handbook of Innovation and Service. A Multi-disciplinary Perspective* (1st ed., pp. 197-218). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Lawrence, T. B., Dover, G., & Gallagher, B. (2014). Managing Social Innovation. In M. Dodgson, D. M. Gann, & N. Phillips (Eds.), *The Oxford Handbook of Innovation Management* (1st ed., pp. 316-334). New York: Oxford University Press.
- Lewin, K. (1946). Action Research and Minority Problems. In G.W. Lewin (Ed.), *Resolving Social Conflict* (pp. 201-216). New York: Harper & Row.
- Ley 1424 de 2010. (December). *Diario Oficial* 47937. Bogotá.
- Ley 152 de 1994. (July). *Diario Oficial* 41450, pp. 1-17. Bogotá.
- Ley 975. (2005, July 25). *Diario Oficial* 45980, pp. 1-65. Bogotá. Recuperado de: http://normatividad.sembrillo.gov.co/men/docs/pdf/ley_0975_2005.pdf
- Martí, J. (n. d.). La investigación: acción participativa, estructura y fases. Retrieved October 30, 2017, from www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/m_JMarti_IAPFASES.pdf
- McElroy, M. W., Jorna, R. J., & Van Engelen, J. (2006). Rethinking Social Capital Theory: A Knowledge Management Perspective. *Journal of Knowledge Management*, 10(5), 124-136. <https://doi.org/10.1108/13673270610691233>
- Méndez, R. (2001). Innovación y redes de cooperación para el desarrollo local. *Revista Internacional de Desarrollo Local*, 2(3), 37-44.

- Nieves-Dussan, A. M. (2011). *Los artesanos en los planes de desarrollo gubernamentales del eje cafetero*. Universidad Antonio Nariño.
- Novy, A., & Leubolt, B. (2005). Participatory Budgeting in Porto Alegre: Social Innovation and the Dialectical Relationship of State and Civil Society. *Urban Studies*, 42(11), 2023–2036. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/00420980500279828>
- OACP (2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Retrieved March 12, 2018, en: www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Texto-completo-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx
- Palacio, M., & Cifuentes, M. (2005). El departamento de Caldas: su configuración como territorio de conflicto armado y desplazamiento forzado. *Revista del Departamento de Trabajo Social*, (7), 99-110. Recuperado de: <http://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/8478>
- Prandi, M., & Lozano, J. (Eds.). (2010). *La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor*. Barcelona: Esade.
- Resolución 163 de 2011. (2011, June 1). *Diario Oficial 48087*, pp. 1-19. Bogotá. Retrieved from www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp?i=43048
- Unal. (n. d.). Innovación social. Recuperado el 31 de octubre de 2017, de: <http://extension.bogota.unal.edu.co/servicios/innovacion-social/>
- Unimedios (2014, April 24). El posconflicto requiere una gran dosis de innovación social. *Agencia de Noticias UN. Análisis*, pp. 1-2. Recuperado de: <http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/el-posconflicto-requiere-una-gran-dosis-de-innovacion-social.html>
- Unimedios (2016, December 4). La innovación social puede ser el puente en el posconflicto. *Agencia de Noticias. Ciencia y Tecnología*, pp. 1-3. Bogotá. Retrieved from <http://agenciadenoticias.unal.edu.co/en/detalle/article/la-innovacion-social-puede-ser-el-puente-en-el-posconflicto.html>
- Uniminuto (2017). Parque científico de innovación social. Recuperado el 31 de octubre de 2017 de www.uniminuto.edu/web/pcis

- Universidad del Rosario (2014). Taller innovación social. Retrieved October 31, 2017, from www.urosario.edu.co/Home/Principal/Eventos/Taller-Innovacion-Social/
- UPB (2017a). El posconflicto: una oportunidad para la innovación social en Colombia. Recuperado el 31 de octubre de 2017 de www.upb.edu.co/es/noticias/posconflicto-oportunidad.innovacion.para-pais-upb-bucaramanga
- UPB (2017b). V Simposio de Innovación Social y Tecnológica. Recuperado el 31 de octubre de 2017, de www.upb.edu.co/es/eventos/v-simposio-innovacion-social-tecnologica
- Villota, C. (2015, January 16). El posconflicto en Colombia, requiere una gran dosis de innovación social: comisión de paz. *Comisión de Paz*, pp. 1-3. Bogotá. Recuperado de www.senado.gov.co/historia/item/21775-el-posconflicto-en-colombia-requiere-una-gran-dosis-de-innovacion-social-comision-de-paz?tmpl=component&print=1



**DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL A GENERACIÓN
DE VALOR COMPARTIDO.
CASO SECTOR COOPERATIVO**

Gustavo Adolfo Rubio Rodríguez

Doctor en Administración, Atlantic International University
Docente Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué

Gustavo.rubio@campusucc.edu.co

Mario Samuel Rodríguez Barrero
Maestría en Dirección de Marketing, Universidad de Viña del Mar
Docente Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué
Mario.rodriguez@campusucc.edu.co

Raúl Vargas Herrera

Maestría en Administración de Negocios, Everest University, Estados Unidos
Docente Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué
Raul.vargash@campusucc.edu.co

Carlos Arturo Téllez Bedoya

Maestría en Administración, Universidad Nacional de Colombia
Docente Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá
Carlosarturo156@hotmail.com

Resumen

La finalidad de este manuscrito tiene por objeto presentar una reflexión alusiva a la responsabilidad social empresarial –RSE–, y el valor indispensable de gestión que esta representa en el modelo de gobernanza cooperativo, especialmente, cuando comparte valor a los diferentes actores sociales y el entorno. Es de resaltar, este trabajo se deriva de un proceso investigativo, cuya fundamentación teórica se enmarca en la contextualización de la responsabilidad social empresarial en el sector cooperativo colombiano, y el proceso de transición que se presenta entre la RSE y la generación de valor compartido, en la situación actual del país de posconflicto. La metodología empleada fue un estudio de caso bajo un enfoque mixto, dado que contiene elementos tanto cualitativos como cuantitativos, para fortalecer su amplitud y profundidad. Las conclusiones identificadas corresponden al reto que deben asumir las empresas cooperativas, en razón a que los asociados deben tomar la decisión de compartir valor, y definir esta como una estrategia institucional vinculante.

Palabras clave

Responsabilidad social empresarial, sector cooperativo, valor compartido, gobernanza.

Introducción

El actual momento que viven las empresas en el mundo como producto de la internacionalización y globalización, obliga a quienes tienen la responsabilidad de direccionarlas, a emprender e implantar estrategias cuyos resultados conduzcan al logro de los objetivos planeados. No es una tarea fácil, puesto que hay quienes introducen elementos suficientemente diferenciadores con los cuales alcanzan notables ventajas comparativas, consiguiendo desplazar a sus más inmediatos competidores. En este sentido, resulta atrayente y beneficioso adelantar pesquisas en materia de responsabilidad social empresarial, cuyo fin genere el suficiente discernimiento con el cual se logre mejorar el direccionamiento de las empresas del sector cooperativo, y la forma como estas generan valor a los actores sociales.

Para el caso colombiano es necesario determinar a través de estudios preconcebidos, cómo operan las organizaciones que conforman el sector cooperativo, para comprobar si efectivamente concurren empresas que no aplican verdaderas prácticas de responsabilidad social empresarial, más aun teniendo en cuenta que el sector cooperativo se presenta hoy por hoy como una alternativa de gobernanza a las empresas capitalistas, donde se promueve con ahínco la especialización, el énfasis en la rentabilidad y, por ende, no son interiorizados valores como el de la paz. Ello significa, que en este sector se requiere profundizar el análisis acerca del rol de los órganos máximos de dirección (asamblea, consejo de administración y gerentes o directores) en este tejido empresarial, comprendiendo con adeudo los propios principios con los cuales logran fundamentar su cultura organizacional. Esta afirmación se puede medir de forma práctica mediante sistemas de evaluación, por ende, inicialmente se lleva a cabo una autoevaluación entre pares, luego se adelantan evaluaciones internas y al final se realizan evaluaciones externas especializadas, midiendo la responsabilidad social empresarial.

Así pues, el presente trabajo investigativo tuvo por objeto presentar la trascendencia de la responsabilidad social empresarial desde la representación de valor compartido, cuyo ámbito de aplicación empresarial son las instituciones que conforman el sector cooperativo en el departamento del Tolima, Colombia. Este tipo de organizaciones actúan bajo ciertos modelos de gobernanza derivados de la implementación de los códigos de buen gobierno, los cuales son recomendados para dicho sector por parte de instancias superiores. La Superintendencia de la Economía Solidaria así lo evidencia cuando afirma mediante la carta circular n.º 005:

...La Superintendencia de la Economía Solidaria pone a disposición de las entidades bajo supervisión, la Guía de Buen Gobierno cuyo objetivo es brindarle a los asociados, directivos, administradores, órganos de control y vigilancia de las organizaciones solidarias, un instrumento de normativa interna, cuya aplicación pueda mitigar, minimizar y/o controlar los riesgos inherentes a la toma de decisiones, como también mejorar las acciones de responsabilidad social y las relaciones entre los asociados, órganos de administración, vigilancia y control y usuarios de los servicios que prestan las organizaciones del

sector solidario. El llamado a las organizaciones solidarias es tomarlo como una guía, y pasar de la teoría a la práctica, implementando el Código de Buen Gobierno al interior de cada organización solidaria. (2013, p. 3).

De otra parte, si bien las unidades de análisis están concentradas en el departamento del Tolima, esta puede ser una muestra representativa del sector cooperativo del país, en razón a que en dicho departamento se encuentran registradas formalmente ante la Cámara de Comercio 185 cooperativas, caracterizadas por la misma estructura organizacional que aquellas cooperativas que forman parte de las demás regiones de Colombia. Además, estas 185 empresas se encuentran ubicadas en los diferentes sectores de la economía nacional (salud, transporte, educación, financiero, etcétera), lo cual garantizaría la fidelidad de la muestra respecto a la población total. Cabe mencionar, el comportamiento de estas organizaciones en el país se percibe como homogéneo, por cuanto todas siguen el mismo patrón de conducta administrativa, ello significa una actuación unificada bajo las normativas que lo rigen.

Por otro lado, en el país uno de los elementos que desencadenó la violencia y ha generado continuas disputas es la pobreza, así como la desigualdad y la creciente acumulación de riqueza, la cual se da continuidad a través de un modelo de gobierno que concentra el poder en ciertos grupos y no en todos los actores inmersos en el tejido social (Estrada, 2015). En este sentido, la aplicación de los principios inmersos en la economía solidaria puede ser de vital importancia para el país, contribuyendo a dar respuesta a las problemáticas sociales, integrando valores como la asociatividad, la equidad y la inclusión, como elementos fundamentales para la reconciliación del país y el fortalecimiento de la paz en el escenario del posconflicto (Serna y Rodríguez, 2015).

También, se debe enunciar que esta investigación en materia metodológica se desarrolló a través del modelo de estudio de caso, el cual presentó elementos de corte cuantitativo y cualitativo; esta clasificación corresponde a lo conceptuado por Hernández y Mendoza (2008), (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010), según los cuales conviene que los estudios de caso se desarrollen bajo la recolección de información cuantitativa y cualitativa, con el fin de propender por el fortalecimiento del tema objeto de estudio.

Además, dentro de la categorización enseñada por estos autores, el estudio de caso se puede tipificar como un diseño mixto de integración completa, dado que se analizan los casos, en los cuales desde el inicio se apela a una representación mixta y se incorporan ambos enfoques en todo el proceso de indagación, recolección y análisis de información (Hernández y Mendoza, 2008, citado por Hernández et al., 2010).

Como conclusión inicial es necesario acotar que el reto en los próximos años para muchas empresas que conforman el sector cooperativo, debe centrarse en la revisión de su modelo de negocio y adaptarlo a esta nueva realidad de la RSE, que necesariamente tendrá que hacerse transversal e integrarse con el núcleo del negocio, a la vez que dé respuesta a las necesidades de la sociedad y especialmente al reto de construcción de paz que vivencia el país. La RSE, hoy más que nunca, no es filantropía, ni siquiera marketing, la RSE es un patrón comportamental de la organización, cuya estructura y práctica permite el beneficio mutuo y simultáneo tanto para la empresa como para los actores sociales, y, en general, para el entorno (Rubio, Da Silva, Aroz y Rodríguez, s. f.). Lo anterior, se traduce en la realización de acciones concretas por parte de la organización, así como, la proposición de estrategias de suma positiva según la teoría de juegos; esto es, «crear valor compartido».

Contextualización de la RSE en el sector empresarial y en el sector cooperativo colombiano

La RSE surge desde sus orígenes como una acción filantrópica (Caravedo, 2011) y asistencialista en iglesias y organizaciones sociales sin ánimo de lucro, lo cual fue acompañado con gestos de generosidad de personas acaudaladas. Las empresas cumplieron su responsabilidad con la sociedad contribuyendo en obras caritativas, sociales o de desarrollo en beneficio para la comunidad y algunos grupos de referencia, era un enfoque soportado en principios de caridad social. El cuidado y la conservación del ambiente cambian el rumbo de la visión tradicional de responsabilidad social, y la impone como una tarea y una responsabilidad del Gobierno, las organizaciones sociales, civiles y empresariales, así como de la sociedad y todos sus integrantes (Milán, Rosa y Villarroel, 2009).

El protagonismo que ha generado la responsabilidad social de las organizaciones frente a la sociedad, puede expresarse por la necesidad de que esta recupere la confianza que ha perdido el sector empresarial (Sievers, 2012); ello se evidencia cuando salen a la luz pública casos como el de Enron, relacionados con ocultación y destrucción de información (Valero, 2012).

Según Molina, Quesada y Ruiz (2011), en Colombia, se ha reconocido la importancia que ostenta la RSE como herramienta que permite generar para la empresa mejores resultados de orden administrativo, económico y de sostenibilidad ambiental. Sin embargo, la concepción que asume gran parte del tejido empresarial colombiano en el tema de RSE es ambigua, ello teniendo en cuenta lo novedoso que significa el abordaje de la RSE como campo disciplinar en algunos sectores económicos y derivando de ello la heterogeneidad de visiones que poseen los actores inmersos en el tejido social acerca de la misma (Téllez, 2015, 2017). Dicho concepto se ha enmarcado al interior de las empresas de mayor tamaño como dispositivo de carácter propagandístico y rentístico, siendo adoptado como factor determinante y generador de grandes dividendos (Rubio, Serna, Vargas y Camargo, 2014).

Diferentes empresas en Colombia abordan la RSE bajo otra perspectiva, presentando acciones netamente filantrópicas o de proyección social, cuando su significancia guarda una lejana similitud. Este argumento es soportado por el profesor Cortés García, cuando afirma:

...La RSE por ejemplo, no es una cuestión de imagen, es una cuestión de responsabilidad. Las empresas que adoptan estrategias nominalistas de RSE encuentran serias dificultades para encontrar proyecciones en el futuro. En segundo lugar, no es filantropía. En tercer lugar, la RSE no consiste solamente en ir más allá de las propias exigencias jurídicas. También implica ir más allá del mercado y de sus reglas de juego. El final no es la empresa responsable, es la empresa sostenible. (2009, p. 12).

Otro enfoque disperso, equívoco y contrario a la pretensión de la RSE, consiste en relacionarlo con el mercadeo social. Este se enseña como un mecanismo que influye e interviene activamente en el comportamiento del ser humano,

pero, no en toda ocasión bajo una acción que responda socialmente a sus necesidades. «Se considera muy importante resaltar el enfoque que se le debe dar al mercadeo social sobre el concepto de calidad de vida y la forma de trabajar en la modificación de actividades, comportamientos, actitudes y creencias de los individuos» (Arrubla, 2006:3).

Aunque el término RSE puede parecer que hace relación solo a las empresas del sector privado, también se aplica a las organizaciones del sector público y a las organizaciones de la economía social; las cooperativas por su parte están cada vez más implicadas en la promoción y el apoyo a la RSE (Superintendencia de Economía Solidaria, 2013). La mayoría de las definiciones de la RSE aportadas destacan fundamentalmente el diálogo y el comportamiento ético de las organizaciones hacia los distintos actores sociales y el entorno con que interactúa, bajo una concepción basada en el largo plazo y en algún concepto más o menos aceptado de sostenibilidad (Cortés, 2009).

Según Carroll (2008) el concepto de RSE presenta más de dos docenas de definiciones diferentes; más recientemente en este sentido, la ISO, Grupo Asesor Estratégico de Responsabilidad Social, no encontró una definición universal de las empresas u organizaciones sociales de la RSE. El Grupo hizo notar que las definiciones en general que más se destacan, hacen mención a las interrelaciones de los diferentes interlocutores sociales en las dimensiones ambientales, económicas y en minimizar los impactos de las organizaciones para equilibrar estas relaciones, con el fin de beneficiar a los individuos, las comunidades y la sociedad en general.

La RSE se emplea como una oportunidad y una estrategia que implica el concurso y la participación de todos los agentes que guardan acercamiento con la empresa mercantil, independientemente de su constitución y tamaño (Longinos, Arcas, Martínez y Olmedo, 2012), e incluso con las organizaciones como las cooperativas, fundaciones, corporaciones, asociaciones, etc. Aprovechando esta oportunidad y fortaleciendo el contexto competitivo dentro del cual ellas operan es imperativo determinar qué iniciativas de responsabilidad social empresarial deben abordar, para luego encontrar las diferentes formas

de hacerlo; en palabras de Porter y Kramer (2006) ello se comprende por el enlace entre la ventaja competitiva y la RSE.

Por lo general, se considera la RSE como un instrumento objeto de ser implementado exclusivamente en las grandes corporaciones y multinacionales, ya que estas tienen mayor impacto en la sociedad en virtud de su tamaño y el alcance de sus operaciones (Cortés, Romero y Zabala, 2012); pero, se considera que cualquier organización debe concientizarse de su papel frente a la sociedad, y adoptar medidas para ejercer su actividad en términos de la RSE. Algunos «requisitos institucionales» básicos para que la RSE sea posible según Matten y Moon (2008), son un mercado operativo funcional, instituciones gubernamentales legales y una sociedad civil capaz de definir e institucionalizar los valores sociales y sus preferencias, sin estas instituciones el riesgo de conducta empresarial irresponsable aumenta.

En este proceso de cambio han estado involucradas las empresas cooperativas, que desde su origen pretenden encarnar principios de democracia, equidad y mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados (Coque, 2008). Muy específicamente, hay que precisar que la misma responsabilidad social está fuertemente relacionada al concepto de ayuda mutua, la cual no solo está implícita dentro de los principios cooperativos, sino también, dentro de las normas que regulan la conducta cooperativa. La RSE como tal, significa que las personas que deciden asociarse, lo hacen con el propósito de promover la asistencia mutua y al mismo tiempo estar de acuerdo en asumir las responsabilidades, riesgos, deudas y obligaciones que puedan generarse del acuerdo de cooperación empresarial (Münkner, 2015).

Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo la metodología de estudio de caso, la cual contiene elementos de corte tanto cualitativos como cuantitativos. El componente cualitativo es significativo, porque a través de este se busca comprender un escenario social concreto, para posteriormente analizar el comportamiento de las variables asociadas a la problemática estudiada, cuyo caso corresponde a la RSE y a la creación de valor compartido. En este contexto,

se puede acotar que el desarrollo de la investigación permite analizar la realidad en un escenario actual, e interpretar fenómenos, que, dada su naturaleza, son difíciles de comprender únicamente a través de métodos cuantitativos (Rodríguez, Gil y García, 1996). Por su parte el componente cuantitativo, se convierte en un instrumento valorativo, por el producto que genera el uso de herramientas estandarizadas tales como pruebas, cuestionarios, escalas, observación estructurada y análisis de contenido con categorías preestablecidas.

Mertens (2005) concibe el estudio de caso como una investigación sobre un individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad, que es visto y analizado como una entidad. En este sentido, y siguiendo la clasificación de Stake (1995) entre estudios de caso intrínseco, instrumental y colectivo, esta investigación se puede enunciar como un estudio de caso intrínseco, en atención a que las unidades de análisis se seleccionaron teniendo en cuenta su aporte a la comprensión del tema investigado, y además por la pretensión en alcanzar un mejor entendimiento del caso en particular. Atendiendo al número de casos, esta investigación se clasificó en el diseño de casos múltiples, pues se utilizan dos casos paralelos para estudiar la realidad social que se desea explorar, describir, explicar y evaluar. Es fundamental precisar que en la elección de los casos, se tuvo presente que las cooperativas con las que se trabajó pertenecieran a diferentes sectores económicos, lo cual consintió ampliar el análisis y generar disímiles visiones del problema objeto de estudio.

Resultados

Es importante resaltar, como se mencionó en el apartado anterior, que este trabajo se fundamenta en el análisis de dos variables: RSE y valor compartido, cuya población estudiada está comprendida por todas las entidades que conforman el sector cooperativo del departamento del Tolima. Este tipo de organizaciones están vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, ente adscrito al Ministerio de Hacienda, y según el último informe publicado por esta institución, en Ibagué se concentra el mayor número de empresas cooperativas del mencionado departamento, las cuales corresponden a 265 organizaciones. Este referente evidencia el potencial que puede llegar a representar a nivel económico y social las empresas cooperativas en dicha

ciudad y los importantes impactos que pueden tener en el escenario actual de posconflicto, donde se requieren importantes esfuerzos como la vinculación de excombatientes y víctimas, la financiación de proyectos productivos y en particular, la sensibilización de toda la sociedad para dar recepción a quienes antes hacían parte del conflicto armado.

Para este trabajo fueron elegidos dos estudios de caso, cuyo proceso se desarrolló en dos cooperativas seleccionadas como parte de la muestra, estas fueron la Cooperativa Prosperando y la Cooperativa Covicombeima, las cuales se precisaron en atención a su amplia trayectoria y posicionamiento en el mercado. Es importante acotar que en este tipo de estudios no se busca representatividad de la muestra, es decir, a diferencia de otros estudios los resultados no son extrapolables a la población, pues precisamente la importancia del estudio de caso radica en la particularidad que representa cada uno de los elementos escogidos que, para efectos de esta disertación, corresponden a dos subsectores de la economía de la ciudad de Ibagué (financiero y seguridad), lo cual enriquece el análisis de las variables, debido a que sus contextos son diferentes.

Representación de prácticas de responsabilidad social y valor compartido

A continuación, se relacionan las dos prácticas estudiadas en materia de responsabilidad social y valor compartido. La primera, guarda referencia a la experiencia exteriorizada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperando, y la segunda, a la Cooperativa de Seguridad Covicombeima. Tanto una cooperativa como la otra, guardan intereses comunes en cuanto al concepto que les asiste en el tema de RSE, y la forma como de esta se deriva el valor que otorgan a los actores sociales y el entorno. Cabe mencionar, teniendo en cuenta el periodo en el cual se efectuó esta investigación no se tuvo en cuenta como variable inmersa en el proceso del posconflicto, no obstante, los resultados posteriores han sido analizados tomando como referencia los posibles impactos que la RSE puede conllevar para la construcción de paz.

Cooperativa Prosperando

Básicamente la Cooperativa Prosperando, por la misma naturaleza que ostenta este tipo de modelo de negocio, tiene inmerso dentro de todo su ejercicio la concentración de esfuerzos en beneficio de sus asociados. La cooperativa va efectuando su objeto social primario, y este consiste en el desarrollo de su actividad «captar y colocar dinero», pero el perfeccionamiento de dicha actividad transita articuladamente hasta generar el mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad. Esto es lo que prima para la cooperativa en el concepto de RSE.

No solamente las cooperativas y demás entidades con ánimo o sin ánimo de lucro, defienden sus intereses a fin de ampliar y fortalecer sus ejes patrimoniales y financieros, sino, que concentran también sus esfuerzos para que acaezca una contribución a la comunidad. En este sentido, la Cooperativa Prosperando ha venido desplegando su labor social en favor de la sociedad, pero últimamente esta entidad se ha inquietado por ir más allá del simple hecho de generar cualquier actividad benéfica, la cual estaba enfocada en hacer más educación cooperativa. Hoy en día, la cooperativa acude asiduamente a las poblaciones menos favorecidas, tratando de crear en estas un impacto con el cual se forje un impulso y el crecimiento de la misma.

Al consolidarse la Cooperativa Prosperando en la ciudad de Ibagué, se dio apertura a otras oficinas en las ciudades de Chaparral y Mariquita (departamento del Tolima), a través de las cuales se amplió la cobertura a municipios aledaños; luego, cada vez que se presenta la distribución de excedentes y se fortalecen los fondos sociales de la cooperativa, se extrae una porción de estos para deferir con las comunidades, con el propósito que sea la propia comunidad quien dé cuenta de todo el beneficio que están recibiendo por parte de la cooperativa, sin necesariamente tener la calidad de asociado. Entonces, lo que se busca es el fortalecimiento de la imagen institucional de la cooperativa, a través del beneficio social que están recibiendo las comunidades, porque, según la gerente de la entidad «no hay mejor forma de adelantar una campaña publicitaria, que esta».

Sumado a lo anterior se esgrime que este tipo de publicidad está más ligado al modelo cooperativo, que el simple hecho de estar desarrollando la actividad como tal, los créditos los colocan todas las entidades financieras en unas condiciones y en unos tiempos de respuesta tal vez mejores que los que ofrece una cooperativa financiera. Con el ahorro sucede lo mismo pero la Cooperativa Prosperando va más allá de colocar y captar dinero, pues la generación de excedentes económicos se distribuye en la comunidad en general, si se benefician los asociados dentro de esta comunidad sería lo apropiado, porque son ellos los dueños de la organización, pero el beneficio debe estar por encima de satisfacer exclusivamente la necesidad de los asociados, se trata de amparar a una colectividad globalmente con el fin de generar en ella un alto impacto.

El planteamiento de la Cooperativa Prosperando y lo que tiene ideado seguir desarrollando es visualizar desde su interior la posibilidad de erigir unas redes, las cuales estén conformadas por colaboradores, proveedores, etc., en razón a que a la hora de construir el balance social, se debe repensar en estos actores sociales e integrarlos para desarrollar en ellos la consolidación de los grupos familiares a los que pertenecen. En el futuro, la cooperativa está buscando a través de su modelo empresarial ofertar algo diferente a lo que brinda una entidad financiera, este ofrecimiento consistiría en el afianzamiento del asociado conjuntamente su grupo familiar a la cooperativa.

Complementando lo previamente descrito, la intención es que se vinculen a la cooperativa los núcleos familiares completos de los cuales forma parte el asociado, es decir, que la vinculación se ejerza como producto de la unión, para que la cooperativa contribuya en el desarrollo, no de una unidad personal, sino, de un grupo familiar. Al tener el grupo familiar vinculado, lo que se aspira próximamente es revisar los beneficios sociales que se van a instituir para ellos, de esta manera, se van integrando todos los actores que son de interés para la entidad. En concreto, la pretensión es que en los años venideros se reconozca a la Cooperativa Prosperando, como la cooperativa de ahorro y crédito que genera un gran impacto en el núcleo familiar y no únicamente en la persona.

Finalmente, la Cooperativa Prosperando tiene definido un modelo de negocios conocido como Canvas, que es precisamente la interacción entre los subsis-

temas que se construyen para alcanzar la promesa de valor; esta promesa de valor no está dirigida únicamente para el que ahorra, sino, está dirigida para la familia. La estrategia planteada se conoce como la conformación de redes y se presenta a través de la vinculación de quienes componen un núcleo familiar: un padre debe ser el promotor para que su hijo se vincule a la cooperativa y el hijo promueve la vinculación de su hermano; asimismo, el hermano promueve la vinculación de su esposa y así sucesivamente.

Cooperativa Covicombeima

De otro lado, la segunda experiencia abordada en este trabajo corresponde a la Cooperativa Covicombeima, cuyo objeto social consiste en brindar servicios de seguridad a través de la vigilancia privada, para esta cooperativa la RSE ha sido parte de su filosofía, la cual radica en cumplir lo que imprime el concepto de equidad, solidaridad y ayuda mutua. Todos los excedentes que genera la cooperativa están encaminados hacia los colaboradores, dentro de la búsqueda por fortalecer las insuficiencias de su núcleo familiar; como, por ejemplo, socorrerlos en la consecución de vivienda y apoyarlos en su formación educacional con desembolsos económicos para el pago de las matrículas, que van desde el inicio hasta el final de la formación profesional. Este apoyo requiere de unas exigencias por parte de la cooperativa, las cuales consisten en que el colaborador obtenga una calificación que supere el promedio de 3.5, dicho requisito evidencia el compromiso del colaborador con la entidad.

La práctica ilustrada en el párrafo anterior, pone de manifiesto ciertas circunstancias que afirman la RSE en la que actúa la cooperativa Covicombeima. En palabras de su gerente «es un gana-gana», en el que la cooperativa apoya educacionalmente al colaborador, esperando de este su formación como persona y como profesional, con la cual asimismo le contribuye al crecimiento de la empresa. Otra forma de apoyar al empleado, se presenta cuando este tiene la necesidad de atender una imperiosa necesidad económica, la entidad procede a brindarle un crédito a una tasa de interés muy baja. Este tipo de conductas reflejan que al final del ejercicio de cada año fiscal, los estados financieros y todas las utilidades se canalicen a través de los colaboradores de la cooperativa. La pretensión es que finalmente se cumpla esa responsa-

bilidad que pregona la cooperativa acerca de compartir valor, y que todo se encuentre encauzado hacia el colaborador, de lo contrario la organización no tendría sentido ni razón de ser.

Cabe mencionar, los modelos empresariales cooperativos han sido cambiantes, en atención al comportamiento negativo que han asumido ciertas cooperativas; estas han sido estigmatizadas, y lamentablemente por situaciones externas generadas a nivel gubernamental, como por ejemplo las próximas reformas tributarias que se implementarán en Colombia, perturbarán muy seguramente al sector cooperativo en materia presupuestal. Según el gerente de Covicombeima, «el Gobierno ha olvidado que la filosofía de las cooperativas es la solidaridad, la ayuda mutua y la equidad; por lo tanto, la concentración de ingentes esfuerzos concentrados para separar el recurso económico destinado para atender la responsabilidad social, tenderá a desaparecer, así como el funcionamiento de algunas cooperativas».

En otras palabras, las nuevas reformas tributarias van a perjudicar las organizaciones que conforman el sector cooperativo en el tema de responsabilidad social, debido a que, si las cooperativas vienen trabajando en función del colaborador, es decir, forjando una responsabilidad interna, la ley les va a restringir el recurso que han reservado para los beneficios que actualmente tiene concedidos a este. Es decir, se sacrificaría el presupuesto que tienen asignado para suplir las necesidades de los trabajadores asociados, por cumplirle al Estado. Existe una manera de distribución de recursos que las cooperativas deben adelantar según la normatividad, bajo el cumplimiento de la Ley 79 (1988), el Decreto 4588 (2006) y la Ley 1429 (2010), la Cooperativa Covicombeima propugna porque sus acciones giren en torno a las normas que lo regulan, con el fin de que se cumpla y se protejan los beneficios del asociado.

Otro beneficio que se otorga a los colaboradores de Covicombeima en observancia a las prácticas de responsabilidad social, consiste en el convenio que se está desarrollando con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Dicho convenio se fundamenta en una capacitación que se facilita a las esposas de los trabajadores de la cooperativa, relacionada con el manejo de máquinas planas, con el propósito de que a ellas se les enseñe la confección de los

uniformes de los vigilantes. El propósito de la gerencia junto con el consejo de administración es que en el corto plazo sean ellas las que desarrollen la actividad de confección y consigan vender las prendas a la cooperativa para generar así una utilidad adicional al núcleo familiar.

Los contextos del entorno cooperativo son muy complejos para el desarrollo de verdaderas prácticas de RSE, en razón a lo que día a día se percibe: la estigmatización de las cooperativas y el concepto cooperativo tergiversado utilizado para actuaciones diferentes al objeto por el cual fueron creadas, así como la amenaza de impuestos, la amenaza de controles y burocracia, como también los temas de gobernabilidad. Pese a estas divergencias, la Cooperativa Covicombeima se encuentra consolidada económica y financieramente, de igual forma, todo lo que pueda suceder en Colombia en materia presupuestal invita a replantear las estrategias de responsabilidad social, de lo contrario se perdería vigencia en un mercado tan competitivo como el presente.

Discusión

La RSE como se describe en la primera parte de este trabajo es mucho más que caridad pública, o asistencialismo, responde a las necesidades de los actores inmersos en el tejido social y el ambiente, correspondiendo con un rol activo de la organización en pro de los más necesitados. Hoy en día la visión preponderante identifica este concepto como una estrategia empresarial, la cual debe incorporarse en la cultura organizacional de las empresas, en su ADN y por tanto una manera institucional de pensar, entender y actuar frente a las interrelaciones con el entorno social, económico y ambiental. Efectivamente, la responsabilidad social puede comprenderse como un elemento estratégico de gestión, fundamental para asegurar la sostenibilidad y sustentabilidad de las empresas y, por tanto, generadora de valor para sus accionistas y grupos de referencia; de acuerdo a Aktouf (2009, citado por Téllez, 2017) la RSE debe orientarse hacia:

...una administración de sentido común y de lógicas diversas que movilice y asocie un máximo de personas a la organización, una administración de cercanía, solidaridad, de mayor equidad, de distribución y difusión de

información, una actitud de rechazo a los dogmas, de sensibilidad hacia los saberes más fundamentales y menos instrumentales, de sensibilidad hacia la calidad de vida y el bienestar de las personas, de mayor humildad, prudencia y apelación a todas las inteligencias disponibles, un reconocimiento de la existencia de contradicciones internas y externas, una búsqueda de reintegración del sentido al trabajo, de superación de la alienación, una búsqueda de autonomía relativa para todos, una búsqueda de la polivalencia de los colaboradores, una administración basada en la confianza y el diálogo. (n. d.)

A partir de la visión propuesta y en aras de que ella integre la óptica estratégica predominante en la actualidad, han aparecido instrumentos que miden una gestión volcada a la responsabilidad social, tales como la presentación de reportes de sostenibilidad (Global Reporting Initiative. GRI), y la Norma ISO 26000 (2010), los cuales constituyen el marco normativo internacional sobre los principios y prácticas de la RSE a nivel global de mayor relevancia, considerados aplicables a todo tipo de organizaciones con ánimo y sin ánimo de lucro. Sin embargo, GRI e ISO 26000, o cualquier otro esquema de medición que se elija, deben ser considerados como guías y metodologías valiosas que apoyan en medir los avances en la implementación de acciones de RSE, y a partir de ello diseñar políticas de mejoramiento para el logro de la estrategia de RSE. Pero dichas guías no pueden convertirse en imperativos de gestión, ni camisa de fuerza que orienten las acciones gerenciales hacia un objetivo único, el desafío principal es incorporar los principios y la estrategia de RSE a las necesidades de su contexto e interiorizadas como una manera de pensar y actuar.

Para lograr incorporar la RSE en el ADN organizacional debe procurarse la implementación inicialmente de la RSE en el ámbito interno de la empresa, sustentada en principios de equidad, diversidad, inclusión y justicia en la gestión del talento humano, así como, la creación de normas que velen por la salud psicosocial de los colaboradores y el cuidado por el ambiente interno. Otros factores que intervienen en el logro de este objetivo están basados en la remuneración justa, las oportunidades de crecimiento, el reconocimiento, la participación activa, la cogestión, el respeto por el trabajo realizado, el reconocimiento de los sindicatos, el trato digno, la estabilidad laboral, la

recuperación de la confianza entre todos los actores de la organización y el respeto por el entorno (Téllez, 2015). En conclusión, el ambiente laboral es el punto de partida para que una organización asuma la dimensión externa de la RSE, comprendiendo el tejido social de manera sistémica. Una organización no puede dar hacia afuera lo que no vive, aprecia y reconoce internamente (Serna y Rubio, 2016), he aquí un primer elemento de valor compartido con el colaborador.

La dimensión externa de la RSE debe concentrar igualmente nuevos desafíos que la conviertan en una estrategia para compartir valor con los actores sociales y la sociedad en general. El capitalismo se ha convertido en un sistema no solo muy criticado, sino además, ha sido acusado de ser la causa del detrimento social, económico y ambiental. En este contexto, las empresas alrededor del mundo han sobrevivido a expensas de la sociedad mundial y sus comunidades, a cambio, ellas deben redefinir sus propósitos creando «valor compartido». Lo anterior, según (Porter y Kramer, 2011) puede ser experimentado de tres formas: renovando o rediseñando sus productos y mercados, redefiniendo productividad en la cadena de valor y construyendo agrupación de apoyo industrial y/o comercial del mismo sector, que a la vez puedan recibir apoyo del Gobierno dentro de la misma región donde opere.

El papa Francisco en su carta encíclica *Laudato Sí* (2015), dentro de un concepto de valor compartido señala que la humanidad todavía puede trabajar de manera conjunta con el fin de «construir nuestra casa común». Así mismo, insta al cambio de un sistema que excluye a muchos y es preferente con pocos, ello evidencia que, como en una casa común, todos puedan gozar y compartir el valor de una sociedad incluyente. Cabe destacar, el Papa agrega en sus diferentes intervenciones que todavía hay tiempo para alcanzar un desarrollo sostenible e integral, porque las cosas pueden cambiar si construimos una sociedad que abandona la exclusión que hoy la caracteriza.

En esta asunción de la RSE como valor compartido, ella debe trascender de ser solamente una cultura organizacional, en la cual el mandato de los accionistas o de los asociados lo transmiten a través de instancias superiores como la asamblea general de accionistas o la asamblea general de asociados, a la junta

directiva o al consejo de administración. Ello implica, que en el centro de la estrategia empresarial se establezca un propósito que va mucho más allá de tener un desempeño financiero, para tener un impacto concreto, tangible, social y ambiental. Los directores o gerentes responsables de ejecutar las estrategias que le definen los entes superiores de gobierno corporativo, tienen la responsabilidad, y se les exige cumplir con sus compromisos de lograr resultados financieros y de rentabilidad, al igual que ser social y ambientalmente responsables; se aplica aquí el principio de responsabilidad fiduciaria ampliada, pues los gerentes y administradores por decisión de sus dueños tienen la obligación de comprometerse con el desempeño social y ambientalmente responsable de la empresa que lidera.

Es la disposición de los asociados, en el caso del sector cooperativo, la que rompe la barrera para hacer de la RSE una estrategia legítima, para que las empresas compartan valor con sus miembros internos, grupos de referencia y la sociedad en general; por consiguiente, el concepto de creación de valor compartido, hace referencia a un nuevo enfoque a la hora de abordar la responsabilidad social por parte de las empresas. Se puede afirmar entonces, que este concepto es parte integral de la rentabilidad y de la posición competitiva de la empresa, así como su impacto en la sociedad en general, representado en una sociedad incluyente y consciente del rol activo para con las problemáticas que acontecen en el mundo.

Ahora pues, infortunadamente no existe una variedad importante de investigaciones especializadas que permitan concluir con severidad acerca del impacto que podría tener el sector cooperativo del país en el proceso del posconflicto. No obstante, es claro que el rol de cualquier organización en el escenario de la construcción de paz en un país es fundamental, ello ya que de no ser así su desarrollo fracasará, más aun teniendo en cuenta que,

...las organizaciones empresariales influyen directamente en el funcionamiento del país, en los habitantes del mismo, impactan en los indicadores económicos y en la realidad socioeconómica del país, por ello es de vital importancia la participación de las organizaciones(...) La Responsabilidad Social Empresarial, es el medio por el cual las organizaciones desarrollaran las

acciones que generaran impacto social, trabajando de la mano del gobierno en el desarrollo y ejecución de procesos que garanticen la inserción al mundo laboral de los actores del conflicto (victimas e insurgentes), lo cual generara bienestar y una mejora en la calidad de vida de los actores involucrados y un aumento de la productividad en las organizaciones. Es deber social y moral más que legal, que las organizaciones sean eje fundamental del plan de desarrollo socioeconómico en el postconflicto. (Barrrios, 2016, p. 55).

De igual manera, estudios acerca del impacto de la RSE en el sector cooperativo ponen de manifiesto que los alcances del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, así como, sus principios y posibilidades viran en torno a valores como la justicia, libertad, equidad y solidaridad, aspectos que la economía solidaria ha interiorizado en el país y bajo los cuales pueden desarrollarse programas que a través de la RSE incluyan iniciativas especialmente orientadas a la solución de conflictos, distando así de la respuesta histórica en que se han dado las relaciones de poder, caracterizadas por la polarización, la violencia y el enfrentamiento (Doria, 2017).

Finalmente, debe enunciarse que existe la necesidad imperante que este tipo de iniciativas sean de mayor publicidad en el ámbito nacional, lo anterior, ya que existe cierto temor por parte de las organizaciones en vincularse por el posible impacto negativo que ello signifique en su imagen. Sin embargo, estudios como el efectuado por Meza (2007) han identificado que la responsabilidad social genera importantes beneficios económicos para las empresas, a la vez que juega un rol determinante en la supervivencia, crecimiento y rentabilidad del negocio, de la mano con el mejoramiento de la reputación para la marca y ciertos beneficios tributarios. En este sentido, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 1650 de 2017, ha definido una política de apoyo a los empresarios que desarrollen operaciones en las Zonas más afectadas por el Conflicto Armado –Zomac–, lo cual se constituye en un aspecto llamativo para las cooperativas que deseen ingresar a nuevas regiones.

Por último, es imperante señalar la necesidad que existan procesos de sensibilización y formación, acerca de los elementos previamente enunciados,

orientados específicamente a las organizaciones del sector cooperativo. Además, dichos procesos pueden ser ampliados a toda la sociedad, incorporando la relevancia del cooperativismo como un sector que a partir de la perspectiva de la solidaridad contribuya al desarrollo de las potencialidades de las comunidades, particularmente de aquellas que han tenido un mayor impacto negativo en el conflicto.

Conclusiones

La RSE, hoy más que nunca, es un modelo de negocio; es esencialmente una redistribución de beneficios orientados a los diversos actores insertos en el tejido social, los cuales no tienen que ver con la maximización de la riqueza. La RSE es comercio justo, es ser buen ciudadano, es ser corporativo, es cumplir con las metas empresariales y también cumplir con la sociedad. Por su parte, el valor compartido tiene que ver con la asignación total del presupuesto destinado para atender la promoción del impacto social de la empresa. No obstante, esta concepción aún no ha sido objeto de efectiva aplicación en Colombia, pues las estrategias de RSE son mucho más complejas y exigentes de implementar en países subdesarrollados, debido especialmente a deficiencias sociales, administrativas y económicas, que estos resisten.

Para trascender del concepto tradicional de RSE a uno en el cual el reto de las empresas del futuro sea compartir valor, se requiere de una decisión de los dueños o de los asociados que componen el sector cooperativo y de incorporar este concepto como una estrategia empresarial vinculante, la cual forme parte integral del mandato de los órganos máximos de dirección de una cooperativa. Se debe persistir, en que exista una fuerte tendencia en impulsar con mayor importancia a las funciones sociales propias de las cooperativas, así como su rol, con el propósito de superar los intereses de sus miembros, y enfatizar en la «responsabilidad social» como resultado del trabajo cooperativo, más aún con los retos y oportunidades que significa el proceso de posconflicto en el país.

Por otro lado, el consejo de administración, el comité de vigilancia y control, al igual que los administradores, deben propender porque los resultados fi-

nancieros y el valor que generan las organizaciones pertenecientes al sector cooperativo redunden para beneficio de los actores sociales y el entorno con igual grado de importancia y equidad entre quienes lo componen. Por ende, los logros que obtiene el sector no se deben internalizar; sino, presentar como parte integral de la rendición de cuentas ante los administradores y los órganos de gobierno corporativo y de control de gestión empresarial. Este es un reto determinante para la gestión organizacional que se debe asumir, si se quiere que esa casa común sea un espacio incluyente, donde el valor sea compartido a los dueños, a los asociados y a la comunidad en general.

Referencias

- Arrubla, J. (2006). ¿Qué es el mercadeo social? *Lupa Empresarial*. 3, pp. 1-19
- Barrios, R. (2016). *Responsabilidad social empresarial: el papel de las organizaciones en el posconflicto colombiano*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayos/article/download/61276/57712>
- Caravedo, B. (2011). *La responsabilidad social de la empresa en América Latina*. New York: Fomin.
- Carroll, A. (2008). *Una historia de la responsabilidad social de las empresas: conceptos y prácticas*. El Manual de Oxford de la Responsabilidad Social Corporativa, pp. 9-46.
- Carta Encíclica *Laudato Si'* (24 de mayo de 2015). Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común.
- Colombia. Congreso de la República de Colombia. (2016). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Bogotá, Colombia. Recuperado de www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Texto-completo-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx
- Colombia. Presidencia de la República. Decreto 4588 (27 de diciembre de 2006). Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. *Diario oficial*. Bogotá: 46494.

- Colombia. Presidencia de la República. Decreto 1650 (9 de octubre de 2017). Por el cual se adiciona un artículo a la Parte 1 del libro 1; la Sección 1 al Capítulo 23 del Título 1 de la Parte 2 del libro 1 y los Anexos N.ºs. 2 y 3, al Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar los artículos 236 y 237 de la Ley 1819 de 2016. Bogotá.
- Colombia. Presidencia de la República. Ley 79 (23 de diciembre de 1988). Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa. *Diario oficial*. Bogotá: 38648.
- Colombia. Presidencia de la República. Ley 1429 (29 de diciembre de 2010). Por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo. *Diario oficial*. Bogotá: 47937.
- Coque, J. (2008). Puntos fuertes y débiles de las cooperativas desde un concepto amplio de gobierno empresarial. *Revesco: Revista de Estudios Cooperativos*. 95, pp. 65-93.
- Cortés, F. (2009). *Buen gobierno de las empresas. Cuadernos de Divulgación de la RSC y de la Ética Empresarial En Cajamar Caja Rural*. 6 Colección. Almería: Cajamar Caja Rural, pp. 1-36.
- Cortés, Á., Romero, G. y Zabala, N. (2012). *Documento referencial para la implementación de un programa de responsabilidad social empresarial en cooperativas*. Recuperado el 22 de mayo de 2017, de <http://repository.ean.edu.co/handle/10882/1890>. Biblioteca Digital.
- Doria, T. (2017). Cooperativismo y justicia social para el postconflicto: una integración desde la economía solidaria para la generación de espacio de paz desde las regiones. *Cooperativismo y Desarrollo*, 25 (112).
- Estrada, J. (2015). *Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada. Elementos para una interpretación histórica del conflicto social y armado*. Bogotá: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Recuperado de www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/estradaJairo.pdf
- Minerva. Universidad Escuela de Administración de Negocios.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. 5ª ed. México, D.F.: Mc Graw Hill, pp. 1-613.

- Longinos, J., Arcas, N., Martínez, I. y Olmedo, I. (2012). Transparencia, gobierno corporativo y participación: claves para la implantación de un código de conducta en empresas de economía social. *Revesco: Revista de Estudios Cooperativos*. 108, 86-112.
- Matten, D. y Moon, J. (2008). 'Implicit' and 'Explicit' CSR: a Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility. *Academy of Management Review*. 33, 2, 404-424.
- Mertens, D. (2005). *Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity with Qualitative, and Mixed Methods*. 2nd ed. California: Sage Publications.
- Mesa, A. (2007). *La responsabilidad social empresarial como factor de competitividad*. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
- Milán, N., Rosa, M. y Villarroel, M. (2009). Responsabilidad social y medio ambiente. El rol del Estado. Tesis de Maestría en Gerencia y Administración. Montevideo: Universidad de la República. 121 p.
- Molina, V., Quesada, J. y Ruiz, I. (2011). Contexto de evolución conceptual de la responsabilidad social corporativa –RSC– en Colombia. Propuesta de un sistema econométrico de medición de índices de RSC en las pymes colombianas. *Revista Saber, Ciencias y Libertad*. 6, 2, 19-34.
- Münkner, Hans-H (2015). *Co-operative Principles and Cooperative Law*. 2nd ed. Zürich: Lit Verlag.
- Norma ISO 26000 (2008). *Guía de responsabilidad social. «Modelo que proporciona las guías para el desarrollo de la responsabilidad social en cualquier Organización»*. 1.^a ed. Bogotá: Global Standards Certification. 8 p.
- Porter, M. y Kramer, M. (2011). *Creating Shared Value*. Recuperado el 15 de mayo de 2017, de <https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value>.
- Porter, M. y Kramer, M. (2006). *Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility*. Recuperado el 12 de mayo de 2017, de <https://hbr.org/product/strategy-and-society-the-link-between-competitive-advantage-and-corporate-social-responsibility-hbrbestseller/R0612D-PDF-ENG>

- Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Granada: Ediciones Aljibe, 1-37.
- Rubio, G., Da Silva, S., Hernández, L. y Rodríguez, M. (s.f.). Responsabilidad social empresarial y valor compartido: ¿estrategias competitivas para el sector cooperativo colombiano? Recuperado de <https://even3storage.blob.core.windows.net/processos/ec3db9dc3b774ea783a0.pdf>
- Rubio-Rodríguez, G., Serna, H., Vargas, R. y Camargo, L. (2014). Caracterización de la responsabilidad social corporativa en el sector cooperativo del departamento del Tolima. Proyecto de investigación no publicado. Ibagué: Universidad Cooperativa de Colombia.
- San-José, L. y Retolaza, J. (2012). Participación de los stakeholders en la gobernanza corporativa: fundamentación ontológica y propuesta metodológica. *Universitas Psychologica*. 11, 2, 619-628.
- Serna, H. y Rodríguez, M. (2015). El sector solidario como alternativa para el desarrollo social e inclusivo en el posconflicto colombiano. *Economía Social y Solidaria*, 23 (107), Recuperado de <https://doi.org/10.16925/co.v23i107.1250>
- Serna, H. y Rubio-Rodríguez, G. (2016). La gobernabilidad en el sector cooperativo: una reflexión acerca de su verdadera implementación. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*. 2016, 48, 239-256 Sievers, B. (2012). Confiando en la confianza contra toda razón. *Revista AD-Minister*. 11, 25-41.
- Superintendencia de Economía Solidaria (2013). *Guía de buen gobierno para las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria*. Recuperado el 25 de mayo de 2017, de www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/normativa/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf
- Stake, R. (1995). *The Art of Case Study Research*. New York: Sage Publications.
- Téllez, C. (2015). *Aproximación a la responsabilidad social empresarial hotelera en Colombia: reflexiones a partir de la perspectiva cualitativa*. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
- Téllez, C. (2017). Responsabilidad social empresarial turística en MIPYMES de Colombia: el caso del Hotel la Mansión. *Revista Interamericana de Ambiente y Turismo - RIAT*. 13, 1, 117-128.

Téllez, C. & Téllez, C. (2017). Responsabilidad social empresarial hotelera: estudio de caso en las universidades colombianas. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*. Abril de 2017. 1-14.

Valero, V. (2012). *El lado oscuro del capitalismo: el caso Enron*. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1-456.



ANEXO I: EL POSCONFLICTO EN IMÁGENES

En este apartado se presentan algunas imágenes que el caricaturista Edilberto Ardila González «Argón», autorizó su uso para la publicación de este texto y que denotan el proceso que ha seguido la aprobación de los acuerdos de paz en el país y su implementación en el contexto actual.

El mierdelón que armó Juan Carlos Vélez



Los nuevos acuerdos



Momento histórico, el Presidente de Colombia recibe el premio Nobel de paz



Y que no le vayan a echar tierra al asunto



Con mucha dificultad se aprobó la JEP



Posconflicto



La próxima marcha Uribista



Palabras más, palabras menos



El mensaje papal



De nunca acabar



Para tener paz



Dios los hizo y ellos se juntan



La paz en Colombia



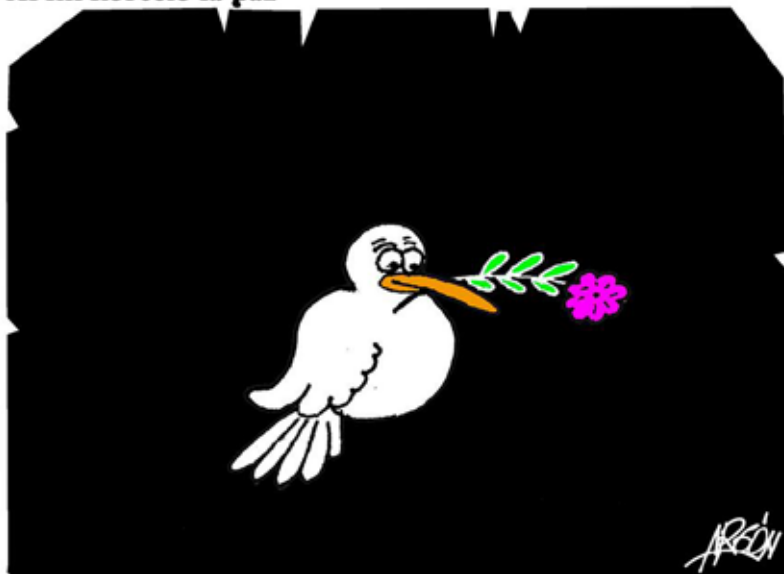
El nuevo escudo debería ser así



ACERCA DEL AUTOR

Carlos Arturo Téllez Bedoya, compilador y autor de este libro, es investigador del grupo de investigación GODH de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Su experiencia investigativa en temáticas de Administración y Responsabilidad Social Empresarial ha permitido la publicación de numerosos artículos y la socialización en eventos de carácter académico. Igualmente, su formación se ha consolidado como Administrador de Empresas y profesional en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Autónoma de Colombia; así como, Magíster en Administración de la Universidad Nacional de Colombia. También, ha sido profesor de diversas instituciones de educación superior reconocidas.

Al fin floreció la paz



Este libro se terminó de imprimir
el 30 de octubre de 2018
en la Unidad de Comunicaciones y Protocolo de la
Universidad de San Buenaventura, Bogotá.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con

